

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO



**MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD**

TESIS:

El razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo en los procesos de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado, en el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes, periodo 2016-2022.

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para obtener el grado académico de: MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD.

AUTOR:


Abog. Tatiana Elizabeth Torres Saldarriaga

ASESOR:

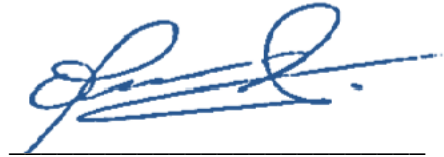
Dr. Gilmer Alarcón Requejo

LAMBAYEQUE – 2024

El razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo en los procesos de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado, en el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes, periodo 2016-2022



Abog. Tatiana Elizabeth Torres Saldarriaga
Autor



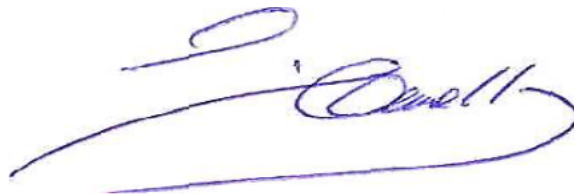
Dr. Gilmer Alarcón Requejo
Asesor

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para obtener el Grado académico de: MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD.

Aprobado por:



Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo
Presidente del jurado



Mg. Carlos Manuel Antenor Cevallos De Barrenechea
Secretario del Jurado



Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernández
Vocal del Jurado

El razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo en los procesos de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado, en el Juzgado de Familia Permanente de

INFORME DE ORIGINALIDAD

14%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

4%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

3%

2

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

2%

3

scc.pj.gob.pe

Fuente de Internet

1%

4

repositorio.usanpedro.edu.pe

Fuente de Internet

1%

5

repositorio.uladech.edu.pe

Fuente de Internet

1%

6

vsip.info

Fuente de Internet

1%

7

idoc.pub

Fuente de Internet

<1%



Prof. Dr. Gilmer Alarcón Requejo
DNI N°16436848-ASESOR DE TESIS



Recibo digital

Prof. Dr. Gabriel Alvarado R.
Anaya

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Tatiana Elizabeth Torres Saldarriaga
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: El razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el i...
Nombre del archivo: Tatiana_Torres_Saldarriaga.docx
Tamaño del archivo: 1.36M
Total páginas: 122
Total de palabras: 43,833
Total de caracteres: 228,222
Fecha de entrega: 13-ene.-2024 08:04p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 2270552506



CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Gilmer Alarcón Requejo, asesor de tesis del trabajo de investigación, de la estudiante Tatiana Elizabeth Torres Saldarriaga.

Titulada:

El razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo en los procesos de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado, en el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes, periodo 2016-2022, luego de la evaluación exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 14% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 16 de febrero de 2024



Dr. Gilmer Alarcón Requejo
Departamento Académico de Derecho Público
DNI: 16436848
Asesor

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

079

Siendo las 11.00 horas del día Cinco de Febrero del año Dos Mil Veinticuatro

en la Sala de Sustentación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del Jurado, designados mediante Resolución N° 265-2023-EPG de fecha 17/03/2023, conformado por:

<u>Dn. Freddy Widmar Hernández Rengifo</u>	PRESIDENTE (A)
<u>Mg. Carlos Manuel Anzor Cevallos de Barrenechea</u>	SECRETARIO (A)
<u>Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernández</u>	VOCAL
<u>Dn. Gilmer Alarcón Nequejo</u>	ASESOR (A)

Con la finalidad de evaluar la tesis titulada "El razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo en los procesos de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado Juzgado de familia Permanente de Tumbes. Período 2016-2022".

presentado por el (la) Tesista Tatiana Elizabeth Torres Saldaniaga sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 009-2024-LEPG de fecha 23 de Enero del 2024.

El Presidente del jurado autorizó del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo Diecisiete (17) puntos que equivale al calificativo de Buena.

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de: Maestra en Derecho con mención en Constitucional y Gobernabilidad.

Siendo las 12.29 horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta:


PRESIDENTE


SECRETARIO


VOCAL


ASESOR

DEDICATORIA:

A Dios por todas las cosas maravillosas que me ha brindado en la vida; y, a mi esposo Julio César Zúñiga Vallejos e hijos por ser el motor y motivo de mi existencia.

La autora.

AGRADECIMIENTO:

Doy gracias a Dios y a la vida por haberme puesto en este camino y ejercer la abogacía; y, agradezco al Dr. Gilmer Alarcón Requejo por haberme guiado y asesorado en el desarrollo de la presente tesis.

La Autora.

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.	Resumen	12
2.	Abstrat.....	13
3.	Introducción.....	14 - 15
4.	Realidad problemática.....	16
5.	Planteamiento del problema.....	17
6.	Formulación del problema.....	17
7.	Justificación e importancia del estudio.....	17
8.	Importancia	17
9.	Objetivos.....	18
10.	Hipótesis y Variables.....	19
11.	Tipo de Investigación.....	19 - 20

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

12. Antecedentes del Problema.....	20- 23
13. Base Teórica:	
13.1. El internamiento preventivo por infracción a la ley penal por el delito de robo agravado:	
13.1.1. El proceso de infracción a la ley penal Peruana	
13.1.1.1. Regulación del proceso de Infracción a la ley penal peruana, en el Código de Niños y Adolescentes con sus modificaciones por el Decreto Legislativo N° 1204.....	24 – 30
13.1.1.2. Definición y naturaleza del internamiento preventivo aplicado durante el proceso de infracción a la ley penal.....	30
13.1.1.3. Principios que deben cumplirse para la procedencia del internamiento preventivo.....	30 – 34

13.1.1.4.	Presupuestos que rigen la procedencia del internamiento preventivo, conforme al Código del Niño y Adolescente.....	35 – 38
13.1.1.5.	Procedimiento del Internamiento Preventivo.....	38
13.2.	Definición e implicancias del robo agravado	
13.2.1.	Naturaleza del Robo.....	39 - 40
13.2.2.	Naturaleza del Robo Agravado.....	41- 42
13.2.3.	Agravantes del Delito de Robo.....	42 - 44
13.2.4.	Diferencias entre robo simple y robo agravado.....	44 – 46
13.2.5.	Diferencias en hurto y robo.....	46
13.2.6.	¿Qué pasa si el delito de robo agravado es cometido por un adolescente?.....	46- 47
13.3.	Razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo	
13.3.1.	Razonamiento de Hechos.....	47 – 50
13.3.2.	Razonamiento de Derecho o Razonamiento Jurídico.....	50 - 52

CAPITULO III ANÁLISIS DE DATOS

13.4.	Métodos de Investigación.....	52 - 53
13.5.	Diseño de Investigación.....	53 - 54
13.6.	Población y Muestra.....	54
13.7.	Técnicas de recolección de datos.....	54 - 55
13.8.	Procesamiento y Análisis e Interpretación de Datos.....	55- 110
13.9.	Lista de Cotejo 1.....	111 – 112
13.10.	Formulación de Ficha de Trabajo, Procesamiento y Análisis de Datos.....	112– 118

CAPITULO IV PROPUESTA DE INTERVENCION

13.11. Propuesta de intervención.....	119 - 124
13.12. Conclusiones.....	125 - 126
13.13. Recomendaciones.....	127
13.14. Referencias.....	128
13.15. Anexos.....	129

Índice de Tablas

Tabla 1: <i>Análisis de aspectos que deben observarse para un adecuado razonamiento judicial de las resoluciones que dictan internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes en los Procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado.....</i>	114
Tabla 2: <i>Análisis del Procedimiento desarrollado en las resoluciones que dictan internamiento preventivo.....</i>	115
Tabla 3: <i>Análisis de los fundamentos de hecho en las resoluciones que aplican el internamiento preventivo.....</i>	116
Tabla 4: <i>Análisis de los fundamentos de derecho en las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo.....</i>	117

Índice de Figuras

Figura 1: <i>Análisis de aspectos que deben observarse para un adecuado razonamiento judicial de las resoluciones que dictan internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes en los Procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado.....</i>	114
Figura 2: <i>Análisis del Procedimiento desarrollado en las resoluciones que dictan internamiento preventivo.....</i>	116
Figura 3: <i>Análisis de los fundamentos de hecho en las resoluciones que aplican el internamiento preventivo.....</i>	117
Figura 4: <i>Análisis de los fundamentos de derecho en las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo.....</i>	118

RESUMEN

La presente tesis tiene como unidad de análisis las resoluciones emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes, en las que se ha dispuesto la aplicación del internamiento como medida preventiva en los procesos de infracción por el delito de robo agravado, durante el periodo 2016 – 2022. Enfatiza la concepción instrumental de la técnica de análisis de casos, análisis documental y la observación; así como estipula como instrumento principal una lista de cotejo elaborada por la tesista en la que se acentúan las características o directrices de debe tener una resolución que aplica el internamiento preventivo, ello con el objeto de establecer cuando dicha resolución tiene una debida motivación. El análisis de las resoluciones elegidas se efectuó mediante el esquema de razonamiento de hechos propuesto por Marina Gastón Abellán; y, mediante el esquema de razonamiento de derecho o razonamiento jurídico propuesto por Robert Alexy. La estrategia metodológica aplicada por la tesista permite poder determinar y establecer cuáles son los lineamientos y/o características que debe contener una resolución que resuelve aplicar el internamiento como medida preventiva a un menor investigado en un proceso de infracción por el delito de robo agravado, a fin de garantizar el respeto al interés superior del adolescente, teniendo presente la excepcionalidad de esta medida y su regulación como tal, tanto en la legislación nacional como internacional.

Palabras clave:

Internamiento preventivo, adolescentes infractores a la ley penal, robo agravado, razonamiento de hechos, razonamiento de derecho o razonamiento jurídico, interés superior del adolescente.

La Autora

ABSTRACT

The unit of analysis of this thesis is the resolutions issued by the Permanent Family Court of Tumbes, in which the application of preventive detention in infringement processes for the crime of aggravated robbery has been established, during the period 2016 - 2022. Emphasizes the instrumental conception of the case analysis technique, documentary analysis and observation; as well as stipulates as the main instrument a checklist prepared by the thesis student in which the characteristics or guidelines that a resolution that applies preventive detention must have are accentuated, in order to establish when said resolution has due motivation. The analysis of the chosen resolutions was carried out using the factual reasoning scheme proposed by Marina Gastón Abellán; and, through the legal reasoning scheme or legal reasoning proposed by Robert Alexy. The methodological strategy applied by the thesis student allows us to determine and establish what are the guidelines and/or characteristics that must be contained in a resolution that resolves to apply confinement as a preventive measure to a minor investigated in an infringement process for the crime of aggravated robbery, in order to guarantee respect for the best interests of the adolescent, keeping in mind the exceptional nature of this measure and its regulation as such, both in national and international legislation.

Keywords:

Preventive internment, adolescent offenders of the criminal law, aggravated robbery, reasoning of facts, reasoning of law or legal reasoning, best interest of the adolescent.

The author.

INTRODUCCIÓN.

El internamiento preventivo, es una medida privativa de la libertad que puede ser aplicada a menores de edad en procesos de infracción a la ley penal; y, es solicitada por el Fiscal de menores y aplicada o dispuesta por el Juez de Familia o quien haga a sus; dicha medida se sustenta o tiene la finalidad de poder asegurar la participación del presunto infractor en el proceso. En analogía en el proceso penal aplicado a los adultos que cometen delitos, corresponde a la figura de la prisión preventiva.

Estando a la naturaleza del internamiento preventivo, este constituye una de las afectaciones más graves a los derechos de los menores sujetos a una investigación por infracción de la Ley penal, por lo cual este es objeto de preocupación y regulación en tratados internacionales, estableciendo en este sentido estos, exigencias más estrictas que se traducen en deberes adicionales de los Estados, sustentadas en el hecho que los adolescentes por su estado de desarrollo son más vulnerables que los adultos, y ello trae como consecuencia que los efectos negativos de la privación de libertad sean más profundos y se extienden por un periodo más largo en el tiempo.

En este contexto, la presente tesis está encausada en determinar si las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo tuvieron una adecuada motivación, revisando si en las mismas se ha realizado un adecuado análisis de hechos y de derecho, que garanticen el debido proceso y el respeto al interés superior del adolescente.

A fin de esquematizar esta investigación, en el Capítulo I se analizará el objeto de estudio, delimitándose la realidad problemática, formulación del problema de investigación, justificación e importancia de la investigación, objetivos, hipótesis, variables, tipo de investigación y antecedentes de la investigación.

En el capítulo II de la investigación que corresponde al Marco Teórico, este se ha estructurado en dos puntos, el primero referido a los antecedentes del problema, y el segundo a la base teórica, siendo este último dividido en dos acápite: 1) el internamiento preventivo por infracción a la ley penal por el delito de robo agravado y todo lo relacionado a ello; y, 2) el segundo está referido al razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo, el mismo que se ha efectuado mediante el esquema de razonamiento de hechos propuesto por Marina Gastón Abellán; y, mediante el esquema de razonamiento de derecho o razonamiento jurídico propuesto por Robert Alexy.

En el Capítulo III, concerniente al análisis de datos, se ha analizará el tipo de investigación, método y diseño de investigación, población y muestra, técnica de recolección de datos, procesamiento y análisis e interpretación de datos. Se realizará el procesamiento de la información y la discusión de los resultados, efectuando un análisis de aspectos que deben observarse para determinar que una resolución con la cual dispone la aplicación del internamiento preventivo en los procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado, se encuentra debidamente motivada.

Finalmente se expondrán las conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO I

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:

El obtener resoluciones judiciales, debidamente motivadas, es un derecho de todas las personas, pues con ello se refleja una verdadera tutela efectiva por parte del estado; máxime si se trata de resoluciones limitativas de derechos como es el caso de las resoluciones que disponen la aplicación del internamiento como medida preventiva a menores de edad investigados por infracciones a la ley penal.

Así mismo, el obtener resoluciones motivadas deviene en una garantía frente a una posible arbitrariedad judicial, dado que ello garantiza al justificable que las resoluciones judiciales no se encuentren justificados en el razonamiento antojadizo del Juez, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso.

No obstante ello, la realidad judicial es muy diferente, pues muchos son los casos en que los juzgadores no analizan los hechos y verifican el derecho aplicable a las resoluciones con las que disponen la aplicación del internamiento como medida preventiva, sino que por el contrario interpretan inadecuadamente el fundamento así como los presupuestos materiales que sustentan su aplicación; y, es mas en ocasiones por no decir casi siempre se utiliza la el internamiento como medida preventiva a fin de obtener que el adolescente acepte su culpabilidad en el hecho que se le imputa o forzarlo a estar presente en la investigación, vulnerando con ello el principio de inocencia y el interés superior del adolescente, así como la regla principal de la excepcionalidad en la aplicación del internamiento como medida preventiva. Situación ésta que aleja a las resoluciones que aplican el mismo de ser consideradas como resoluciones motivadas, pese a que la motivación debe ser la exteriorización de la justificación razonada que permita llegar a una conclusión; es decir, que en con la argumentación del fallo emitido en la resolución, nos va a sustentar cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que aplicó el juez para tomar la decisión, y además de ello, saber si se encuentra fundado en derecho, y por ende no suponga la vulneración de algún derecho.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El internamiento como medida preventiva en analogía jurídica se asemeja a la prisión preventiva aplicada en los procesos penales seguidos contra adultos; y, cuya finalidad u

objetivo es poder asegurar la presencia o participación dentro del proceso, del presunto infractor; y, si correspondiera, el poder ejecutar la sanción (medida socioeducativa) que pudiera ordenar el juzgador (a).

En este contexto, la privación de la libertad durante el proceso, constituye una de las afectaciones más graves hacia los derechos de las personas objeto de una investigación criminal; y, esta afectación es más gravosa cuando es aplicada a menores de edad, estableciéndose exigencias más estrictas para su aplicación, pues debe tenerse en consideración que los menores investigados (adolescentes) por su edad son más vulnerables que los adultos; y, ello conlleva a que, a privación de la libertad respecto de ellos tenga efectos negativos y sus consecuencias que se extiendan en el tiempo. Por lo cual es que la resolución que aplica el internamiento preventivo, debe estar sustentada en un análisis de hechos¹ y un análisis de derecho² que refleje que resulta adecuado a la situación fáctica pese a ser una medida de ultima ratio; lo cual es el resultado del análisis no solo de la norma jurídica aplicable sino de los hechos que sustentan la denuncia interpuesta por el ministerio público y que debe ser analizada de manera interna y externa por el juzgador (a).

1.3. Formulación del Problema:

¿Las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo en los procesos de infracción a la ley penal, por el delito de robo agravado emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes en los años 2016 – 2022 se encuentran debidamente motivadas?

1.4. Justificación e Importancia del Estudio:

1.4.1. Justificación:

Resulta necesario analizar las resoluciones que dispusieron la aplicación del internamiento como medida preventiva, en las infracciones a la ley penal por el delito de robo agravado, emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes durante el periodo 2016 – 2022, a fin de determinar si estas contienen una debidamente motivación de su razonamiento judicial, basado en un análisis de hechos y de derecho que sustenten

¹Gastón Abellán, Marina: Los hechos en el derecho, bases argumentales de la prueba – tercera edición, Marcial Pons 2010.

²Robert Alexy: Teoría de la argumentación jurídica, la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica – traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo. Palestra Editores – Lima 2007.

por qué resulta necesaria la aplicación del internamiento como medida preventiva pese a que esta es una medida excepcional de ultima ratio por su naturaleza.

1.4.2. Importancia:

La investigación que realizo en la presente tesis, es necesaria para poder determinar y establecer cuáles son los lineamientos y/o características que debe contener una resolución que dispondrá el internamiento como medida preventiva en un proceso de infracción, para poder considerar que se encuentra debidamente motivada; y, así poder establecer un estándar de motivación que sirva de guía para la emisión de las resoluciones, ello con el fin de garantizar el debido proceso, teniendo presente la excepcionalidad de la aplicación del internamiento preventivo.

Así también, la importancia de la presente tesis radica en el hecho que, al dar a conocer la problemática existente en cuanto a la falta de una debida motivación de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo; y, poder ofrecer una solución a ello a través del establecimiento de un estándar de motivación, va a conllevar a que dicha situación cambie y/o mejore en salvaguarda de los menores sujetos a procesos de infracción a la ley penal en la que se dispone el internamiento como medida preventiva.

1.5. OBJETIVOS:

1.5.1. General:

Analizar si el razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo en los procesos de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado, cumple con sustentar y justificar el razonamiento de hechos y de derecho.

1.5.2. Específicos:

- ✓ Calificar el razonamiento judicial de hechos de las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo en procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes.
- ✓ Describir el razonamiento judicial de derecho de las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo en procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes.
- ✓ Establecer un estándar de motivación de resoluciones que aplican el internamiento preventivo en procesos de infracción a la Ley Penal, a través de una lista de cotejo.

1.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES:

1.6.1. Hipótesis:

El razonamiento judicial de las resoluciones emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes que aplicaron el internamiento preventivo en los procesos de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado durante el periodo 2016 - 2022, no han cumplido con sustentar y justificar el razonamiento de hechos y de derecho; y, por ende, no se encuentran debidamente motivadas.

1.6.2. Variables:

1.6.2.1. Variable I:

Internamiento preventivo por infracción a la Ley Penal por el delito de robo agravado.

1.6.2.1.1. Indicadores:

- ✓ Naturaleza del Internamiento preventivo.
- ✓ Naturaleza del Robo agravado.
- ✓ Diferencias entre robo agravado y robo simple.
- ✓ Diferencias entre robo y hurto.

1.6.2.2. Variable II

Razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo.

1.6.2.2.1. Indicadores:

- ✓ Razonamiento de hechos.
- ✓ Razonamiento de derecho.

1.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Según su propósito del presente estudio, es una investigación básica. El Consejo Nacional de ciencia y Tecnología (CONCYTEC) señala que la investigación básica busca comprender aspectos importantes de los fenómenos, de lo que se observa o de las relaciones que existen para incrementar el conocimiento (CONCYTEC, 2020). En el presente estudio se busca recoger información de la realidad judicial de las resoluciones judiciales que aplican el

internamiento preventivo, para determinar y establecer cuáles son los lineamientos o características que deben tener estas resoluciones para considerar que respetan el interés superior del adolescente y tienen presente la excepcionalidad de ultima ratio del internamiento como medida preventiva.

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (p.41). En razón del carácter la presente investigación es cualitativa, ya que se busca el significado y el sentido es decir la motivación de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes durante el periodo 2016 – 2022.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

De las investigaciones, doctrina, sentencias del Tribunal Constitucional y otros que he podido analizar y enfocar desde mi perspectiva puedo precisar las siguientes:

- El Internamiento Preventivo en el Proceso de Infracción a la Ley Penal:

El Código de Niños y Adolescentes aún en aplicación en la práctica, no indica expresamente los principios mínimos a considerar al momento de dictar el internamiento como medida preventiva; no obstante ello, estas normas rectoras han sido expresadas en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Perú. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas ha sostenido que las medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los niños acusados de infringir leyes penales, para ser legítimas deben cumplir todos los requisitos mínimos aplicables a las personas privadas de su libertad sin que exista una sentencia de por medio. Adicionalmente a estos principios mínimos generales, la prisión preventiva de menores de 18 años, debe cumplir con requisitos especiales para precautelar su derecho a la protección especial en virtud a su edad (párrafo 275).

La privación de la libertad como excepción, en el caso de personas menores de edad debe ser la norma; pues resulta excepcional y solo debe ser utilizada como última ratio cuando no exista otra alternativa.

Conforme a ello, es necesario precisar que la privación de la libertad de un menor de edad, implica considerar dos principios: a) la privación de la libertad constituye la última ratio y por ello es necesario preferir medidas de otra naturaleza, sin recurrir al sistema judicial, siempre que ello resulte adecuado; y, b) Debe considerarse siempre el interés superior del niño y adolescente, lo cual implica reconocer que este es sujeto de derechos. Este reconocimiento supone que, en el caso de los niños, se considere medidas especiales que implican mayores derechos que los que se reconocen a las otras personas.

Estos principios a considerar, tienen su sustento en el hecho que el internamiento preventivo es la medida más rigurosa a imponer a un menor de edad que comete un delito, por lo cual su aplicación tiene un carácter excepcional, al encontrarse delimitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de proporcionalidad y necesidad.

- Excepcionalidad de la privación de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes:

El derecho a la libertad es un aspecto central en la protección integral en general, en tanto es el sustento de todos los derechos; y, conforme a ello en la rama del derecho penal, ya que resulta definitorio de un sistema de justicia para adolescentes que respeta y prioriza los estándares internacionales. En este contexto, la posibilidad de restringir o privar de la libertad personal a los adolescentes están delimitadas por el derecho internacional. Este marco normativo, instaura el conjunto de derechos, libertades y garantías del individuo en el proceso penal en sí. Además de los establecidos para toda persona, se han definido para ellos garantías y derechos especiales y diferenciados.

- El interés superior del niño como derecho consagrado en la constitución política del Perú:

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, conforme estipula el artículo 1° de la Constitución Política del Perú; la cual también en su artículo 4° señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, madre y anciano en situación de abandono.

En este contexto, puede precisarse que para nuestra Constitución el niño, la niña y el adolescente son personas dignas, sujetos de derechos.

En 1924 esta orientación fue respaldada por la Asamblea General de la Sociedad de las Naciones Unidas, con la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño.

- La Ética Judicial y el concepto de “buen” Juez Penal:

Citando a los maestros Alarcón Requejo Gílmner y Balcázar Quiroz José en su ponencia en el IV Congreso Internacional en Filosofía del Derecho y Análisis económico, denominada: *Populismo punitivo y ética judicial. A propósito de la responsabilidad restringida del agente de más de dieciocho y menos de veintiún años del Art. 22 del Código Penal*, puede precisarse respecto a la ética judicial y el concepto de buen Juez penal, que la importancia de la ética judicial es directamente proporcional a la importancia que se concede a la función de impartir justicia en un Estado constitucional de derecho. Actualmente, rige en nuestro país un nuevo paradigma hegemónico que postula que el juez (ordinario y/o constitucional) es el principal actor del Estado constitucional de derecho. Es decir, que su posición viene a ser más importante que la del legislativo y ejecutivo (lo que se refleja en su posibilidad de controlar los actos de poder de estos últimos). Estando en la cúspide del sistema no queda más remedio que apelar a la autolimitación de los jueces: no por otra razón el constituyente les exige argumentar sus decisiones (Art. 139 Inc. 5 Constitución Política). Sin embargo, también es perceptible que la perspectiva de la legitimación social de los jueces no ha variado en un ápice con la introducción del nuevo paradigma de la argumentación (motivación) jurídica. Ante este panorama, los jueces penales han vuelto su mirada hacia las masas ávidas de seguridad. El sentimiento de inseguridad social, que justifica racionalmente el nacimiento del Estado (siguiendo las teorías de Hobbes y Locke, por ejemplo), se ve irracionalmente exacerbado por los medios de comunicación de masas. Cada uno de nosotros puede constatar diariamente cómo los programas de televisión nacional priorizan la difusión de noticias relacionadas a los delitos más violentos como asesinatos y robos agravados. Dado que estamos frente a negocios o empresas, resulta obvio, también, que la ciudadanía consume dicha información con apetito voraz (Pásara y Pazos, 2004, p. 81). En este escenario, asumiendo que la argumentación jurídica ha fracasado en su pretensión de legitimar socialmente al Poder Judicial, el juez mantiene una relación tensa con la ciudadanía, mediatizada además por la prensa. Por un lado, el juez debería decidir los conflictos tomando cierta distancia frente al reclamo popular (análogamente a lo que sucede con los jurados norteamericanos, quienes no deben dejarse influenciar por los medios de comunicación). Por otro lado, el juez debería dominar el arte de comunicar su decisión a la sociedad (y a la prensa), de manera que los ciudadanos puedan criticarla o respaldarla. La hipótesis que

manejamos es que los jueces penales no han logrado dominar el arte de la comunicación. Por ello, se han hecho cada vez más dependientes del estado de la cuestión informativa, decidiendo las causas judiciales conforme a las corrientes de opinión determinadas por los medios de comunicación de masas. Al parecer, esta situación no es privativa de nuestro país. Investigaciones empíricas se han llevado a cabo en otros orbes para demostrar la correlación entre prensa y decisión judicial. Así, por ejemplo, Vanberg (2009, p. 166) ha explicado la conducta de los magistrados del Tribunal Constitucional Federal Alemán, a partir del modelo psicológico del comportamiento estratégico (strategic behavior), logrando demostrar que dichos jueces constitucionales, al momento de tomar una decisión en un determinado sentido, no se someten realmente a la Constitución sino a la opinión pública. La metodología judicial antes descrita puede explicarse también desde un punto de vista racional (siguiendo a Max Weber): no habiéndose podido legitimar socialmente por el simple peso específico de sus propias decisiones y habiendo fracasado en su intento de comunicar las bondades de las mismas, los jueces se han decantado por la vía más fácil: acoplarse a la opinión pública moldeada por los medios de comunicación. Sin embargo, no nos proponemos aquí una comprobación empírica de las tesis antes formuladas sino elaborar un modelo teórico que suponga dicho estado de la cuestión. Teniendo en cuenta todas las ideas desarrolladas hasta este momento podemos afirmar que el buen juez es aquel que persigue arribar a decisiones razonables. La ética aplicada a la profesión judicial será una normativa de máximos en la medida que promueva que la actividad profesional del juez sea ejercida articulando medios y fines. Esto es algo que se contrapone a la mediocridad, pasividad o falta de compromiso. Entonces, una ética de la excelencia permitiría alcanzar los resultados más óptimos (eficacia, eficiencia y fines de la actividad judicial); y con ello, mejorar el trato dispensado a determinados individuos, dadas sus especiales condiciones de vulnerabilidad (los jóvenes comprendidos entre 18-21 años). Si bien la ética de la excelencia eleva las exigencias al ejercicio judicial, es aconsejable contar con un modelo de juez, que además de respetar mínimos indispensables, sea capaz de apreciar el panorama y las consecuencias de sus decisiones. Tarea que resulta más relevante aún en relación a la aplicación de las normas penales. En este sentido, el buen juez penal, el que además de observar las exigencias del ordenamiento jurídico en el que se desenvuelve, persigue la excelencia judicial, es aquel comprometido con los principios que guían y configuran la potestad punitiva del Estado.

2. BASE TEÓRICA

2.1. INTERNAMIENTO PREVENTIVO POR INFRACCIÓN A LA LEY PENAL POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO:

2.1.1. EL PROCESO DE INFRACCIÓN A LA LEY PENAL PERUANA:

2.1.1.1. Regulación del proceso de Infracción a la ley penal peruana, en el Código de Niños y Adolescentes con sus modificaciones por el Decreto Legislativo N° 1204.

El proceso de infracción a la ley penal aplicado a menores de edad, ha sido establecido legalmente para dar solución de la controversia entre el menor infractor y la víctima, así como la rehabilitación de este; tiene características de una naturaleza especial y retributiva.

Estando a ello, es necesario tenerse presente que, si bien este proceso sigue el modelo garantista que busca el respeto de los derechos de los adolescentes, no obstante ello, aún dicho proceso tiene marcados rasgos del sistema inquisitivo, como por ejemplo en la actuación del Juez, quien tiene el poder de investigar, juzgar y decidir el futuro del menor investigado, convirtiendo al sistema en escritural, pues predomina los pedidos que realicen las partes por escrito.

Conforme a ello cabe precisar, que cuando refiero a que se torna un sistema escritural, es porque las decisiones judiciales se basan en lo que se solicita por escrito, no habiendo más que una audiencia de esclarecimiento de los hechos en donde se actúa la prueba y se determina la inocencia o culpabilidad del menor; dándoles así un doble papel al Juez, actuando como director del proceso, pero a su vez como investigador.

a) Sujetos Procesales y colaboradores:

▪ Ministerio Público:

El Fiscal es el representante del Ministerio Público, tiene por función primordial velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente, promoviendo de oficio o a petición de parte las acciones

legales, judiciales o extrajudiciales correspondientes, conforme a lo regulado en el Código de Niños y Adolescentes (artículo 138°); es por ello que, las diligencias que se realicen, deben ser llevadas en presencia del Fiscal, porque es él quien garantiza el respeto de los derechos de los menores; y, es quien, si verifica vulneración de los mismos remitirá los actuados a la instancia correspondiente, a fin de que realicen la investigación que corresponda.

Estas competencias que se brindan al Fiscal en el Código de Niños y Adolescentes, abarcan desde la investigación preliminar sobre los hechos materia de análisis, así como la denuncia, remisión o archivo de los actuados.

- Abogado de la Defensa:

El abogado defensor tiene un rol primordial, pues a través de él, el menor investigado será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él. El abogado puede ser de parte (particular) o de oficio; teniendo este el deber primordial de ejercer la defensa y respeto del menor investigado.

Es esta misma línea, nuestra Constitución Política en el artículo 139° inciso 14° prescribe que *El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad*; confirmando así que ningún menor puede ser procesado sin asesoramiento por parte de su abogado defensor, el cual podrá ser a elección de parte o de oficio.

- Juez de Familia:

Los Juzgados de Familia existentes en los Distritos Judiciales del Perú o los que hagan a sus veces, son el órgano jurisdiccional competente para administrar justicia en materia de menores infractores; y, su titular es el

Juez de Familia, y este es el director del proceso y como tal, le corresponde la conducción, organización y desarrollo del proceso.

En este contexto, el Juez cuenta con el apoyo de la Policía Judicial para la citación, comparecencia o detención de las personas; a los servicios del Equipo Multidisciplinario, a la oficina médico-legal, y de cualquier otra institución para el esclarecimiento de los hechos apoyan la labor jurisdiccional.

- **Agraviado:**

El agraviado tiene derecho a ser resarcido por el menor infractor, ello conforme regula actualmente el Decreto Legislativo N°1204; pero anteriormente antes de la publicación de este decreto, el agraviado solo tenía derecho a apelar la sentencia, lo cual ahora sigue vigente pero aunado a ello el agraviado tiene derecho a ser resarcido.

En este escenario es relevante precisar que, en diferentes ciudades de nuestro país se viene desarrollando el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, el cual promueve la responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley, haciendo que él tome conciencia del daño ocasionado por su comportamiento, realizando así de manera voluntaria acciones de reparación a la víctima y a la comunidad así como seguir con un programa que le ayude a reintegrarse a la comunidad; sin embargo estos programas también buscan que la víctima sea atendida por un profesional cuya función es asegurar que tenga conocimiento de los derechos que le asisten y que no sienta en ningún momento que el infractor goza de inmunidad.

- **Órganos auxiliares:**

Están compuestos por profesionales, que prestan apoyo al Juez y al Fiscal para evaluar la personalidad del adolescente infractor y sus condiciones personales, familiares así como sociales, a fin de ponerlas en conocimiento a través de los respectivos informes que emitirán, con la finalidad que se tomen decisiones en donde se respete el interés superior del niño, permitiendo su efectiva rehabilitación y por ende su reinserción social.

Estos órganos auxiliares son 4: 1) el equipo multidisciplinario; 2) la policía especializada, la policía de apoyo a la justicia; 3) el servicio médico Legal; y, el Registro de Adolescente Infractor. Los mismos que se encuentran regulados en el Código de Niños y Adolescentes.

- ✓ Equipo Multidisciplinario: médicos, psicólogos y asistentes sociales lo conforman; los cuales siguen sus funciones en forma obligatoria en cada juzgado que ejerza competencias en niños y adolescentes. Es preciso también agregar, que los integrantes de cada equipo se eligen por concurso público y a través de una convocatoria administrativa que realiza cada Corte Superior de Justicia.
- ✓ Registro del Adolescente Infractor: En el mismo se anotan las medidas socioeducativas dispuestas en sentencia por el Juez de Familia o el que haga a sus veces, luego de realizarse la investigación correspondiente; este registro es de carácter confidencial, ya que contiene información restringida que solo es de acceso a las partes del proceso, la finalidad de ello es mantener a salvo la identidad del menor en aras a no dañar su imagen al culminar la medida socioeducativa aplicada y ser reinsertado en la sociedad.

b) Estructura del proceso de infracción a la ley penal:

Nuestro aún vigente CNA regula la conducción del proceso judicial de la siguiente manera:

- Denuncia y Resolución que declara promovida la acción penal.

Con la detención del menor por la supuesta comisión de un delito; y, su conducción a la Comisaria pertinente, para posteriormente dar cuenta al Fiscal de Familia de Turno, se inicia las diligencias preliminares para la investigación correspondiente.

Estando a ello, el Fiscal quien debe velar por el respeto y la tutela de los derechos del menor, evitando así abusos de autoridad por parte de la Policía. Por lo cual, durante la denuncia o etapa de investigación y juzgamiento, la Policía luego de la detención, puede confiar la custodia

del adolescente a sus padres o responsables cuando los hechos no revistan gravedad; y, una vez verificado su domicilio, y sus padres o responsables se comprometan a conducirlo ante el Fiscal cuando sean notificados.

Aunado a ello, se puede realizar la conducción del menor ante el Fiscal, en el término de veinticuatro horas, acompañando el Informe Policial, únicamente si ha mediado violencia o grave amenaza a la persona agraviada en la comisión de la infracción, o no hubieran sido encontrados los padres del menor; entonces procederá el Fiscal a recibir su declaración, en presencia del abogado Defensor.

Así, una vez que el Fiscal toma conocimiento de los hechos por parte de la policía, podrá acudir a la Comisaria o solicitar el traslado del menor hacia el Ministerio Público con la finalidad de tomar la declaración correspondiente en compañía de sus padres o responsables así como de su abogado defensor; con ello el Fiscal busca tomar conocimiento sobre los hechos; en este momento el menor investigado tiene derecho a declarar o hacer uso de su derecho de guardar silencio; por lo que el Fiscal, deberá recabar otros medios de prueba como son las declaraciones de los testigos (si es que hubiesen) o del agraviado para poder corroborar lo detallado en el acta de intervención policial.

Conforme a lo advertido en la declaración se puede solicitar la apertura del proceso, por medio de la formalización de una denuncia penal, la que debe contener un breve resumen de los hechos, acompañando de los medios de prueba que revelan la existencia de la infracción por parte del adolescente; y; también contendrá los fundamentos de derecho. Debiendo el Fiscal en esta misma denuncia solicitar las diligencias que deban actuarse. En caso contrario, archivará la investigación.

El Fiscal además, puede disponer la remisión como forma de exclusión del proceso, cuando se trate de infracción a la ley penal que no revista gravedad y el adolescente y sus padres o responsables se comprometan a seguir programas de orientación.

- La Audiencia de Esclarecimiento de los hechos:

La fecha y horario para llevar a cabo la diligencia única de esclarecimientos de los hechos se precisará en la resolución que declara promovida la acción penal; y, esta se realizará dentro del término de 30 días, con presencia del Fiscal y el Abogado.

En esta audiencia, se tomará la declaración del agraviado, se actuarán las pruebas admitidas y las que surjan en la diligencia, el alegato del abogado de la parte agraviada, el alegato del abogado defensor y su autodefensa. Las pruebas se ofrecerán hasta 5 días hábiles antes de la diligencia. En la diligencia única se toma la declaración del agraviado, la cual se realizará en presencia del Fiscal y el abogado defensor del menor; se actúan las pruebas admitidas y las que surgen en la diligencia; también se recibe el alegato del abogado de la parte agraviada, el alegato del abogado defensor y la autodefensa del adolescente. Y, en caso que el adolescente, pese a haber sido debidamente notificado, no comparece a la diligencia sin justificación, el Juez establece nueva fecha dentro del término de cinco días; de no concurrir por segunda vez el adolescente, el Juez ordenará la conducción del mismo por la Policía Nacional.

- Dictamen Fiscal y apelación de la Sentencia:

Una vez ya se culminen la actuación de medios de prueba en la audiencia de esclarecimiento de los hechos el Juez deberá remitir al Fiscal de Familia o Mixto por dos días el expediente a fin de emitir el dictamen correspondiente; y, este deberá solicitar en el mismo la medida socio-educativa que considere necesaria; posterior a ello y con el regreso del mismo al Juzgado el Juez en igual término emitirá la sentencia, donde deberá tener en cuenta, la existencia del daño causado, la gravedad de los hechos, el grado de responsabilidad del adolescente y el informe social, Psicológico del Equipo Multidisciplinario, conteniendo además los fundamentos de hecho y derecho, la medida socio-educativa y la reparación civil.

La sentencia deberá ser notificada al adolescente, a sus padres o responsables, al abogado, a la parte agraviada y al Fiscal, quienes pueden apelar en el término de tres días, salvo que se imponga al adolescente la

medida socio-educativa de internación, la cual le será leída en la misma audiencia, con lo que se atenta contra la prohibición constitucional de ser condenado en ausencia.

2.1.1.2. Definición y Naturaleza Del Internamiento Preventivo

Con la modificatoria realizada al Código de Niños y Adolescentes con el Decreto Legislativo 1204°, el internamiento como medida preventiva, se le reguló como una sanción privativa de libertad de carácter excepcional y como última ratio, y a este concepto se le agregó los presupuestos que debían configurarse para que se pueda solicitar dicha medida.

No obstante lo precisado, si bien el fin del internamiento es preventivo es buscar garantizar la presencia del menor investigado durante el desarrollo del proceso, no obstante ello según nuestras directrices y convenios internacionales suscritos por el Perú, la aplicación del mismo siempre debe ser de ultima ratio, es decir buscar primero la aplicación de otras medidas alternativas, ya que aplicar el internamiento, trae consigo consecuencias muy gravosas para los adolescentes, en atención al estado de formación en el que se encuentran.

En esta línea argumentativa, la medida del internamiento preventivo es una medida personal de carácter excepcional, que debe ser aplicada solo en aquellos casos en donde se cumplan los presupuestos y haya pruebas fehacientes que respalden cada presupuesto. Si bien nuestra norma aún vigente no ha delimitado ampliamente los presupuestos de esta medida el CRPA, explica de manera detallada cuales son los presupuestos; pero sin duda el plus y lo que nos permitirá ejercer una mejor justicia penal juvenil es la delimitación de cada uno de los presupuestos remitiéndole al juez una mejor aplicación.

2.1.1.3. Principios a tenerse en cuenta para aplicar el Internamiento Preventivo:

2.1.1.3.1. Interés Superior del Niño

Es el principio rector del derecho penal juvenil, debiendo estar este siempre presente al momento de decidir cuál será la media más adecuada para aplicar al adolescente incurso dentro de un proceso de infracción.

Conforme a lo precisado, debe considerarse que el principio del interés superior del niño rige la justicia penal juvenil, y como tal es tomado por los diferentes

instrumentos internacionales que velan por la protección de los menores en general, ante ello la CDN en su artículo tercero señala con relación a este principio que:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Subraya entonces la CDN, que tanto las autoridades administrativas como las legislativas deben velar porque todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo dado que estas repercutirán de manera directa sobre el desarrollo del menor, así también debemos recalcar que corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.

Asimismo, nuestra Constitución en su artículo 4° señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (...); la tutela permanente que con esta disposición se reconoce tiene una base justa en el interés superior del niño y del adolescente, doctrina que se ha admitido en el ámbito jurídico como parte del bloque de constitucionalidad conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, a través del artículo IX del Título Preliminar del CNA, precisándose que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo y Ministerio

Público, entre otros, se considerará prioritario el principio del interés superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.

2.1.1.3.1. Excepcionalidad y subsidiariedad:

Al referirnos a excepcionalidad y subsidiariedad debe siempre tenerse presente que la privación de la libertad debe ser la medida a la que se recurre al final de todas las medidas que pueden aplicarse, más aún cuando se trata de menores de edad, pues la finalidad de las medidas a imponerse a menores infractores siempre será la rehabilitación del menor, para que en su eventual salida del centro juvenil pueda reinsertarse a la sociedad.

Es así que, al amparo de la doctrina de la protección integral, la premisa del sistema debe ser prevenir, y no sancionar. Lo que en definitiva se pretende es formar y reforzar los lazos de contención de los jóvenes en su familia y comunidad, activándose los procedimientos judiciales tan sólo cuando aquellos dispositivos se tornen insuficientes o inidóneos para resolver la conflictiva social, resultante de la infracción a la ley penal en la que presuntamente incurre el joven.

En este contexto, al ser el internamiento preventivo la medida más severa que se le puede aplicar a un adolescente que cometa una infracción penal, debe considerarse siempre los principios de necesidad y proporcionalidad; y, conforme a ello los Jueces de Familia que lo aplican, deben justificar la aplicación de dicha medida, debiendo priorizar según las circunstancias la aplicación de otras medidas como las socioeducativas antes que las privativas de libertad.

2.1.1.3.2. Proporcionalidad

La proporcionalidad debe ser enfocada desde la sanción, en salvaguardia de los derechos del menor, pues este principio se conoce como la prohibición de exceso, y se constituye como un instrumento indispensable para limitar la acción invasiva del sistema penal en la vida de las personas, más aún si se trata de menores de edad.

El principio de proporcionalidad, que también es considerado como un presupuesto para el internamiento cuando hacemos referencia a la prognosis de la pena, juega un papel muy importante para la toma de decisiones en el sistema

penal juvenil, pues nos lleva a tomar la decisión de enjuiciar o no un adolescente por una presunta infracción a la ley penal.

2.1.1.3.3. Provisionalidad

Por este principio, se estipula que el tiempo que dure la medida del internamiento preventivo, sea el estrictamente necesario para que el Ministerio Público o el órgano judicial a cargo de la investigación cumplan con los fines que esta persigue.

Finalmente debe tenerse claro que, el carácter provisional de la medida de internamiento preventivo, busca que esta no llegue a confundirse materialmente con la pena que en su momento pueda imponerse al acusado.

2.1.1.3.4. Legalidad

Este principio en el derecho de menores engloba que ningún menor puede verse privado de su libertad sino por causa justificada y que el delito o falta que se le impute se encuentra debidamente tipificada en la ley o en algún código como tal y en este se establezca las sanciones a imponerse al mismo.

En este contexto, el principio de legalidad también implica que el proceso que se siga contra un adolescente por presuntamente haber infringido la ley penal debe garantizar que el acceso a la justicia sea el adecuado, y que el menor goce de una asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante la instancia superior competente, y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Conforme a lo precisado por la tesista, este principio consagra que el Ministerio al solicitar el internamiento preventivo de un menor debe acreditar el cumplimiento de los supuestos señalados en el CNA que en el artículo 209°: a) suficientes elementos probatorios que vinculen al adolescente como autor o partícipe de la comisión del acto infractor; b) riesgo razonable de que el adolescente eludirá el proceso; y c) temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.

En este contexto, podría afirmarse que el principio de legalidad se consagra en nadie podrá ser Juzgado por un hecho que no esté tipificado como delito; y, que tratándose de menores incluso ello debe estar debidamente acreditado y

tipificado, de este modo únicamente a la ley se puede acudir cuando se quiere sancionar un hecho que se estima susceptible de sanción penal.

2.1.1.3.5. Motivación

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes (artículo 138° de la Constitución Política del Perú); y, estando a ello, debe tenerse como regla general dentro del debido proceso la necesidad que las resoluciones que emita el Poder Judicial sean suficientemente motivadas.

En este contexto, el Juez de Familia al momento de emitir la resolución que resuelva la aplicación del internamiento, debe tener en cuenta no solo aspectos jurídicos sino también facticos, es decir, debe apoyarse de los hechos materia de investigación acompañados del respaldo jurídico o las normas legales aplicables, así como los medios de prueba que puedan ser presentados por las partes; pero siempre realizando un adecuado análisis de los mismos no solo de manera externa sino interna, que permita de esta manera emitir resoluciones judiciales motivadas de manera idónea.

En este escenario el deber de motivación que recae en los Jueces, se incrementa tratándose de menores de edad, pues al ser el internamiento preventivo o la sentencia a emitirse la que resuelva la libertad o limitación de la libertad del menor, debe estar más que garantizada la observancia a la debida motivación de la resolución que haga previsible y entendible tanto para el menor como para las otras partes del proceso, el porqué de la decisión a tomarse en la resolución sin que la misma pueda generar duda alguna que no ha sido emitida con imparcialidad y pleno conocimiento de los hechos y aplicación e interpretación correcta del derecho.

2.1.1.3.6. Competencia

La resolución judicial que dispone la aplicación del internamiento preventivo, solo puede ser emitida por el juez competente, en este caso por el Juez de Familia o quien haga a sus veces; ya que, por un fin procesal la libertad ambulatoria, solo puede ser limitada por actos fundados del órgano jurisdiccional competente, y siempre que la ley así lo determine.

2.1.1.4. Presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo acorde al código del niño y adolescente:

Los presupuestos, se encuentran recogidos en el artículo 209° del Código de Niños y Adolescentes, el cual modificado con el Decreto Legislativo N° 1204 estableció como supuestos para el internamiento los siguientes:

2.1.1.4.1. Suficientes elementos probatorios que vinculen al adolescente como autor o partícipe de la comisión del acto infractor.

El *fumus boni iuris* o apariencia del título de buen derecho consiste en un juicio de imputación o de fundada sospecha de la participación del adolescente en la infracción a la ley penal que se le atribuye, es por ello que podemos hablar de un título de imputación determinado, que está sustentado en suficientes elementos de indiciarios o medios probatorios que lo vinculan como autor o partícipe del hecho ilícito.

Conforme a ello, se afirmar entonces que el Juez debe valorar un alto grado de probabilidad de sancionar al imputado como autor o partícipe del delito y esto se acredita cuando se verifica que hay razones que justifican la imposición de la condena y no existen razones que justifiquen una sentencia absolutoria.

En este escenario, debe tenerse presente que la probabilidad se diferencia de la posibilidad en que esta solo requiere una equivalencia entre las razones favorables o contrarias a la hipótesis, y la certeza de que esta solo se alcanza una vez que es posible rechazar, sin motivo de duda razonable, las razones contrarias a la hipótesis.

Se puede concluir entonces que, mediante este presupuesto no se exige la certeza de la responsabilidad del adolescente en la comisión del delito, pero sí que existan suficientes elementos de convicción que lo vinculen al hecho ilícito, tales como pruebas directas o indirectas que arrojen un mismo resultado o coincidan de manera objetiva con las demás pruebas recogidas durante la investigación.

2.1.1.4.2. Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años.

Se debe analizar con base objetiva y razonable todos los presupuestos exigidos para la admisión de esta medida cautelar, sustentando además porqué motivos no resultaría aplicable una alternativa menos gravosa a la restricción de la libertad física del adolescente investigado. Se agrega a los presupuestos antes indicados en concordancia con lo dispuesto por el artículo 236 inciso a) del mismo texto legal, que para admitir el internamiento preventivo la infracción imputada al adolescente debe tratarse de un acto infractor que se encuentre tipificado en el Código Penal con una pena mayor de cuatro años, pues si desde el inicio del proceso el juzgador considera que existe la probabilidad de dictar una medida socioeducativa menos grave que el internamiento, no procedería tampoco decretarlo como medida restrictiva temporal. En otras palabras, se debe tener en consideración el principio de proporcionalidad de la pena, de forma tal que no se podrá aplicar el internamiento preventivo cuando la medida socioeducativa prevista para la infracción imputada no sea privativa de la libertad.

2.1.1.4.3. Riesgo razonable de que el adolescente eludirá la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad:

- Riesgo razonable de que el adolescente eludirá el proceso

Conocido también como el periculum in mora, debe ser entendido como “la duración, imprescindible en un proceso penal, puede constituir una ocasión propicia para que la parte pasiva en el proceso penal realice actuaciones que puedan hacerlo efectivo y, así mismo, a la sentencia con la que debe terminar. En este sentido, el TC desarrolla los elementos que a su juicio deben ser evaluados antes y durante el desarrollo del proceso para determinar la existencia del peligro procesal. Concretamente, menciona:

- 1) los valores morales del procesado: Cualquier persona con valores morales socialmente aceptados puede constituir un serio peligro para el ejercicio de la administración de justicia, ya que, al buscar justamente salvaguardar aquella buena imagen, que el mismo desarrollado a lo largo de su vida buscará mantener la misma intacta. Nada impide

tampoco que una persona, con valores morales que la sociedad juzgue negativamente, no tenga la intención de sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad.

- 2) Su ocupación, los bienes que posee, así como los vínculos familiares podrían constituir lo que nosotros conocemos como el arraigo. El mismo, que es un criterio universalmente reconocido para identificar la existencia o inexistencia de peligro procesal. El arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. Debe apreciarse que estas especies de arraigo (familiar, laboral, posesión y titularidad de bienes) son criterios que antes que justificar la prisión preventiva, en realidad desincentivan la fuga del imputado; aunque evidentemente su ausencia también permite valorar, con otros factores, el riesgo de fuga. Los elementos que permiten aceptar que el imputado trate de ocultarse, abandone el país o se sustraiga a la ejecución de la sentencia condenatoria son la gravedad de la pena a imponerse, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto y el comportamiento procesal del imputado.
- 3) otros elementos que impidan ocultarse, salir del país o sustraerse de una sentencia prolongada: como por ejemplo el tener doble nacionalidad, tener quizá propiedades en otros países, o también encontrarse casada con un extranjero, que le permita abandonar el país acudir a otro país en búsqueda de salvaguardar su derecho a la libertad.

Sin embargo, para el caso de los menores el arraigo fundamental sería el familiar, puesto que, a diferencia de los mayores, el que este menor acredite contar con propiedades solo nos conllevarían a pensar que estos no son propios o en su caso vienen de un patrimonio hereditario quizá dejado en vida. Otro punto importante a tomar en cuenta es la nacionalidad de los menores que cometen el ilícito penal, puesto que al no ser peruanos o domiciliados aquí tendríamos entonces un riesgo razonable de que los menores se den a la fuga. El juez a cargo de la investigación deberá analizar el arraigo del adolescente dentro de la localidad, constituido por supuestos que desincentivan la fuga del investigado; como son por ejemplo la

existencia de residencia habitual, que genera lazos afectivos difíciles de romper, esto es en el caso de que los menores convivan con familiares directos. Con relación al arraigo de bienes o labores no es necesario profundizar sobre ello, pues al tratarse de menores, estos por regla general se encuentran bajo tutela y amparo de sus padres, quienes cumpliendo con sus obligaciones les brindan alimento, educación y sobre todo calidad de vida para que ellos no se vean inmersos en el mundo delincuencia.

Otro punto importante a tomarse en cuenta para la solicitud del internamiento preventivo, es que el estado de abandono del menor o el no tener arraigo familiar, no deben ser motivos predominantes para la internación del menor en un centro de reclusión, puesto que esta medida siempre debe darse por los presupuestos establecidos en el CNA teniendo como base al principio de legalidad, ya que estas excusas no deben tomarse como fuente para privar a un adolescente de su libertad, sino por el contrario deben ser puntos que nos permitan fundamentar la libertad del menor pero a través de medidas coercitivas en donde se podrá hacer un seguimiento del mismo para evitar que vuelva cometer ilícitos penales.

2.1.1.5. Procedimiento del Internamiento Preventivo:

La medida del internamiento preventivo es solicitada por el Ministerio Público, ello conforme está regulado en el Código de Niños y Adolescentes, no pudiendo ser emitida de oficio por el Juez de Familia o quien haga a sus veces. La solicitud de internamiento preventivo, puede darse cuando el Fiscal decide formalizar la acción penal a través de la denuncia o incluso posterior a ella, en ambos casos debe fundamentar su pedido en base a los criterios establecidos en el código y cumpliendo siempre con los principios de proporcionalidad, motivación, excepcionalidad entre otros. Luego de solicitada ella, el Juez realizando un adecuado razonamiento de los hechos y el derecho a aplicar debe emitir la resolución que acoja o no el pedido del Ministerio Público, teniendo siempre presente la excepcionalidad de la medida y el interés superior del niño.

En este contexto, de declararse procedente la aplicación del internamiento, será la policía judicial quien, en coordinación con el Juzgado de Familia, trasladará al menor al Centro Juvenil donde cumpliera los meses de su internamiento. La

resolución que aplique el internamiento preventivo está sujeta a ser apelada por la defensa del menor investigado.

2.1.2. DEFINICIÓN E IMPLICANCIAS DEL ROBO AGRAVADO:

2.1.2.1. Naturaleza del Robo

Conforme a la regulación penal, el delito de robo es aquella conducta por la cual el agente se apodera, mediante violencia o amenaza, de un bien mueble total o parcialmente ajeno, privando al titular del bien jurídico del ejercicio de sus derechos de custodia o posesión, asumiendo -de hecho- la posibilidad objetiva de realizar actos de disposición.

Desde aquella óptica, la Corte Suprema ha señalado que este delito reviste evidente complejidad, dado que se afectan bienes jurídicos de naturaleza heterogénea, tales como la libertad, la integridad física, la vida y el patrimonio.

Así también, ha sostenido que el delito de robo consiste en el apoderamiento de un bien; es decir, aprovechamiento y sustracción del lugar donde se encuentre, siendo necesario, para ello, el empleo de la violencia o amenaza, por parte del agente sobre la víctima, destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación y gravitar en el resultado.

La naturaleza jurídico-legislativa del delito de robo, siguiendo al magistrado Salinas Siccha, ha sido explicada a través de las siguientes tres teorías:

a) El robo como variedad del hurto agravado:

Esta teoría sostiene que como el robo tiene los mismos elementos constitutivos del hurto como son el mismo bien jurídico protegido, apoderamiento mediante sustracción, ilegitimidad de la acción, bien mueble total o parcialmente ajeno, finalidad de lucro, etc., aquel constituye una modalidad del hurto agravado debido que solo se diferencia por los modos facilitadores de la acción, esto es, el uso o empleo por parte del agente de la violencia sobre las personas o la amenaza en contra de las personas.

b) El robo como un delito complejo:

Por su parte, Bramont-Arias García Cantizano anotan que en la figura del robo concurren elementos constitutivos de otras figuras delictivas como son coacciones, lesiones, uso de armas de fuego, incluso muerte de personas, estamos ante un delito complejo.

En este mismo sentido, la Corte Suprema, nuevamente, arguye que «para los efectos de realizar un correcto juicio de tipicidad, es necesario precisar ciertas premisas, así tenemos que en el delito de robo se atacan bienes jurídicos de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física, la vida y el patrimonio, lo que hace de él un delito complejo; que, ello no es más que un conglomerado de elementos típicos, en el que sus componentes aparecen tan indisolublemente vinculados entre sí, que forman un todo homogéneo indestructible, cuya separación parcial daría lugar a la destrucción del tipo»

c) El robo es de naturaleza autónoma:

La gran mayoría de los autores y en la doctrina señala que, al intervenir los elementos violencia o amenaza en la construcción del tipo penal, automáticamente se convierte en figura delictiva particular, perfectamente identificable y diferenciable de las figuras que conforman el hurto.

No obstante, el consenso logrado en tal sentido, no puede soslayar cuestionamientos basados en argumentos de impecable racionalidad y coherencia discursiva que nos previenen el no olvidar que -pese a los consensos obtenidos- el robo no es muy diferente al hurto, así como que su estructura típica no está alejada de la tesis de la complejidad, sobre todo en el modelo peruano que incluye especies de robo agravado con lesiones, resultados de muerte y lesiones graves.

2.1.2.2. Naturaleza del Robo Agravado:

El robo se convierte en robo agravado cuando concurren circunstancias que aumentan su gravedad, dado que los robos pueden agravarse en razón de la calidad de la gente; en razón del tiempo en que son cometidos; en razón del lugar de su ejecución; y, en razón de las circunstancias que han acompañado su ejecución.

Para la clasificación del robo conforme a las circunstancias que obran en su perpetración, se considerará lo establecido en la normativa penal que tipifica cada tipo.

Tipicidad Objetiva:

Conforme a la ley penal para que se configure el delito de robo agravado, debe realizarse por parte del sujeto el empleo de violencia hacia la víctima, el mismo que pueda darse de muchas maneras, pero teniendo como resultado que se genere una afectación emocional o física al agraviado.

Tipicidad Subjetiva:

La tipicidad Subjetiva debe entenderse como la voluntad interna del autor que ha sido exteriorizada en la realidad a través de la acción, configurándose como autor directo del delito el que llevo a la realidad lo que pensaba o ideaba; acción que puede realizar solo o con la ayuda de un tercero, quien vendría hacer el cómplice primario; en este sentido el sujeto activo, debe tener no solo la intención de querer apoderarse de forma ilegítima de los bienes pertenecientes de un tercero, el mismo que se convertiría en agraviado, sino que debe tener pensado he ideado la forma y modo de como cometer el ilícito penal tal como se señala en el iter criminis.

Sujeto Activo:

Puede ser cualquier persona que llevó a la realidad lo que ideo a través de determinada acción contraria al derecho y a las buenas costumbres, pudiendo realizar esta acción por sí mismo o con la participación de dos o más personas con el objeto de sustraer y/o robar el bien patrimonial del agraviado, utilizando para ello la intimidación, violencia y/o amenaza para cometer el hecho criminal.

Sujeto Pasivo:

Es sujeto pasivo toda persona que haya sufrido una sustracción de sus bienes por parte de uno o más personas, quienes para tal objetivo utilizaron la fuerza, intimidación o el uso de armas de fuego o armas blancas, causando daño a su integridad física o psicológica, o ambas; u, amenazándolo con ello de manera contundente.

2.1.2.3. Agravantes del Delito De Robo:

Conforme a lo tipificado en el art. 189° del Código Penal Peruano, lo agravantes del robo son los siguientes:

1. En inmueble habitado:

Se puede precisar respecto a esta agravante que la misma se configura con el hecho que el sujeto activo irrumpa en la tranquilidad de la víctima dentro de su domicilio, con amenaza o no, y/o con el uso de la fuerza o arma de cualquier índole, pudiendo estar solo el sujeto activo o acompañado; realizando ello con la intención de arrebatarle o sustraerle al agraviado sus pertenencias al interior de su domicilio, concretizando ello con llevarse las mismas fuera del domicilio, aun cuando sea intervenido terminando la consumación del acto criminal o dentro de las 24 horas de cometido el hecho.

2. Durante la noche o en lugar desolado:

Esta agravante se configura cuando el sujeto activo realiza la acción contra el agraviado pasada las 6 de la tarde, cuando ya el ha oscurecido o no hay mas luz solar, es decir en horas de la noche, en el que la parte agraviada es mas susceptible por la oscuridad o el lugar donde se encuentre. Asimismo, se configura si la acción se realiza en un lugar donde no haya mas personas que la víctima, donde se recóndito o las personas no se encuentren fuera de sus casas; lugar en que la víctima no podría ser auxiliado y es más vulnerable frente al auto activo.

3. A mano armada:

Esta agravante se configura cuando el sujeto activo utiliza un arma de fuego para intimidar a la persona agraviada y así sustraerle o arrebatarle sus pertenencias, independientemente de que se detone o no el arma, ya que esta causal se configura con el solo hecho de que el sujeto activo tenga en su poder un arma al momento de la comisión del acto de robo y amenace o golpee con ella al agraviado para la consumación de su acto criminal.

4. Con el concurso de dos o más personas:

Para que esta causal se configure el sujeto activo debe cometer el robo con la ayuda de otra persona u de otras personas, quien puede participar como cómplice primario o secundario, dependiendo del grado de su participación y la importancia de la misma (si de no participar no se podría cometer el acto)

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos:

Como la misma causal lo precisa, el robo agravado por esta causal se configura cuando el acto cometido por el sujeto activo es realizado o concretizado en cualquiera de los medios de transporte precisados o en los establecimientos de hospedaje, áreas protegidas o bienes de patrimonio cultura o museos.

6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad:

En el caso en concreto para que el robo agravado se configure por esta causal, el sujeto activo debe fingir ser un servidor público o privado, o hacerse pasar por alguna autoridad mostrando un mandato falso de manera que haga que el agraviado no pueda oponerse a la sustracción de sus pertenencias.

7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor:

Esta causal se configura con el solo hecho que el sujeto activo arrebate o sustraiga las pertenencias de una persona con discapacidad, de una mujer embarazada o de un adulto mayor.

8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios:

Para la configuración de esta causal basta con el sujeto activo cometa el robo sobre un vehículo automotor, sus autopartes o sus accesorios.

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido:

1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima.
3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.

La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

2.1.2.4. Diferencias Entre Robo Simple y Robo Agravado:

A) Robo simple:

El delito de robo simple es aquel que, aunque reúne todos los elementos necesarios para constituir el delito, tiene ausencia de la circunstancia agravante especial.

Encontramos tipificado el delito de robo en el artículo 188° del Código Penal, el cual precisa que:

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

En este contexto, el delito de robo se configura cuando, para obtener un provecho indebido una persona se apodera ilegítimamente de un bien parcial o totalmente ajeno, sustrayendo del lugar en el que se encuentra, pero, a diferencia del hurto, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o su integridad.

Por lo cual puede precisarse que, ya que no solo se afecta el patrimonio de la víctima, sino también su integridad física, y conforme a ello ya resulta irrelevante el valor de lo robado.

En este orden de ideas es muy necesario precisar, que la violencia o amenaza constituye el elemento configurativo para diferenciar el hurto del robo.

B) Robo agravado:

El robo se convierte en agravado cuando concurren circunstancias que aumentan su gravedad; es decir que los robos se agravan en razón de la calidad del agente; en razón del tiempo en que son cometidos; en razón del lugar de su ejecución, y en razón de las circunstancias que han acompañado su ejecución.

El robo agravado está tipificado en el Artículo 189°, el cual precisa lo siguiente:

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido:

1. En inmueble habitado.
2. Durante la noche o en lugar desolado.
3. A mano armada.
4. Con el concurso de dos o más personas.
5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos.
6. Fingiéndose ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad.
7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido:

1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima.
3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.

La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

C) Diferencia:

La diferencia entre el robo simple y el robo agravado radica en que el primero solo se refiere al tipo base que se aplicara cuando concurren los elementos fácticos para la configuración del robo y que tiene pena menor que cuando se trata de robo agravado; pues en el segundo está el tipo base como es el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física aunado a circunstancias especiales que hacen al robo ya perpetrado de mayor complejidad o peligro y que por su naturaleza revista mayor peligrosidad respecto de la persona que lo comete y las consecuencias del mismo en la víctima. Por lo cual es que tiene una sanción mayor para la persona que lo comete.

2.1.2.5. Diferencias en Hurto y Robo:

Es necesario precisar esta diferencia, dado que los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto y el robo; y, la diferencia entre ambos justamente radica en que mientras en el hurto únicamente se afecta el patrimonio de la víctima; no obstante en el robo se afecta tanto el patrimonio como otros valores importantes, como la vida, la integridad física y la libertad.

Por estas razones, es que el hurto simple se sanciona una pena de entre 1 a 3 años de cárcel, mientras que el robo simple se sanciona con una pena no menor de 3 años ni mayor de 8 años de prisión, la que puede ampliarse hasta la cadena perpetua en supuestos de robo agravado, como es el caso en el que la víctima del robo muere o es perjudicada con lesiones graves a su integridad, física o mental.

2.1.2.6. ¿Qué pasa si el delito de robo agravado es cometido por un adolescente?

Conforme a lo precisado en el numeral anterior desarrollado, respecto al proceso de infracción a la Ley, los menores que cometen el delito de robo agravado son juzgados dentro de un proceso de infracción a Ley Penal, por su condición de

menores de edad, pues si bien se tipifica el delito con lo regulado en el Código Penal; no obstante ello el proceso y trámite del mismo se realiza conforme al Código de Niños y Adolescentes, el mismo que si bien actualmente fue derogado por el Código de Responsabilidad Penal de menores, sin embargo en la práctica se encuentra en aplicación al no haberse aún reglamentado ni instalado a nivel nacional el Código de Responsabilidad Penal de menores. Por lo cual, la justicia de menores es diferenciada de la de adultos, utilizando solo el código Penal y su tipificación de los delitos únicamente para la regulación del mismo, mas no para el juzgamiento o procedimiento del mismo respecto a los menores juzgados por este delito.

Así también, en lo que respecta al internamiento preventivo que solicita el Ministerio Público cuando un menor es acusado de haber cometido el delito de robo agravado y considera necesario su internamiento previo a la emisión de la sentencia, los presupuestos para su procedencia no son los precisados en el Código Procesal Penal en lo que respecta a la prisión preventiva, sino que por el contrario se consideran los presupuestos estipulados en el Código de Niños y Adolescentes; y, conforme a nuestra legislación y los Convenios Internacionales suscritos por el Perú se considera como última ratio la aplicación del internamiento preventivo por su naturaleza misma y las implicancias de su aplicación a menores de edad en formación.

2.2. RAZONAMIENTO JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES QUE APLICAN EL INTERNAMIENTO PREVENTIVO:

2.2.1. RAZONAMIENTO DE HECHOS:

Dentro del análisis del razonamiento de hechos comparto lo analizado y argumentado por Marina Gascón Abellán, en su libro titulado *Los hechos en el derecho – Bases argumentales de la prueba*, dentro de cuyo análisis encontramos la justificación interna y la justificación externa del análisis de los hechos, y conforme a ello encontramos del libro analizado las siguientes premisas acertadas y compartidas en la tesis:

El instrumento jurídico enderezado a garantizar que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa «el signo más importante

y típico de racionalización de la función judicial» (CALAMANDREI, 1960: 115). La motivación es justificación, exposición de «las razones que el órgano en cuestión ha dado para mostrar que su decisión es correcta o aceptable» (ATIENZA, 1991: 22-23), y constituye así una exigencia del Estado de derecho en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder.

Y es que, en una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. «Suele decirse que sólo necesita justificación aquello que no es evidente ni arbitrario; si el sentido de las decisiones judiciales ya no se muestra evidente [...] y sus autores ni quieren ni pueden mostrarse arbitrarios, parece lógico que hayan de ganar la legitimidad a través de su actuación, es decir, en el iter que conduce desde la inicial información fáctica y normativa a la resolución o fallo; un iter que se resuelve en un intento de justificación tanto de las premisas como de su desarrollo». Como indica CAPPELLETTI, lo que distingue al juez del legislador no es su pasividad sustancial o creativa, sino su pasividad procedimental y, sobre todo, la necesidad de justificar las decisiones, de demostrar su racionalidad o no arbitrariedad, pues ahí reside la principal fuente de legitimidad de su poder. Por ello puede decirse que «interdicción de la arbitrariedad y obligación de motivar son el anverso y el reverso de la misma medalla»

Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere además una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica garantista, de tutela de los derechos.

Por lo demás, qué duda cabe que la importancia de la motivación se ve reforzada en un Estado que se quiera democrático, pues la democracia se basa en la participación del pueblo en la adopción de decisiones colectivas, y es un error pensar que la decisión judicial tiene únicamente una dimensión privada, que

interesa sólo a las partes directamente afectadas por ella: la sentencia es también un acto público, colectivo, por cuanto representa el ejercicio de un poder que es público y que por lo tanto ha de ser no sólo interna sino también externamente controlado.

Este control externo del poder del juez, se realiza justamente allí donde su actuación sea pública y no encubierta; por ello la motivación, en cuanto expresión de las razones del juez, facilita o permite este control.

En este escenario motivar una decisión es justificarla, precisar las razones que la hace correcta o aceptable, en el ámbito de la teoría jurídica se ha afianzado también una distinción sobre la estructura de la justificación de las decisiones judiciales que encuentra pocos objetores: la que diferencia entre justificación interna y externa.

Conforme a lo acotado la decisión judicial puede entenderse como la conclusión de un silogismo práctico, por lo que su justificación consiste en mostrar la corrección del razonamiento lógico que conduce de las premisas a la conclusión. Pero esto no es suficiente, pues para que la decisión esté justificada es necesario, además, que las premisas de las que se parte sean correctas, es decir, que estén a su vez justificadas. Para hacer referencia a estas dos diferentes justificaciones, se ha convertido en un lugar común hablar de justificación interna y justificación externa. Se entiende que una decisión está internamente justificada si se infiere de sus premisas según las reglas de inferencia aceptadas. Está externamente justificada cuando sus premisas son calificadas como buenas según los estándares utilizados por quienes hacen la calificación. Así, cuando ni la premisa normativa ni la fáctica plantean problemas la justificación se reduce (tan sólo) a justificación interna; es decir, se agota en mostrar la corrección del razonamiento lógico que conduce, a partir de las premisas, a la conclusión. La exigencia de justificación externa aparece, sin embargo, cuando las premisas (normativa o fáctica, o ambas) exigen nuevas argumentaciones. Por ello hay quien considera asimilable el binomio justificación interna/justificación externa con el binomio casos fáciles/casos difíciles. Con todo, la justificación de una decisión sólo puede entenderse completa cuando esté no sólo interna sino también externamente justificada, con independencia de que en determinados casos (difíciles) el peso de la motivación recaiga sobre la justificación externa.

Pese a que la cultura de la motivación es relativamente reciente, pues se alimenta de una teoría del derecho que desconfía de la jurisprudencia mecánica y de una filosofía política comprometida con el pleno control del poder, y pese a los múltiples obstáculos que todavía encuentra para afianzarse plenamente, no puede negarse que la necesidad de motivar las sentencias se ha con-vertido ya en una exigencia incontestable.

La cultura de la motivación, sin embargo, ha encontrado y aún encuentra una especial resistencia en el ámbito de la prueba

2.2.2. RAZONAMIENTO DE DERECHO O RAZONAMIENTO JURÍDICO:

Dentro del análisis del razonamiento de derecho comparto lo analizado y argumentado por Robert Alexy, en su libro titulado *Teoría de la Argumentación Jurídica*, dentro de cuyo análisis encontramos la justificación interna y la justificación externa de la argumentación jurídica, y conforme a ello encontramos del libro analizado las siguientes premisas acertadas y compartidas en la tesis:

En los discursos jurídicos se trata de la justificación de un caso especial de proposiciones normativas, las decisiones jurídicas. Pueden distinguirse dos aspectos de la justificación: la justificación interna (internal justification) y la justificación externa (external justification). En la justificación interna se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación; el objeto de la justificación externa es la corrección de estas premisas.

1. La justificación interna

La forma más simple de justificación interna tiene la siguiente estructura: (J.1.1) · (1) (x) (x → ORx) · (2) Ta (3) ORa (1), (2)705 «x» es una variable de individuo en el dominio de las personas naturales y jurídicas, «a» una constante de individuo, por ejemplo un nombre propio, «T» un predicado tan complejo como se quiera que representa el supuesto de hecho de la norma (1) en cuanto propiedad de personas, y «R» un predicado, igualmente tan complejo como se quiera, que expresa lo que tiene que hacer el destinatario de la norma.

Hay cuestiones jurídicas en las que es suficiente una justificación de la forma (J.1.1). Un ejemplo de ello sería: · (1) El soldado debe decir la verdad en asuntos

del servicio (§ 13, ap. 1 de la Ley del soldado). · (2) El señor M es un soldado. (3) El señor M debe decir la verdad en asuntos del servicio. (1) (2).

2. La justificación externa

El objeto de la justificación externa es la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna. Dichas premisas pueden ser de tipos bastante distintos. Se puede distinguir: (1) reglas de Derecho positivo, (2) enunciados empíricos y (3) premisas que no son ni enunciados empíricos ni reglas de Derecho positivo. Estos distintos tipos de premisas se corresponden con distintos métodos de fundamentación. La fundamentación de una regla en tanto regla de Derecho positivo consiste en mostrar su conformidad con los criterios de validez del ordenamiento jurídico. En la fundamentación de premisas empíricas puede recurrirse a una escala completa de formas de proceder que va desde los métodos de las ciencias empíricas, pasando por las máximas de la presunción racional, hasta las reglas de la carga de la prueba en el proceso.

Finalmente, para la fundamentación de las premisas que no son ni enunciados empíricos ni reglas de Derecho positivo sirve lo que puede designarse como «argumentación jurídica».

En particular, existen múltiples relaciones entre estos tres procedimientos de fundamentación. Así, en la fundamentación de las premisas que no tienen un carácter jurídico-positivo ni empírico juegan un papel considerable las reglas del Derecho positivo y los enunciados empíricos. En la fundamentación de una norma según los criterios de validez de un ordenamiento jurídico puede ser necesario interpretar las reglas que definen los criterios de validez. Esto tiene especial importancia si entre los criterios de validez se encuentran límites constitucionales; por ejemplo, un catálogo de derechos fundamentales. La argumentación jurídica puede ser de una importancia decisiva no sólo en la interpretación de una norma válida, sino también en el establecimiento de la validez de esa norma. Finalmente, esto vale también para el establecimiento de hechos empíricos. Así, de la interpretación de una regla de la carga de la prueba puede depender qué sea lo que se considere como hecho en la fundamentación. Precisamente, estas variadas interrelaciones hacen necesario, si uno no quiere confundirlo todo, distinguir

cuidadosamente los tres métodos de fundamentación mencionados. Sólo así pueden analizarse sus interconexiones.

CAPITULO III

ANÁLISIS DE DATOS

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según su propósito del presente estudio, es una investigación básica. El Consejo Nacional de ciencia y Tecnología (CONCYTEC) señala que la investigación básica busca comprender aspectos importantes de los fenómenos, de lo que se observa o de las relaciones que existen para incrementar el conocimiento (CONCYTEC, 2020). En el presente estudio se busca recoger información de la realidad judicial referido a las resoluciones judiciales que disponen la aplicación del internamiento como medida preventiva en los procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado para determinar y poder establecer cuáles son los lineamientos o características que debe tener una resolución que respetar el interés superior del adolescente y la excepcionalidad de la aplicación del internamiento preventivo.

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (p.41). En razón del carácter la presente investigación es cualitativa, ya que se busca el significado y el sentido es decir la motivación de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes durante el periodo 2016 – 2022.

1.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:

Inductivo-Deductivo: Por el método inductivo se parte de un caso particular hacia un aspecto general, por el contrario el método deductivo permite comprender el caso partiendo desde los aspectos generales hacia un nivel específico del problema, por ello en la tesis que se ha desarrollado se ha hecho uso de ambos métodos lo cual ha permitido conocer como la falta de un razonamiento de hechos y de derecho en las resoluciones que aplican el internamiento

preventivo en la infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado afecta el interés superior del adolescente y se aleja de la excepcionalidad de la aplicación del internamiento preventivo, por lo tanto urge identificar y aplicar mecanismos que permitan dar lineamientos tanto de un adecuado razonamiento de hechos y de derecho que permitan adecuar dichos criterios y obtener una debida motivación de dichas resoluciones judiciales.

Descriptivo-explicativo: Por este método se busca describir el objeto, explicarlo, analizar las causas, efectos, divergencias y similitudes de la motivación de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo.

Dogmático: Es aquel método que permite hacer un análisis del problema teniendo en cuenta la norma, la doctrina y la jurisprudencia, por ello en la presente investigación no solo se ha realizado un análisis del CNA, sino también se ha tomado en cuenta la doctrina del análisis de hechos desde la perspectiva de Marina Gastón Abellán; y, el análisis de derecho o análisis jurídico desde la perspectiva de Robert Alexy; así como se ha tenido en cuenta la legislación nacional e internacional sobre el tema de los menores de edad que infringen la Ley Penal y todo lo referente en la norma y jurisprudencia sobre el internamiento preventivo.

El Método Histórico: Se relaciona con la evolución del objeto de la investigación, partiendo desde el origen (porque relaciona siete años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

1.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

Se ha utilizado la investigación no experimental; y, respecto de la misma, Hernández y Mendoza (2018) nos dicen que las investigaciones no experimentales se caracterizan porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables. En razón de lo señalado anteriormente se puede señalar:

a) Nivel:

El nivel de la presente investigación será descriptiva, en la medida que se buscará responder cómo es la realidad objeto de investigación: el Razonamiento judicial de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo en las infracciones a la Ley penal por el delito de robo agravado.

b) Diseño:

El presente diseño de investigación es no experimental, transeccional, descriptivo. El diseño es no experimental porque no manipula la variable 1 para ver los efectos inmediatos sobre la variable 2.

El diseño de investigación es transeccional porque la observación en la investigación se realiza en un único momento, recolectando datos de cada categoría de las variables y reportándolos. Finalmente, la presente investigación es descriptiva porque busca detallar las características de procesos, fenómenos, personas y objetos (Hernández y Mendoza, 2018).

La estructura a seguir en la presente investigación será: muestra–observación, puesto que se buscará obtener información midiendo la muestra una sola vez y acercarnos al estado actual de los fenómenos a estudiar sin manipular las variables que lo componen para determinar sus manifestaciones, cualidades, características, propiedades y significados (Hurtado, 2010), conforme al siguiente diseño:

M1 (o) x1 y1

Donde:

M1= Muestra (resoluciones que aplicaron internamiento preventivo)

(o) = Observación

X1 = Variable de interés

Y1 = Variable de caracterización

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA:

El estudio comprende a las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo en procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado, emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes entre los años 2016 al 2022, siendo materia de estudio las resoluciones emitidas durante dicho periodo.

De la población mencionada se ha seleccionado 13 resoluciones de todo el periodo elegido, utilizando el método no probabilístico a conveniencia para el desarrollo del estudio.

1.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

1.5.1. Técnicas Utilizadas:

Se utiliza en el presente estudio la técnica de la observación documental, la cual según Sánchez y Reyes (2015) nos dice que es la forma como el investigador recopila datos

que se encuentra relacionada con la muestra de estudio, realizando acontecimientos del pasado plasmados en documentos. Así mismo se utilizará la técnica de análisis de contenido.

1.5.2. Instrumentos de Recolección de Datos:

El instrumento a usar en el presente trabajo de investigación es el Análisis de casos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) nos dice que esta técnica se usa en investigaciones cualitativa y en las de tipo cuantitativas exploratorias, donde el objetivo de la investigación no es en la cantidad estandarizada, sino en la calidad, profundidad y la riqueza de la información.

Para cumplir con el fin establecido, se han utilizado instrumentos tales como listas de cotejo o chequeo; además de fichas de análisis documental que nos permitirán hacer los análisis de nuestras respectivas muestras en base a los objetivos de la investigación propuesta

1.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS:

Para el presente trabajo de tesis es necesario analizar las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo en infracciones a la Ley penal por el delito de robo agravado emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes, donde se procederá a realizar un análisis del razonamiento de los hechos y un análisis del razonamiento de derecho o razonamiento jurídico que ostentan o adolezcan dichas decisiones judiciales, toda vez que son decisiones que afectan el derecho a la libertad e interés superior del adolescente, por lo que se consignó que serían el material de estudio resoluciones emitidas en el periodo del 2016 al 2022, información que ha sido posible obtenerla a través del trabajo realizado por la recurrente como secretaria judicial en el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes donde se tramitan procesos de infracción a la Ley Penal entre otros.

Dentro del proceso de análisis de datos se aplica el programa Microsoft Excel Versión 2019 para poder organizar la información, tomando en cuenta las dimensiones y variables para obtener tablas y gráficos mediante la estadística descriptiva.

1.6.1. Presentación de Casos:

Teniendo como unidad de análisis a los procesos de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado en donde se ha aplicado el internamiento preventivo a los menores investigados por parte del Juzgado de Familia Permanente de Tumbes, se procede a utilizar el instrumento de análisis de casos y una lista de cotejo que permitirá facilitar la obtención de gráficos informativos que ayuden a obtener conclusiones al presente estudio. En ese

sentido, se ha procedido según la muestra establecida hacer el análisis de los procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado respecto del periodo 2016 – 2022, usando para ello también una ficha de análisis documental que nos permita apreciar la información resumida del análisis de casos desarrollado en el presente trabajo de investigación.

Caso 1: Exp. 785 – 2016-0-2601-JR-FP-01

a) Hechos investigados:

La Representante de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta (Civil y Familia) de Tumbes, formaliza denuncia penal a fin de que se promueva investigación a favor del adolescente R.A.S.G (reserva de nombre en atención al principio de reserva de identidad de menores) como autor por la presunta infracción a la ley penal contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado (artículo 189 inciso 4 concordante con el artículo 188 del Código Penal) en agravio de TERESA VERÓNICA BAGLIETTO ARRESE (mayor de edad); precisando los siguientes hechos:

En la fecha siete de mayo del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las quince horas con cuarenta minutos, en circunstancia en que el SO 3 Miguel Miranda Romero se desplazaba a bordo de su motocicleta hacia su domicilio, encontrándose en la esquina de las calles 24 de Julio y avenida Tumbes, se observó el momento cuando un sujeto desconocido, tras forcejear y jalonear a una fémina trató de arrebatarle su teléfono celular, luego de agredirle con un golpe de puño en la boca, para luego correr y abordar una motokar color azul, la misma que se encontraba esperando otro sujeto, dándose a la fuga, por lo que ante este hecho su persona empezó la persecución dándoles el alcance en el Pasaje José Olaya del Barrio El Recreo, en donde luego de reducirlos con el apoyo de los Sub Oficiales PNP Ronald Porras Palomeque y Cristian Serrano Zavala a bordo de una móvil de Radio Patrulla, se les efectuó el Registro Personal, siendo que la persona que refirió llamarse Wilfredo Alemás Olaya de veintiún (21) de edad, se le encontró en posesión de un teléfono celular marca Huawei, siendo conducidos a la comisaría PNP San José; resultando que la otra persona intervenida es el adolescente R.A.S.G de diecisiete(17) años de edad, conductor del vehículo menor motokar, marca Wanchin color azul de placa 4252-CM, la misma que fue utilizada para cometer el hecho delictuoso.

b) Fundamentos que motivan la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Fundamentos citados literalmente conforme están en la resolución en análisis.-

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 208° del Código de los Niños y Adolescentes, el Juez en mérito a la denuncia, expedirá la resolución motivada declarando promovida la acción y dispondrá que se tome la declaración del adolescente en presencia de su abogado y del fiscal, determinado su condición procesal que puede ser: la entrega a sus padres o responsables o el internamiento;

QUINTO: En ese sentido, el artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes señala que solo podrá decretarse el internamiento preventivo cuando se cumplan los siguientes presupuestos: a.- suficientes elementos probatorios que vinculen al adolescente como autor o participe de la comisión del acto infractor, b.- Riesgo razonable que el adolescente eludirá el proceso, c) temor fundado de la destrucción y obstaculización de pruebas;

SEXTO: Asimismo el artículo 236° del acotado Código establece que: La internación sólo podrá aplicarse cuando: a) se trate de un acto infractor doloso, que se encuentre tipificado en el Código Penal y cuya pena sea mayor de cuatro años; b) Por reiteración en la perpetración de otras infracciones graves; y, c) Por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida socio educativa impuesta;

SÉTIMO: Que, corresponde determinar ahora la condición del adolescente denunciado R.A.S.G, es menester remitirnos al artículo 188° y 189°, inciso 4) del Código Penal que señala que para la comisión del ilícito de Robo, se requiere del apoderamiento ilegítimo por parte del agente de un bien totalmente ajeno con empleo de violencia o amenaza contra la persona y la concurrencia del agravante mencionado – en concurso de dos o más personas-, tipo doloso que contiene pena, para su agravante, mínima de doce años.

Bajo este supuesto, respecto a que el menor se halle involucrado en un acto infractor doloso, ello se colige de las Declaraciones vertidas a nivel policial y judicial, que el adolescente en mención participó de la intención criminal del adulto involucrado en estos hechos que responde al nombre de Wilfredo Alemán Olaya, brindándole la asistencia necesaria sin el cual no se habría producido el hecho, aun cuando este hubiere sido en el grado de tentativa, como es que condujo la motokar en el que adulto pretendió fugar luego de producir el apoderamiento ilegítimo del bien de propiedad de la agraviada – celular Huawei color negro-.

Lo cual se corrobora con la lo actuado en el informe policial que se adjunta a la denuncia fiscal, remitido con Oficio número 1133-2016-REGPOL-T/DIVPOS-CPNP-SAN JOSE-SEINCRI.

En este último instrumento consta que el menor fue intervenido en horas 15:40 aproximadamente del día 07 de mayo del 2016, por personal policial cuando un sujeto tras forcejear y jalonear con una persona de sexo femenino le arrebató un teléfono celular para ello la agredió con un golpe de puño en la boca, y luego corrió y abordó una motokar de color azul, emprendiendo la fuga, siendo alcanzada la motokar en el Pasaje José Olaya del Barrio el Recreo, siendo intervenido el menor R.A.S.G y el mayor de edad Wilfredo Alemán Olaya, y al momento de realizársele el registro pertinente a Wilfredo Alemán Olaya se le halló un teléfono celular marca Huawei de color negro perteneciente a la agraviada Teresa Verónica Baglietto Arrese. Véase al efecto el acta de registro personal adjunto, acta de incautación, así como del Certificado Médico Legal número 003265-L, de fecha 07 de mayo del 2016, que da cuenta que la agraviada presenta lesión traumática externa reciente ocasionada por agente

contuso y por uña humana, con un día (01) de atención facultativa y tres (03) de descanso médico, así como con la declaración de la agraviada Baglietto Arrese Teresa Verónica.

Con lo cual existen suficientes elementos que vinculan al menor investigado con los hechos como co-autor y participe del acto o hecho infractor que se le imputa.

En cuanto al riesgo razonable que el menor pudiera eludir el presente proceso, tenemos que el menor al momento de su intervención ha venido prestando el apoyo necesario para la consumación del evento infractor, esto es conducía la motokar que sirvió para la fuga, evadiendo con ello la intervención policial, y que luego se ha mostrado renuente a colaborar y brindar una explicación razonada de su obrar, con lo cual queda denotado la probabilidad de que este pueda eludir el accionar del órgano jurisdiccional, así como la de alterar o evadir la actividad probatoria,

Advirtiéndose que este proceso es promovido a favor del menor, en interés del menor involucrado, evidenciándose que su conducta antisocial requiere obviamente un tratamiento por especialistas, más si la acción desplegada ha sido acordada entre dos personas, uno de ellos mayor de edad, lo que da luces que este actuar no resulta ser casual o eventual, pues este tiene contacto con personas con un alto grado de delictuosidad, produciendo hechos que en esta región suelen ser recurrentes y que necesitan del Estado una actuación firme y en salvaguarda de menores que puedan ser inducidos o captados por adultos que los utilizan para hechos como los descritos.

Lo que lo hace propenso a la reincidencia en este tipo de ilícitos más aún que no cuentan con el soporte emocional por parte de su entorno familiar y social tal y como se colige del Informe Psicológico N° 111-2016 del día de la fecha, que ha señalado que el menor entrevistado tiene tendencia a reincidir a en actos como los que son materia de este proceso, aun cuando se sostenga que adolece de una imagen adulta con patrones, modelos, normas, reglas, o de un sistema familiar sano; entre otras conclusiones; factores que determinan en el Juzgador que en aplicación del artículo IX del título preliminar del Código de Los Niños y Adolescentes se debe disponer la medida de internamiento preventivo para mayor resguardo y protección de los mismos.

OCTAVO: Bajo el contexto antes descrito, y al verse inmerso un adolescente infractor en este tipo de infracciones a la ley penal, los Jueces de Familia se encuentran facultados por Ley a promover investigación a fin de determinar la responsabilidad o no de los adolescentes infractores implicados. Por estas consideraciones y en aplicación del artículo doscientos ocho del Código del Niño y del Adolescente

- c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida:

No se condice, pues mediante sentencia emitida con resolución nueve de fecha 21 de junio del 2016, se impuso al adolescente la medida socioeducativa de *Libertad Restringida* por un periodo de DOCE MESES, debiendo por su parte el infractor acudir y brindar las facilidades al Servicio de Orientación al Adolescentes de Tumbes (sito en el local de la Municipalidad Provincial de Tumbes) para la implementación de la medida, para lo cual se oficiara a dicho servicio con los informes pertinentes expedidos por el Equipos Multidisciplinario de esta

Corte de Justicia y del Centro Juvenil, entidad que deberá informar a este despacho sobre el desarrollo de la medida impuesta y en su oportunidad la culminación de la misma, considerando que en caso de incumplimiento de la medida impuesta esta podrá ser variada por la de INTERNAMIENTO en un Centro juvenil.

Y conforme a lo resuelto con la sentencia se dispuso la inmediata liberación del menor infractor y externamiento del Centro Juvenil Miguel Grau de Piura.

d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución que dispone el internamiento preventivo del menor denunciado por el Ministerio Público, carece de congruencia final, ello en atención al razonamiento efectuado por la Juzgadora, quien siendo la misma que dispuso el internamiento preventivo, al momento de sentenciar aplica una medida socioeducativa que se sigue en libertad ante el SOA; lo cual resulta incongruente, pues conforme al Código de Niños y Adolescentes con el que fue Juzgado el menor, este ha sido sentenciado con la actuación de los mismos medios probatorios que ofreció el Ministerio Público desde el inicio con la solicitud de internamiento preventivo; y, conforme a ello resulta incomprensible que pueda arribar a dos conclusiones distintas, una en etapa preliminar y una en etapa final; máxime si la situación del inicio de la denuncia al final del plazo para sentenciar, no ha cambiado, y tampoco se ha ingresado medios probatorios nuevos que pudieran servir de soporte para justificar el cambio de decisión; máxime si tenemos en cuenta que la resolución que aplica el internamiento preventivo no analiza la concurrencia de cada uno de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo, sino que por el contrario solo hace un cuasi análisis general, que a todas luces vulnera el interés superior del adolescente y la finalidad de la aplicación como ultima ratio del internamiento preventivo; mucho más si desde el análisis de los hechos denunciados no se advierte la peligrosidad ni reiterancia en el delito denunciado por parte del menor investigado; y, muy por el contrario con el internamiento preventivo dispuesto lo que se hizo es someter a un adolescente a un ambiente en el que se encuentran reclusos adolescentes que en su gran mayoría han cometido delitos muy gravosos, y que al estar en contacto con el adolescente internado preventivamente va a influenciar de manera negativa, aunado al estado emocional que creará dicho internamiento, el cual pudo haberse evitado si el razonamiento preliminar se hubiera coincidido con el razonamiento y decisión contenida en la sentencia emitida.

- e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

En la resolución analizada no logra advertirse un adecuado razonamiento judicial, pues no existe un análisis de hechos sino solamente una precisión de los mismos; y, en cuanto al análisis de derecho, el mismo solo ha sido realizado de manera general, pues la ausencia del análisis y pronunciamiento de la concurrencia de cada uno de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo es notoria. Asimismo la resolución no cuenta con el soporte de la constancia de antecedentes del menor denunciado, ni con informe sociofamiliar que pueda sustentar lo arribado en el examen psicológico realizado de manera preliminar y en etapa de detención del menor; y, esta ausencia de medios probatorios de oficio y de análisis se ve reflejado en la incongruencia de la decisión tomada de manera preliminar con el resultado final emitido en la sentencia que deja sin efecto el internamiento preventivo y por lo contrario impone una medida socioeducativa en libertad (libertad restringida) que se sigue con la ayuda y seguimiento del Sistema de Orientación al Adolescente (SOA). Lo cual vulnera de manera evidente el principio de interés superior del adolescente, la congruencia procesal, y la finalidad resocializadora del proceso de infracción a la Ley penal; aunado al incumplimiento de la excepcionalidad de la aplicación del internamiento preventivo.

Caso 2: Exp. 1831 – 2016-0-2601-JR-FP-01

a) Hechos investigados:

La Representante de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta (Civil y Familia) de Tumbes, formaliza denuncia penal a fin de que se promueva investigación a favor del adolescente C.R.CH.B (reserva de nombre en atención al principio de reserva de identidad de menores) como co-autor por la presunta infracción a la ley penal contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado (artículo 189 inciso 2, 3 y 4 concordante con el artículo 188 del Código Penal) en agravio de ERICK PAUL CATALAN GONZALES (mayor de edad); precisando los siguientes hechos:

El día 17 de setiembre del 2016, a las 23:15 horas, el agraviado ERICK PAUL CATALÁN GONZÁLEZ, cuando se encontraba transitando a pie, acompañado de Don Juan Jesús Chávarry Ramírez (ambos efectivos policiales en actividad y que se encontraban de descanso), a la altura del Boulevard La Madre (Av. Siete de Enero) - Tumbes, lugar donde fueron interceptados por una motokar, color amarillo, de donde bajó un sujeto de sexo

masculino, de test morena, que vestía un short de color rosado, una casaca de color negro y en la mano derecha portaba un cuchillo plegable mango color plomo, amenazando al agraviado ERICK PAUL CATALÁN GONZÁLEZ (24) a la altura del cuello, teniendo la intención de sustraerle sus pertenencias, siendo que el accionar de su amigo Chávarry Ramírez el reducir a esta persona por la parte de atrás, por este motivo, el conductor del motokar placa 6320-SP marca Mavila, se bajó del vehículo menor con la intención de querer rescatar a su cómplice, motivo por el cual se produjo un forcejeo, aglomerándose los vecinos para ayudar y apoyar, logrando zafarse uno de los delincuentes para subirse a la motokar y huir; sin embargo uno de los vecinos le reventó una botella de cerveza en la cabeza a dicho sujeto para que no se escape, llegando en ese momento una unidad móvil del Serenazgo de Tumbes (Movil N° 1018), prestando el apoyo para el traslado de los intervenidos a la Comisaría, asimismo, se llevó a una clínica al sujeto que presentaba sangrado, logrando identificarse a éste como el adolescente C.R.CH.B (17) y su cómplice fue identificado como Keven Steven Guerrero Zapata (22).

b) Fundamentos que motivan la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Fundamentos citados literalmente conforme se encuentran en la resolución en análisis.-

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 208° del Código de los Niños y Adolescentes, el Juez en mérito a la denuncia, expedirá la resolución motivada declarando promovida la acción y dispondrá que se tome la declaración del adolescente en presencia de su abogado y del fiscal, determinado su condición procesal que puede ser: la entrega a sus padres o responsables o el internamiento.---

QUINTO: En ese sentido, el artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes señala que solo podrá decretarse el internamiento preventivo cuando se cumplan los siguientes presupuestos: a.- suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo; b.- Que, el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; y, c.- Riesgo razonable que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad. El Juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de los literales b), c), d) y e) del artículo 235° o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y solo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa (...);

Asimismo, el artículo 236° del acotado Código establece que: La sanción de internación durará un periodo mínimo de uno y máximo de seis años. La sanción de internación es no menor de seis ni mayor de diez años cuando el adolescente tenga entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad y se trate de los delitos tipificados en los artículos 108°, 108°-A, 108°-B, 108°-C, 108°-D, 121°, 148°-A, 152°, 170°, 171°, 172°, 173°, 189° último párrafo, 200°, 296°, 297° del Código Penal, en el Decreto Ley

N° 25475 y cuando sea integrante de una organización criminal, actúe por encargo de ella o se encuentre vinculado a la misma. (...):

SEXTO: Que, corresponde determinar ahora la condición del adolescente denunciado C.R.CH.B, de diecisiete años de edad; Al respecto, atendiendo a los presupuestos del acotado Artículo 209º, es menester indicar que de los actuados preliminares, denuncia fiscal y actuados policiales, que anteceden, existen elementos indicadores de suficiencia probatoria que vinculan al mencionado adolescente como co autor de la INFRACCIÓN CONTRA EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO en grado de tentativa, figura dolosa que requiere el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno con el concurso de dos o más personas u otras agravantes y es sancionado con pena no menor de cuatro años y se advierte la conducta del adolescente eludir la acción de la justicia y obstaculizar la averiguación de la verdad; bajo este supuesto en el caso de autos si bien el adolescente en mención no logró sustraer pertenencia alguna del agraviado, ello no se consumó quedando en grado de tentativa, por la intervención de otra persona que se encontraba con el agraviado, así como por los vecinos de lugar donde ocurrieron los hechos, quienes se aglomeraron para ayudar y apoyar, siendo que uno de los vecinos reventó una botella en la cabeza a uno de los sujetos que se encontraba con el adolescente para que no escapara porque mostró la intención de huir, identificado como KEVEN STEVEN GUERRERO ZAPATA, de 22 años, quien conducía el vehículo motokar, asimismo redujeron al adolescente, siendo trasladados ambos a la Comisaría para las diligencias respectivas; De otro lado, es de indicar, que el adolescente denunciado al visualizar al agraviado y compañía, a los que pretendió sustraerle sus pertenencias, los amenazó con un cuchillo plegable, mango color plomo, a la altura del cuello, ello es de corroborarse con el acta de intervención policial; asimismo se tiene el reconocimiento efectuado por el agraviado, de señalar a algunos de los sujetos que lo redujeron para sustraer sus pertenencias, entre los cuales se encontraba el adolescente denunciado y el mayor de edad mencionado; agregado a ello, el silencio que ha guardado el denunciado por ante la policía y la declaración que ha brindado por ante esta instancia que son contradictorias al acta de intervención policial y certificado médico legal, cuando niega los hechos y refiere que entró en estado de inconsciencia y fue golpeado por la policía cuando lo intervinieron, siendo que los golpes que presenta se deben al apoyo de los vecinos y su forcejeo por huir.

De otro lado, se tiene a la vista la razón de Secretaría, donde se deja constancia que el adolescente C.R.CH.B, registra por ante este Juzgado, una medida socioeducativa, en el Proceso de Infracción Penal Contra la Administración Pública, en la Modalidad de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, en agravio de Don Jorge Rodríguez Cruz, Expediente N° 863-2015, en estado de ejecución, sentenciado en fecha diez de abril de los corrientes, a prestación de servicios comunitarios y una reparación civil, en la suma de ciento cincuenta soles (s/150.00).

De otro lado se tiene a la vista el Informe Psicológico N° 076-2016, practicado al mencionado adolescente por la Psicóloga de Turno, en el cual se concluye que: C.R.CH.B, es un adolescente, quien proviene de un sistema familiar disfuncional; en la exploración de sus rasgos de personalidad, se evidencia agresividad latente, significativa necesidad afectiva, dificultad en el adecuado control de sus impulsos; evidencia un carácter pasivo – agresivo, con tendencia a la impulsividad, rasgos mitómanos, alta dependencia materna. Con relación a lo que es materia de resolver, el menor presenta un relato con indicadores de manipulación;

menor quien a la evaluación proyecta indicadores evolutivos no significativos de un perfil disocial; y, a la evaluación se evidencia riesgo, con tendencia a verse inmiscuido en actos como el que ahora es materia de resolver; Actitud que no garantiza que la investigación cumpla sus fines y que el adolescente asuma el compromiso de no reincidir en hechos similares, más aún si los progenitores han demostrado descuido en el cuidado y control de su hijo, justificando su progenitora Doña ADELAIDA YOVANA BAYONA ESPINOZA en audiencia especial por ante este Juzgado, erróneamente la conducta del denunciado en que apoyó que dejara sus estudios para que apoye en labores de tapicería y que desconoce de los amigos que mantiene el adolescente.

Finalmente, factores que determinan en el Juzgador que en aplicación del Artículo IX del Título Preliminar del Código De Los Niños y Adolescentes se debe disponer la medida de internamiento preventivo para mayor resguardo y protección del denunciado.---

SÉTIMO: Bajo el contexto antes descrito, y al verse inmerso un adolescente infractor en este tipo de infracciones a la ley penal, los Jueces de Familia se encuentran facultados por Ley a promover investigación a fin de determinar la responsabilidad o no de los adolescentes infractores implicados.

- c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida:

Si se condice, pues en la sentencia emitida se impuso la medida de internamiento por el periodo TRES AÑOS al adolescente infractor C.R.CH.B de diecisiete años actualmente, como autor de la INFRACCIÓN A LA LEY PENAL contra EL PATRIMONIO en la modalidad de ROBO AGRAVADO en agravio de ERICK PAUL CATALAN GONZALES, la misma que se cumplirá en el Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, centro que deberá expedir informes evolutivos cada tres meses a este despacho, y se computará desde la fecha de la imposición del mandato preventivo de internamiento, esto es, desde el 17 de setiembre del 2016 hasta el 16 de setiembre del 2019; sin perjuicio del beneficio de semilibertad que la Ley otorga.

- d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución que dispone el internamiento preventivo del menor denunciado por el Ministerio Público, contiene una motivación aparente, pues si bien el resultado preliminar con el final se condicen; no obstante ello existe una ausencia de análisis entre los hechos denunciados y la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo, que hace evidente la precisión secuencial entre el análisis de hechos y el de derecho que hacen que arriben a la conclusión final; pues si bien son muchos los factores que hacen determinante que deba aplicarse el internamiento preventivo, ello en atención a los antecedentes del menor y la actitud del mismo dentro de la investigación; sin embargo estando

a la excepcionalidad de la media y a fin de proteger el debido proceso y el interés superior del niño, debía realizarse un análisis de hechos conducente con el de derecho que haga viable explicar a las partes el porqué de la decisión tomada, la cual fue ratificada en sentencia, ello en aras de proteger al adolescente infractor, en atención a la falta de soporte familiar y reglas de conducta que lo hacían proclive a convertirse en un adulto con tendencia a delinquir.

e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

En la resolución analizada contiene razonamiento judicial formal pero no completo, pues no existe un análisis de hechos sino solamente una precisión de los mismos; y, en cuanto al análisis de derecho, si bien estando a los medios probatorios de oficio recabados resultaba completa la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; sin embargo logra advertirse una motivación aparente en cuanto al análisis de cada uno de estos que hace a la resolución emitida, una resolución con razonamiento formal pero no ideal, estando ello a la naturaleza de los procesos de infracción a la Ley Penal por la edad de los adolescentes y las implicancias de la aplicación del internamiento preventivo.

En suma la resolución analizada es formal por contener la precisión de todos los medios probatorios y concurrencia de los presupuestos que hacen factible la aplicación del internamiento preventivo; no obstante ello el defecto que contiene conforme a los lineamientos de la tesis realizada, es el hecho que no se advierte un análisis de los hechos que nos lleve directo a la aplicación de la norma correcta con un adecuado análisis del derecho como consecuencia del mismo, que haga congruente o consecuente el hecho denunciado a la decisión arribada de manera clara y precisa; teniendo en cuenta que la finalidad de las resoluciones judiciales independientemente de la materia que resuelvan, es que logren ser entendidas por las partes procesales y/o los intervinientes en los procesos judiciales, mucho más si en el caso de análisis estamos frente a una resolución que resuelve respecto al derecho a la libertad de un menor de edad.

Caso 3: Exp. 1928 – 2016-0-2601-JR-FP-01

a) Hechos investigados:

La Fiscal de la Tercera Fiscalía Mixta de Tumbes solicita la apertura de proceso de internamiento preventivo del adolescente MIGUEL ÁNGEL FARFAN URBINA (16), como co-autor de la infracción penal del hecho punible tipificado delito contra el patrimonio, en la figura de robo agravado, en agravio de María Angélica Reyes Villar y por la infracción

penal contra el patrimonio- hurto agravado, en agravio de Anita de Jesús Saldarriaga Apolo, infracciones previstas en el artículo 188° concordante con el inciso 4 de la primera parte e inciso 1° del segundo párrafo del artículo 189° del Código Penal y artículo 185° y 186° inciso 5 del Código Penal. Pedido de internamiento que se sustenta en los siguientes hechos:

Con fecha 27 de Septiembre del 2016, que en circunstancias que personal policial se encontraba haciendo patrullaje motorizado por la zona de la Av. Francisco Navarrete, fueron alertados por los moradores de la zona que por la intersección de Navarrete y la Av. Mayor Novoa se estaba produciendo un robo, ante ello los efectivos policiales que hacían su recorrido en una moto lineal aceleraron la marcha, logrando percatarse que desde una motokar de color rojo el sujeto que iba en la parte posterior del vehículo en marcha arrastraba a la agraviada con él por el suelo, sujetos que al notar la presencia policial soltaron la cartera de la víctima y se dieron a la fuga, siendo perseguidos y detenidos por la policía y conducidos a la Comisaría, donde se los identifico, como Miguel Ángel Farfán Urbina, el adolescente denunciado y Ever Alexis Sorroza Maldonado, mayor de edad.

b) Fundamentos que motivan la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Se citan literalmente los motivos expuestos en la resolución:

QUINTO: Que, la protección de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes es amplia, la garantiza el Estado a través de sus instituciones tutelares y del Poder Judicial, en mérito a lo previsto por el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes en el cual se dispone que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que se adopte a través del Estado a través de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se considerara el Principio Superior del Niño y el Adolescente respecto a la medida de internamiento preventivo;

SEXTO: Que, de conformidad al artículo 208° del Código de los Niños y Adolescentes, el Juez en mérito a la denuncia, expedirá la resolución motivada declarando promovida la acción y dispondrá que se tome la declaración del adolescente en presencia de su abogado y del fiscal, determinado su condición procesal que puede ser: la entrega a sus padres o responsables o el internamiento;

SEXTO: En este sentido el artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes señala que la internación preventiva, debidamente motivada, sólo puede decretarse, a partir de los primeros recaudos, siempre que sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: *a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo; b) Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación*

penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad. El Juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido.

SEPTIMO: Que, corresponde determinar ahora la condición del adolescente investigado en ese orden, en relación al primer presupuesto del artículo 209° del Código de los Niños y Adolescente, concordante con el supuesto uno del artículo 236° del acotado Código, es menester remitirnos al artículo 188° del Código Penal que señala que para la comisión del ilícito de Robo, se requiere el apoderamiento ilegítimo por parte del agente de un bien totalmente ajeno, empleando para ello violencia o amenaza contra la víctima, a fin de lograr su cometido; bajo este supuesto en el caso de autos de evidencia que el adolescente denunciado y su acompañante arrastraron a la agraviada con la moto en movimiento, con intención de arrebatarle la mochila, causándole lesiones tal como se corrobora con el Certificado Médico Legal N° 007241-L, correspondiente a la agraviada María Angélica Reyes Villar (35), que concluye: *que la peritada presenta lesiones traumáticas recientes ocasionadas por mecanismo de fricción y agente contuso duro. Por lo que requiere: 02 días de Atención Facultativa por 05 días de Incapacidad Médico Legal*; siendo posteriormente capturados por personal policial, por tanto dicha conducta de los denunciados se subsume en el tipo penal antes señalado y la cual se encuentra agravada por el numeral 4 del artículo 189° de la norma acotada, ya que se advierte la concurrencia de dos o más personas, cuya pena supera los cuatro años de pena privativa de la libertad; asimismo en la declaración a nivel de esta judicatura y nivel policial del adolescente denunciado, llevadas en presencia de la Representante del Ministerio Público y de su abogado defensor, en las que el adolescente se contradice en sus declaraciones e incluso refiere no haber visto si su amigo le arrebató la cartera a la agraviada, evidenciándose así un relato poco consistente y poco veras, tal como lo refiere la psicóloga integrante el Equipo Multidisciplinario de esta Corte Superior de Justicia, en su Informe Psicológico N° 0087-2016, en donde incluso menciona que tiene tendencia a reincidir en actos como los que son materia de la presente investigación; que en atención al segundo presupuesto, debe evaluarse el comportamiento que adoptó el adolescente denunciado y su acompañante arrastraron a la agraviada con la moto en movimiento, con intención de arrebatarle la mochila; siendo posteriormente capturados por personal policial, presupuesto que también SE CUMPLE en el presente caso, se está formulando denuncia de ROBO AGRAVADO (art. 189° primer párrafo, inciso 4). Respecto a la concurrencia del tercer presupuesto, este contiene dos condicionantes que no resulta ser concurrentes de manera simultánea, sino que debe preverse cualquiera de ellas, para el caso de autos, se tiene que el adolescente, no tiene oficio o trabajo estable, así como tampoco ha culminado sus estudios, pues a la fecha, cursa el primero de primaria pese a que tiene 16 años de edad, y de comprobarse su responsabilidad en el hecho denunciado, correspondería ejecutar la misma, no existiría

impedimento alguno que conllevara al adolescente a eludir el accionar de la justicia. Por otro lado, si bien es cierto, el adolescente presenta un domicilio conocido y reside junto a su familia, se debe considerar la definición otorgada a la Sentencia Casatoria N° 631-2015/AREQUIPA de fecha 21 de diciembre del 2015, en cuyo cuarto considerando define “el arraigo” debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. El arraigo tiene tres dimensiones: la posesión, el arraigo familiar y el arraigo laboral. El primero se refiere a la existencia de un domicilio conocido o de bienes propios situados dentro del ámbito de alcance de la justicia. El segundo se circunscribe al lugar de residencia de aquellas personas que tienen lazos familiares con el imputado. El tercero se expresa en la capacidad de subsistencia del investigado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país.”: al subsumir las dimensiones indicadas en el presente caso, se puede concluir que el adolescente investigado no posee ningún tipo de propiedad o bien, asimismo, como ya lo hemos indicado, el adolescente no tiene un oficio estable, evidenciándose con ello una alta probabilidad que el adolescente eluda el accionar de la justicia e incluso incurrir en actos similares; siendo así por aplicación del artículo IX del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes se debe disponer la medida de internamiento preventivo, para mayor resguardo y protección del mismo.

DÉCIMO: Al verse inmerso un adolescente infractor en este tipo de infracciones a la ley penal, los Jueces de Familia están Facultados por ley, a promover investigación a fin de determinar la responsabilidad o no, del adolescente infractor implicado.

- c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida:

Si se condice, pues mediante sentencia se le impuso al menor infractor la medida socioeducativa de internamiento por el periodo de dos años al adolescente infractor MIGUEL ANGEL FARFAN URBINA de dieciséis, como coautor de la INFRACCIÓN A LA LEY PENAL contra EL PATRIMONIO en la modalidad de ROBO AGRAVADO en agravio de MARIA ANGELICA REYES VILLAR; y, como autor de la INFRACCIÓN A LA LEY PENAL contra EL PATRIMONIO en la modalidad de HURTO AGRAVADO en agravio de ANITA DE JESUS SALDARRIAGA APOLO la misma que se cumplirá en el Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, centro que deberá expedir informes evolutivos cada tres meses a este despacho, y se computará desde la fecha de la imposición del mandato preventivo de internamiento, esto es, desde el veintisiete de setiembre del 2016 hasta el veintisiete de marzo del 2018; sin perjuicio del beneficio de semilibertad que la Ley otorga.

- d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución analizada contiene un razonamiento secuencial y conexo entre los hechos denunciados y la norma jurídica aplicarse, evidenciándose el análisis separado y en conjunto de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo, sustentado también en los informes del equipo multidisciplinario obrante en autos de oficio y los medios probatorios aportados por el Ministerio Público, pudiéndose concluir que estamos frente una resolución judicial que de manera congruente ha coincidido con la sentencia emitida, por contener un adecuado razonamiento judicial.

- e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

La resolución analizada si contiene un adecuado razonamiento judicial, pues ha sustentado de manera directa, individual y conjunta un análisis de hechos secuencial con el análisis de derecho, llegando a una conclusión final que se condice con la preliminar, que detalla y explica los motivos congruentes del porque correspondía aplicar el internamiento preventivo, respetando de esta manera el principio de congruencia y debido proceso, aunado al hecho que al ser atendible y precisa para las partes, se garantiza también el interés superior del adolescente y el derecho a una resolución debidamente motivada.

Caso 4: Exp. 05 – 2017-0-2601-JR-FP-01

- a) Hechos investigados:

La Representante Adjunta Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Tumbes, solicita apertura de investigación penal e internamiento preventivo a favor del adolescente S.A.P.A (15) (reserva de nombre en atención al principio de serva de identidad de menores) como presunto coautor de la Infracción a la Ley Penal CONTRA EL PATRIMONIO, en la figura de ROBO AGRAVADO en agravio de ERICA LETICIA MARCHAN ROMERO, sustentando el mismo en los siguientes hechos:

El día 17 de diciembre del 2016 a personal policial de la Comisaría de Corrales, al tomar conocimiento que en el sector La Garita una señora estaba pidiendo auxilio, se constituyeron al lugar, donde la agraviada Erica Leticia Marchan Romero se estaba lavando la cara cubierta de sangre, quien les dijo que dos sujetos jóvenes vistiendo uno de ellos polo azul con blanco y el otro polo con rayas anchas de colores le habían robado un teléfono celular color negro carcasa rosada, marca alcatel y se habrían corrido hacia el cruce de Corrales, con dichas características los efectivos policiales salen en busca de los sujetos, logrando intervenir y

detener al sujeto de polo azul con blanco, a quien se le identifica como S.A.P.A, a quien en el registro personal se le encuentra el celular de la agraviada .

b) Fundamentos que motivan la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Fundamentos citados literalmente conforme se encuentran en la resolución objeto de análisis.-

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 208° del Código de los Niños y Adolescentes, el Juez en mérito a la denuncia, expedirá la resolución motivada declarando promovida la acción y dispondrá que se tome la declaración del adolescente en presencia de su abogado y del fiscal, determinado su condición procesal que puede ser: la entrega a sus padres o responsables o el internamiento;

QUINTO: En ese sentido, el artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes señala que solo podrá decretarse el internamiento preventivo cuando se cumplan los siguientes presupuestos: *a.- suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo; b.- Que, el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; y, c.- Riesgo razonable que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad. El Juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de los literales b), c), d) y e) del artículo 235° o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y solo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa (...);*

Sobre el punto a se advierte que hay indicios suficientes de la autoría del adolescente en el ilícito penal denunciado, no solo con la sindicación de la agraviada en acta de intervención policial, sino con lo vertido por el propio denunciante en acto de audiencia en el que reconoce haberle robado el celular a la agraviada. En cuanto al punto b, si bien se aprecia que el adolescente no tiene antecedentes por otros procesos similares, la conducta que se atribuye al adolescente investigado tiene como sanción lo previsto en el artículo 189 del Código Penal prevé: La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si es que el robo es cometido:... Inc. 2) *Durante la noche o en lugar desolado* 4) *Con el concurso de dos o más personas.*

En cuanto al punto c hay suficientes elementos de convicción que lo vinculan como autor de dicho acto, pues existe alta probabilidad de que eluda la acción de la justicia estando a su conducta a nivel policial que ha guardado silencio y a nivel judicial en acto de audiencia ha indicado que consume marihuana y ante lo referido por su propia madre María Violeta Álvarez Arbildo en acto de audiencia quien refiere que le ha dado un montón de oportunidades y le prometía que va a cambiar y no lo hacía y que en tres oportunidades le ha internado pero se escapaba, asimismo indica que ella no está en la capacidad de cuidar de su hijo porque no le hace caso y que ya está cansada de ello, demostrando su progenitora descuido en el cuidado y control de su hijo.

SEXTO: Asimismo se tiene en cuenta a las conclusiones en las que se han arribado con la evaluación psicológica N° 382-2016 practicada al adolescente que concluye *...En la exploración de sus rasgos evolutivos de personalidad, proyecta alto nivel de agresividad, ansiedad e impulsividad ligada a dependencia de drogas. Menor quien pese a referir intencionalidad de culminar su nivel secundario, no*

proyecta consistencia respecto a ello, no se evidencia proyecto de vida a corto, mediano y/o largo plazo en los que se pueda visualizar (él mismo) como una persona socialmente productiva. Si bien es cierto, el menor reconoce los hechos que se investigan, éste no se evidencia autoreflexivo y intención de cambio, sino muy al contrario, evidencia alta tendencia a reincidir en actos como los que hoy son materia de investigación. Por lo que no solo es un riesgo que se vea involucrado en más hechos similares sino que es un riesgo para la sociedad teniendo en cuenta su conducta.

De otro lado, se tiene a la vista la razón de Secretaría, donde se deja constancia, que, según Sistema Integrado Judicial de Corte, se advierte que el adolescente S.A.P.A, no registra una medida socioeducativa alguna.

Se fija la fecha de audiencia para el mes de enero del 2017 estando a las recargadas labores de la agenda judicial de este juzgado y al plazo de internamiento a efectos de lograr actuar las diligencias pertinentes conforme lo solicitado por la representante del Ministerio Público.

Finalmente, factores que determinan en el Juzgador que en aplicación del Artículo IX del Título Preliminar del Código De Los Niños y Adolescentes se debe disponer la medida de internamiento preventivo para mayor resguardo y protección del denunciado.

SÉTIMO: Bajo el contexto antes descrito, y al verse inmerso un adolescente infractor en este tipo de infracciones a la ley penal, los Jueces de Familia se encuentran facultados por Ley a promover investigación a fin de determinar la responsabilidad o no de los adolescentes infractores implicados.

- c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida:

Si se condice, pues mediante sentencia se impuso al menor infractor la medida socioeducativa de internamiento por el periodo de dos años al adolescente infractor S.A.P.A, de dieciséis años, como autor de la INFRACCIÓN A LA LEY PENAL contra EL PATRIMONIO en la modalidad de ROBO AGRAVADO en agravio de ERICA LETICIA MARCHAN ROMERO la misma que se cumplirá en el Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, centro que deberá expedir informes evolutivos cada tres meses a este despacho, y se computará desde la fecha de la imposición del mandato preventivo de internamiento, esto es, desde el 18 de diciembre del año dos mil dieciséis hasta el 17 de diciembre del año dos mil dieciocho; sin perjuicio del beneficio de semilibertad que la ley otorga.

- d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución que dispone el internamiento preventivo del menor denunciado por el Ministerio Público, contiene una motivación aparente, pues si bien el resultado preliminar con el final se condicen; no obstante ello existe una ausencia de análisis entre los hechos denunciados y la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; pues si bien son muchos los factores que hacen determinante que deba aplicarse

el internamiento preventivo, ello en atención a la conducta del menor en el proceso, la aceptación de los hechos a nivel judicial, la declaración de su madre quien no puede hacerse cargo de él, y el perfil disocial y tendiente a la reincidencia que se evidencia en el informe psicológico; sin embargo estando a la excepcionalidad de la media y a fin de proteger el debido proceso y el interés superior del adolescente, debía realizarse un análisis de hechos conducente con el de derecho que haga viable explicar a las partes el porqué de la decisión tomada, la cual fue ratificada en sentencia, ello en aras de proteger al adolescente infractor, en atención a la falta de soporte familiar y reglas de conducta que lo hacían proclive a convertirse en un adulto con tendencia a delinquir.

e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

En la resolución analizada contiene razonamiento judicial formal pero no completo, pues no existe un análisis de hechos sino solamente una precisión de los mismos; y, en cuanto al análisis de derecho, si bien estando a los medios probatorios de oficio recabados resultaba completa la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; sin embargo logra advertirse una motivación aparente en cuanto al análisis de cada uno de estos que hace a la resolución emitida, una resolución con razonamiento formal pero no ideal, estando ello a la naturaleza de los procesos de infracción a la Ley Penal por la edad de los adolescentes y las implicancias de la aplicación del internamiento preventivo.

En suma la resolución analizada es formal por contener la precisión de todos los medios probatorios y concurrencia de los presupuestos que hacen factible la aplicación del internamiento preventivo; no obstante ello el defecto que contiene conforme a los lineamientos de la tesis realizada, es el hecho que no se advierte un análisis de los hechos que nos lleve directo a la aplicación de la norma correcta con un adecuado análisis del derecho como consecuencia del mismo, que haga congruente o consecuente el hecho denunciado a la decisión arribada de manera clara y precisa; teniendo en cuenta que la finalidad de las resoluciones judiciales independientemente de la materia que resuelvan, es que logren ser entendidas por las partes procesales y/o los intervinientes en los procesos judiciales, mucho más si en el caso de análisis estamos frente a una resolución que resuelve respecto al derecho a la libertad de un menor de edad.

Caso 5: Exp. 26 – 2017-0-2601-JR-FP-01

a) Hechos investigados:

La Representante Adjunta Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Tumbes, solicita la apertura de investigación penal y la aplicación del internamiento preventivo a favor del adolescente R.U.L.J (17) (reserva de nombre en atención al principio de reserva de identidad de menores) como presunto coautor de la Infracción a la Ley Penal CONTRA EL PATRIMONIO, en la figura de ROBO AGRAVADO, en agravio de FEIJOO HERRERA, EURIDICE. Lo cual lo sustenta en los siguientes hechos:

Que el día 04 de enero del año 2017 a las 20:00 horas aproximadamente, encontrándose el S02 Jony Sahel CASANCHO CUBA, el SOB. PNP Jonathan D. ALEMAN PAUCAR y SO3. PNP José DIAZ VALLEJOS, realizando patrullaje preventivo a bordo de la unidad móvil PL - 12245, y por el cercado de Tumbes, apreciaron, de pronto justamente cuando se encontraban en la Av. Benavides (Altura de la discoteca Lyrics), a dos (02) sujetos de sexo masculino, los mismos que encapuchados corrían a efecto de abordar una motokar color amarilla, siendo que como los moradores del lugar les indicaron que los mismos habían cometido un robo, se inició así una tenaz persecución con el propósito de intervenirlos, y entonces, como el vehículo en el que iban se despistó a la altura de la intersección de la Av. Malecón Benavides y la Calle Maynas, dos de ellos se dieron a la fuga logrando reducir solamente a uno de los mencionados, y como hasta el lugar se hizo presente la agraviada acompañada de su progenitor don Ángel Octavio FEIJOO MORETTI, indicando que el intervenido fue quien la agarró del cuello y la amenazó con un cuchillo y la forcejeó mientras que el otro sujeto le rebuscó logrando así arrebatarse su celular, por tanto, se procedió con el inmediato traslado a la dependencia policial de San José para las investigaciones de ley.

b) Fundamentos que motivan la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Fundamentos citados literalmente conforme están en la resolución objeto de análisis.-

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 208° del Código de los Niños y Adolescentes, el Juez en mérito a la denuncia, expedirá la resolución motivada declarando promovida la acción y dispondrá que se tome la declaración del adolescente en presencia de su abogado y del fiscal, determinado su condición procesal que puede ser: la entrega a sus padres o responsables o el internamiento;

QUINTO: En ese sentido, el artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes señala que solo podrá decretarse el internamiento preventivo cuando se cumplan los siguientes presupuestos: a.- *suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo;* b.- *Que, el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación con pena privativa de libertad no menor de cuatro años;* y, c.- *Riesgo razonable que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad. El Juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el*

adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de los literales b), c), d) y e) del artículo 235° o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y solo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa (...);

Sobre el punto a se advierte que hay indicios suficientes de la autoría del adolescente en el ilícito penal denunciado, no solo con la sindicación de la agraviada en acta de intervención policial, sino con su propia declaración del investigado a nivel policial, quien reconoce su participación, no obstante, sostiene que no intervino en el arrebato; siendo que la agraviada en su respuesta de la pregunta 4 refiere que *el que me cogoteo y me puso el cuchillo, estaba vestido con una polera con capucha color blanca con plomo, celeste y amarillo que decía billabong y en la cabeza tenía una gorra, bermuda negra y me quito el celular...* siendo que el investigado a su respuesta de la pregunta 9 refiere *estaba con u short negro (gris oscuro) zapatillas ploma, con una polera color blanca con el nombre de billabong con capucha*, de lo que se advierte que su reconocimiento no es sincero ni veraz.

En cuanto al punto b, si bien se aprecia que el adolescente no tienen antecedentes por otros procesos similares, la conducta que se atribuye al adolescente investigado tiene como sanción lo previsto en el artículo 189 del Código Penal prevé: La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido:... Inc. 2) *Durante la noche o en lugar desolado*, 3) *A mano armada*, 4) *Con el concurso de dos o mas personas*.

En cuanto al punto c hay suficientes elementos de convicción que lo vinculan como autor de dicho acto, pues existe alta probabilidad de que eluda la acción de la justicia estando a su conducta a nivel policial y a nivel judicial en tanto ha cambiado de versiones en cuanto a sus declaraciones, es decir no ha dicho la verdad, asimismo su progenitor Luis Rosales Espinoza en su declaración a nivel judicial indica *...que no sabe lo que ha pasado esta vez ... y que el otro proceso que tiene su hijo es por tener una enamorada*”, evidenciando que no hay un control permanente por parte de sus progenitores; es más indica *Que es él quien le facilita la moto en oportunidades a pesar de que tiene conocimiento de que su hijo no tiene autorización para manejar y que sabe que no está permitido, porque ya le han puesto papeletas*.

De otro lado, se tiene a la vista la razón de Secretaría, donde se deja constancia, que según Sistema Integrado Judicial de Corte, se advierte que el adolescente **R.U.L.J (17)**, registra un proceso en trámite por infracción contra la ley penal N° 81-2016.

Se fija la fecha de audiencia para el mes de febrero del 2017 estando a las recargadas labores de la agenda judicial de este juzgado y al plazo de internamiento a efectos de lograr actuar las diligencias pertinentes conforme lo solicitado por la representante del Ministerio Público, asimismo estando a que por los motivos de la huelga indefinida se han reprogramado las audiencias que en su oportunidad estaban programadas.

Finalmente, factores que determinan en el Juzgador que en aplicación del Artículo IX del Título Preliminar del Código De Los Niños y Adolescentes se debe disponer la medida de internamiento preventivo para mayor resguardo y protección del denunciado.

SEXTO: Bajo el contexto antes descrito, y al verse inmerso un adolescente infractor en este tipo de infracciones a la ley penal, los Jueces de Familia se encuentran facultados por Ley a promover investigación a fin de determinar la responsabilidad o no de los adolescentes infractores implicados.

- c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida:

Si se condice, pues mediante sentencia se impuso al menor infractor LA MEDIDA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE INTERNAMIENTO POR EL PERIODO DE DOS AÑOS al adolescente infractor R.U.L.J, de dieciséis años, como coautor de la INFRACCIÓN A LA LEY PENAL contra EL PATRIMONIO en la modalidad de ROBO AGRAVADO en agravio de EURIDICE STEFANY FEIJOO HERRERA la misma que se cumplirá en el Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, centro que deberá expedir informes evolutivos cada tres meses a este despacho, y se computará desde la fecha de la imposición del mandato preventivo de internamiento, esto es, desde el 5 de enero del 2017 hasta el 4 de enero del 2019; sin perjuicio del beneficio de semilibertad que la ley otorga.

- d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución que dispone el internamiento preventivo del menor denunciado por el Ministerio Público, contiene una motivación aparente, pues si bien el resultado preliminar con el final se condicen; no obstante ello existe una ausencia de análisis entre los hechos denunciados y la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; pues si bien son muchos los factores que hacen determinante que deba aplicarse el internamiento preventivo, ello en atención a la conducta del menor en el proceso, la aceptación de los hechos a nivel judicial, la declaración de su madre quien no puede hacerse cargo de él, y el perfil disocial y tendiente a la reincidencia que se evidencia en él informe psicológico; sin embargo estando a la excepcionalidad de la media y a fin de proteger el debido proceso y el interés superior del adolescente, debía realizarse un análisis de hechos conducente con el de derecho que haga viable explicar a las partes el porqué de la decisión tomada, la cual fue ratificada en sentencia, ello en aras de proteger al adolescente infractor, en atención a la falta de soporte familiar y reglas de conducta que lo hacían proclive a convertirse en un adulto con tendencia a delinquir.

- e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

En la resolución analizada contiene razonamiento judicial formal pero no completo, pues no existe un análisis de hechos sino solamente una precisión de los mismos; y, en cuanto al análisis de derecho, si bien estando a los medios probatorios de oficio recabados resultaba completa la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; sin embargo logra advertirse una motivación aparente en cuanto al análisis de cada uno de estos que hace a la resolución emitida, una resolución con razonamiento formal pero no ideal, estando ello a la naturaleza de los procesos de infracción a la Ley Penal por la edad de los adolescentes y las implicancias de la aplicación del internamiento preventivo.

En suma la resolución analizada es formal por contener la precisión de todos los medios probatorios y concurrencia de los presupuestos que hacen factible la aplicación del internamiento preventivo; no obstante ello el defecto que contiene conforme a los lineamientos de la tesis realizada, es el hecho que no se advierte un análisis de los hechos que nos lleve directo a la aplicación de la norma correcta con un adecuado análisis del derecho como consecuencia del mismo, que haga congruente o consecuente el hecho denunciado a la decisión arribada de manera clara y precisa; teniendo en cuenta que la finalidad de las resoluciones judiciales independientemente de la materia que resuelvan, es que logren ser entendidas por las partes procesales y/o los intervinientes en los procesos judiciales, mucho más si en el caso de análisis estamos frente a una resolución que resuelve respecto al derecho a la libertad de un menor de edad.

Caso 6: Exp. 1828 – 2018-0-2601-JR-FP-01

a) Hechos investigados:

La Representante de la Primera Fiscalía Provincial Mixta (Civil y Familia) de Tumbes, formaliza denuncia penal a fin de que se promueva investigación a favor de los adolescentes CH.J.R.B. (16) y G.V.S (16) (reserva de nombre en atención al principio de reserva de identidad de menores) como co-autores por la presunta infracción a la ley penal contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado (artículo 189 inciso 4 y 7 concordante con el artículo 188 del Código Penal) en agravio de LEONARDO RUBÉN MEDINA ATOCHE; precisando los siguientes hechos:

Siendo las 12:20 horas aproximadamente del día 04 de agosto del año 2018, en circunstancias que Leonardo Rubén Medina Atoche, se encontraba en el AAHH. Alan García (referencia: espaldas del Colegio Nacional El Triunfo) distribuyendo mercadería PIG de la empresa de Bodegas Distribuidora S.A.C., fue víctima de la sustracción de su celular

color plomo, marcha Samsung, modelo J2 Prime, con operador movistar N° 937629834, la suma de veinte soles, doce unidades de detergentes Ariel de 350 gramos, tres unidades de detergentes ACE de 120 gramos, veintiún unidades de Downy floral de 80 miligramos, seis unidades de Downy adorable, hecho cometido por tres sujetos de sexo masculino de características tez blanca, uno de ellos de estatura 1.67 aprox. Contextura delgada de unos 16 años aprox., que tenía un tatuaje en el lado izquierdo del cuello, el mismo que lo cogió del cuello asfixiándolo y jalándolo hacia la pared, para que el otro sujeto de características tez morena estatura 1.65 aprox. Contextura delgada de 16 años aprox. y el otro sujeto cuyas características físicas no recuerda, aprovecharon en rebuscarle los bolsillos y arrebatarse sus pertenencias, para luego correr en dirección a una calle cuyo nombre desconoce, es en esos momentos que un patrullero llegó al lugar y solicitándole apoyo les brindó las características de los sujetos autores del hecho, los mismos que realizaron un patrullaje por la zona y lograron recuperar la mercadería e intervinieron a dos de los sujetos que perpetraron el robo, procediéndose con el inmediato traslado a la dependencia policial de San José ahora las investigaciones de ley.-

b) Fundamentos que motivan la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Se precisan los fundamentos de manera literal conforme a la resolución analizada.-

3.1.- Como se aprecia de la denuncia fiscal, ésta cumple con los requisitos de ley y aún no ha prescrito, desde la fecha que ocurrieron los hechos.

3.2.- El artículo 209 del Código de los Niños y Adolescentes, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1204, que prescribe “El internamiento preventivo, debidamente motivado, sólo puede decretarse a partir de los primeros recaudos, siempre que sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo; b) Que, el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; y, c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad. El Juez además tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el adolescente infractor se encuentra incurso en algunos de los supuestos de los literales b), c), d) y e) del artículo 235 o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis, y sólo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. La internación preventiva tiene una duración máxima de cuatro meses, prorrogables, a solicitud del Ministerio Público, hasta por dos meses, cuando el proceso sea complejo o concurran circunstancias (...)”.-

3.3.- Respecto al adolescente C.J.R.B., del análisis de los primeros recaudos como son las declaraciones y las actas de intervención; ADEMÁS de la ratificación de la versión del testigo co-investigado G.V.S,

se puede colegir que, cumple con los requisitos del artículo 209 en referencia, porque concurrían los presupuestos de Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal, que vinculen al adolescente como autor del mismo; quien habría cometido el hecho infractor; el hecho punible que se le imputa es sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; y existe riesgo razonable de que el adolescente aluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad, porque se trata de un adolescente que no tiene actividad conocida, dejó el colegio sin haber terminado la secundaria, no tiene un referente que se en cargue de controlarlo, puesto que a su abuelo, con el que vive, no le respeta al extremo de haber sido el investigado denunciado por hechos de violencia familiar en agravio de su abuelo, como el mismo refiere; por lo tanto, no tendría arraigo en esta ciudad, pese a que vive en el domicilio de su abuelo porque sus padres lo dejaron en dicho lugar desde muy pequeños, según dice, por lo que, no existe un mínimo de garantía que no saldrá de la ciudad y evadir la acción de la justicia. -

3.4.-Respecto al adolescente G.V.S, del análisis de los primeros recaudos como son las declaraciones y las actas de intervención; ADEMÁS de la ratificación de la versión del testigo co-investigado C.J.R.B, se puede colegir que, cumple con los requisitos del artículo 209 en referencia, porque concurrían los presupuestos de suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal, que vinculen al adolescente como autor del mismo; quien habría cometido el hecho punible que se le imputa, mismo que, es sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años (artículo 188 concordante con el artículo 189 del Código Penal); y existe riesgo razonable de que el adolescente aluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad, porque se trata de un adolescente que no tiene actividad conocida, puesto que dice trabajar 03 días a la semana cargando paquetes en el mercado luego que trabaja conduciendo moto taxi sin tener brevete y en una oportunidad le quisieron imputara el robo de una moto, no ha terminado ni la primaria, consume mariguana y alcohol, que su papá sólo le dice que eso no debe hacer cuando llega a su casa después de consumir dichas sustancias; por lo tanto, no tendría arraigo en esta ciudad, pese a que vive en el domicilio donde vive su progenitor, según dice; en consecuencia, no brinda garantías de que no va salir de la ciudad y evadir la acción de la justicia. -

3.5.-En este orden de ideas, existen elementos de convicción suficientes como para colegir que los adolescentes C.J.R.B y G.V.S, habrían cometido el hecho infractor en colaboración, distribuyéndose los roles con tal propósito; esto es para sustraer los bienes del agraviado, cogoteandolo para doblagar la resistencia del agraviado; en consecuencia, se puede colegir que puso en riesgo la integridad del agraviado.-

c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida

Si se condice, pues la sentencia declaro responsables a los adolescentes J.R.B (16) y G.V.S (16) como coautores de la Infracción a La Ley Penal contra el patrimonio en su modalidad de ROBO AGRAVADO (art. 188 concordante con los incisos 4) y 7) del artículo 189 del Código Penal) en agravio de LEONARDO RUBÉN MEDINA ATOCHE y se les IMPUSO la sanción privativa de libertad de Internación por un periodo de TRES (03) años, sanción que deberá cumplir de

manera efectiva en el Centro Juvenil de Varones “Miguel Grau” de Piura y cuya medida se computará desde el día CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO que fue DETENIDO y vencerá el día TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO (04-08-2018 y vencerá 03-08-2021) cumplido el periodo dispuesto será inmediatamente externado, siempre que no pese en su contra otro mandato de internación dispuesto por autoridad competente. Asimismo, se fijó una reparación civil en la suma de MIL (S/.1.000.00) soles que será cancelada en forma solidaria por los adolescentes sentenciados o por sus representantes legales (progenitores de cada uno de los 2 adolescentes).

d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución que dispone el internamiento preventivo del menor denunciado por el Ministerio Público, contiene una motivación aparente, pues si bien el resultado preliminar con el final se condicen; no obstante ello existe una ausencia de análisis entre los hechos denunciados y la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; pues si bien son muchos los factores que hacen determinante que deba aplicarse el internamiento preventivo, ello en atención a la conducta del menor en el proceso, la aceptación de los hechos a nivel judicial, la declaración de su madre quien no puede hacerse cargo de él, y el perfil disocial y tendiente a la reincidencia que se evidencia en el informe psicológico; sin embargo estando a la excepcionalidad de la media y a fin de proteger el debido proceso y el interés superior del adolescente, debía realizarse un análisis de hechos conducente con el de derecho que haga viable explicar a las partes el porqué de la decisión tomada, la cual fue ratificada en sentencia, ello en aras de proteger al adolescente infractor, en atención a la falta de soporte familiar y reglas de conducta que lo hacían proclive a convertirse en un adulto con tendencia a delinquir.

e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

En la resolución analizada contiene razonamiento judicial formal pero no completo, pues no existe un análisis de hechos sino solamente una precisión de los mismos; y, en cuanto al análisis de derecho, si bien estando a los medios probatorios de oficio recabados resultaba completa la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; sin embargo logra advertirse una motivación aparente en cuanto al análisis de cada uno de estos que hace a la resolución emitida, una resolución con razonamiento formal

pero no ideal, estando ello a la naturaleza de los procesos de infracción a la Ley Penal por la edad de los adolescentes y las implicancias de la aplicación del internamiento preventivo.

En suma la resolución analizada es formal por contener la precisión de todos los medios probatorios y concurrencia de los presupuestos que hacen factible la aplicación del internamiento preventivo; no obstante ello el defecto que contiene conforme a los lineamientos de la tesis realizada, es el hecho que no se advierte un análisis de los hechos que nos lleve directo a la aplicación de la norma correcta con un adecuado análisis del derecho como consecuencia del mismo, que haga congruente o consecuente el hecho denunciado a la decisión arribada de manera clara y precisa; teniendo en cuenta que la finalidad de las resoluciones judiciales independientemente de la materia que resuelvan, es que logren ser entendidas por las partes procesales y/o los intervinientes en los procesos judiciales, mucho más si en el caso de análisis estamos frente a una resolución que resuelve respecto al derecho a la libertad de un menor de edad.

Caso 7: Exp. 1268 – 2018-0-2601-JR-FP-01

a) Hechos investigados:

El Ministerio Público solicitó la apertura de investigación penal y aplicación del internamiento preventivo a favor del adolescente P.J.B.F (17) (reserva de nombre en atención al principio de reserva de identidad de menores), ser coautor de la infracción a la ley penal contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado, previsto en el artículo 188 e incisos 4 y 7 del artículo 189 del Código Penal en agravio de Juliana Elizabeth Columbus Zapata y Lisbeth Concepción León Espinoza. Pedido que sustenta en los siguientes hechos:

Siendo las 22.45 horas del día 03 de junio del 2018, (...). El suscrito (...) en circunstancias que realizábamos patrullaje por la Av. Tarata con mayor Novoa se visualizó a dos sujetos (...); Sujeto N° 02 tés morena 17 años aprox., polo color rojo, pantalón color negro, zapatillas color azul, el mismo que portaba en la mano lado derecho una cartera color marrón, quienes al ver la presencia del personal Policial se dieron a la fuga (...), motivo por el que dio la persecución (...), el sujeto N° 01 se dirigió por la parte bajo de la calle Tarapacá y el sujeto N° 02 se dirigió con dirección al Ministerio de Agricultura, donde se continuo con la persecución del sujeto N° 02 razón que dicho sujeto portaba el bien antes mencionado, logrando intervenir (...) a quien al realizar el registro preliminar se le encontró en la mano derecha una cartera de color marrón conteniendo en su interior un celular marca SAMSUNG color dorado IMEI 35262396028736, CHIP N° 972957184 (...), es donde fuimos alertados por moradores del sector que el sujeto intervenido

minutos antes robaron a una fémina en la Av. Tumbes, para luego dirigirnos a la Av. Tumbes a fin de identificar a la agraviada. (...). Presentes en la Av. Tumbes con mayor Novoa se observó a una persona de sexo femenino, la misma que se apersonó manifestando que fue víctima de robo por dos sujetos quienes se dieron a la fuga con dirección a la calle mayor Novoa (...), es así que al observar al sujeto intervenido logro reconocer plenamente que el (refiriéndose al sujeto N° 02) es uno de los sujetos que le robaron minutos antes; así mismo, refiere que los dos sujetos instantáneamente cogieron la cartera con la finalidad de arrebatarla, la agraviada puso resistencia por lo que los sujetos empiezan a insultar con apalabras soeces forcejeando con los dos sujetos, los mismos que le hicieron caer al piso arrastrándole un aprox. De cinco metros ocasionándole raspones en su brazo lado derecho y golpes en su rodilla, para posteriormente ser conducido a las instalaciones de la Comisaría San José para las diligencias correspondientes (...). (...) se identificó a la agraviada como Julia Elizabeth Col Zapata (50) (...), quien logra reconocer su cartera y sus pertenencias que se encontraba al interior, las mismas que fueron encontrados en posesión del sujeto conocido como P.J.B.F (17) (...). También recalca que le hace falta una billetera renzo conteniendo en el interior dos tarjetas de crédito (...), dinero en efectivos dos billetes de veinte nuevos soles. Así mismo, (...) se apersonó la persona de Lizbeth Concepción León Espinoza (...), la misma que reconoce a la persona de P.J.B.F (17), como el presunto autor del robo de su teléfono celular marca bitel color negro (...) hecho ocurrido el presente día a las 22:15 horas aprox. Por inmediateces de su domicilio motivo por el cual interpone la denuncia (...)

b) Fundamentos que motivan la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Se precisan literalmente los fundamentos expuestos en la resolución analizada.-

PRIMERO.- Que, conforme al artículo 209 del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley 27337, sólo puede decretarse el internamiento preventivo cuando se cumplan los siguientes presupuestos:

a.- Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo.

b.- Que, el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación con pena privativa de libertad no menor de cuatro años.

c.- Riesgo razonable que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad. El Juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de los literales b), c), d) y e) del artículo 235° o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y solo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa (...);

SEGUNDO.- El señor Fiscal de Familia, ha imputado y denunciado la comisión de la infracción a la ley penal, prevista y sancionada, en el artículo 188 (tipo base) y 189 del código penal (robo agravado durante la noche y en concurso de dos o más personas).

TERCERO.- PRIMER PRESUPUESTO: SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.—

El señor Fiscal de Familia, en su requisitoria oral, ha ofrecido, como suficientes elementos de convicción:

- a) El acta de intervención policial.
- b) La declaración testimonial de la víctima.
- c) El acta del registro del investigado.
- d) La declaración Testimonial de los dos efectivos policiales.
- e) El certificado médico legal practicado sobre la persona de una de las víctimas.
- f) La declaración del investigado.

Se ratifica además en los fundamentos de hecho de su denuncia; y sostiene que estos actos de investigación otorgan suficiente información para acreditar que el investigado fue intervenido por los dos efectivos policiales, el 03 de junio del 2018, en horas de la noche a las 11 de la noche aproximadamente, y se le ha encontrado en su poder la cartera robada, dentro de ella un celular; que la víctima que ha declarado lo ha reconocido, y que hubo violencia por cuanto el certificado médico legal practicado sobre la víctima, arroja lesiones; que estos hechos han ocurrido en compañía de la persona de un tal “kevin” (no habido).

En relación a esos elementos de convicción, el abogado defensor del adolescente investigado, sostiene que el acta de intervención policial no acredita flagrancia delictiva, pues el adolescente fue intervenido cuando se desplazaba caminando y porque uno de ellos portaba un bolso; más no porque estaban cometiendo un robo, lo que también se verifica con la declaración testimonial de los dos efectivos policiales; que si bien en la declaración del investigado se reconoce haber estado con Kevin, sin embargo, él no tenía el dominio del hecho, por lo que es una mera conjetura del Fiscal haberle imputado participación al adolescente; que, el certificado médico legal de Juliana Elizabeth Columbus Zapata describe lesiones leves en el antebrazo y en el tobillo, mientras que ella en su declaración delante del Juez, sostiene que tiene lesiones en las vértebras cervicales, por lo que no es verosímil su declaración. Que la intervención policial es ilegal, por cuanto los dos efectivos policiales, subieron a la víctima en el mismo vehículo donde estaba el adolescente, según refieren en sus declaraciones delante del Juez, y el reconocimiento de la víctima no se hizo con las formalidades de ley, en rueda. Agrega que de acuerdo al informe de la Psicóloga Jessica Paola Calderon Aleman, el adolescente no proyecta rasgos de alta peligrosidad, y que con el apoyo del Servicio de Orientación al Adolescente puede mejorar.

CUARTO.- PROGNOSIS DE PENA.

El señor Fiscal de Familia, sostiene que conforme al tipo penal del artículo 188 y 189 del código penal, para el delito de robo agravado la pena privativa de la libertad oscila entre 12 a 20 años, que se trata de un concurso real homogéneo; por lo que la prognosis de pena supera los cuatro años de internamiento, conforme al artículo 209 del código de los niños y adolescentes.

Para el abogado de la defensa del adolescente investigado no existe prognosis de pena por cuanto, su patrocinado no ha cometido el delito que le han imputado.

QUINTO.- PELIGRO PROCESAL.

Sostiene el señor Fiscal que falta el arraigo por cuanto, el adolescente no vive con sus padres, no cursa estudios, y se dedica a actividades informales, que vive con su abuela, la que se dedica a trabajar desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, por lo que es una persona de la tercera edad, que no tiene control sobre él; agrega que de acuerdo a los informes del equipo multidisciplinario de la Corte, el adolescente investigado es una persona poco asertiva, y que se ha iniciado en el consumo de drogas, por lo que ese perfil no es concordante con la opinión de la psicóloga que puede cambiar su comportamiento; debe considerarse que la conducta que se le atribuye es grave, por tratarse de un ataque físico a una gestante y a otra mayor de 50 años, conductas reiterativas pues se trata de dos infracciones en el mismo día, lo que conduce a considerar que puede influir en la declaración pendiente de la otra víctima que aún no ha declarado.

Por su lado, el señor abogado de la defensa del adolescente investigado, sostiene que el adolescente se encuentra presente en este acto, lo que evidencia que no existe peligro de fuga; y que, conforme a los informes psicológico y sociofamiliar, existe arraigo; en cuanto al consumo de drogas no existe ningún antecedente.

SEXTO.- PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO.

En este aspecto el señor Fiscal sostiene que la medida es idónea y necesaria, pues se trata de brindar atención especializada al menor con una medida restrictiva de dos meses de internamiento.

El señor abogado de la defensa del adolescente investigado, sostiene que no es necesaria ni idónea la medida, pues de acuerdo a la información de la psicóloga no es un adolescente de alta peligrosidad, y existe otra medida propuesta a través del SOA Tumbes; no es necesario el internamiento, porque eso atentaría contra su familia, y contra su educación.

SEPTIMO. ANÁLISIS COPULATIVO DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS.

1.- Conforme al artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley 27337, en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los poderes (entre otros) el Judicial, se considerará el principio del interés superior del niño y del adolescente y el respeto de sus derechos.

El Interés superior del niño y adolescente, es un derecho sustancial, pero también un principio de interpretación y norma de procedimiento, que asegura la protección y desarrollo integral del niño, con él se favorecen los vínculos familiares, y solo en caso de excepción, un entorno familiar alternativo.

Es por tanto un principio rector, de aplicación también, en la justicia penal juvenil.

De otro lado, la regla del internamiento, solo es posible si no existe, en las circunstancias del caso concreto, otra alternativa expuesta, que, a criterio del equipo multidisciplinario y del propio juez, asegure la resocialización del adolescente investigado.

En el debate del Consejo de Coordinación Judicial, sobre el fenómeno de la violencia juvenil, llevada a cabo en 1998, se estableció que la internación debía ser aplicada sólo como último recurso en los casos de efectiva gravedad en el comportamiento de los adolescentes, y se expresó que los jueces de familia debían aplicar otras medidas socioeducativas en un medio abierto, dado que el adolescente es un sujeto de derecho que integra una familia, una comunidad y que eventualmente requiere orientación y acompañamiento. La misma Convención de los derechos del niño, instrumento internacional de suma

importancia, establece que la detención de menores (internamiento) es una medida excepcional, de ultima ratio.

2.- Que, en este extremo del proceso, al interior de esta secuela únicamente es materia de pronunciamiento, decidir si el menor debe ser investigado en libertad, o bajo internamiento.

3.- Al examinarse la declaración referencial del menor P.J.B.F (17) del folio 18 y siguientes, a la sexta pregunta el menor manifiesta:

REFERENTE DIGA.- Describa la forma en que la persona conocida como Kevin procedió a arrebatarse el teléfono celular a la adolescente en estado de gestación y que hechos ocurrieron después?; dijo: Él estaba conmigo y se le acerca, antes me dijo vamos a arrebatarse los dos, me dijo que yo la agarre, pero yo me quedé a unos centímetros de la chica pero no hice nada, sólo corrí cuando él le arrebató el celular, Kevin lo agarró el celular con las dos manos ... luego bajé me volví a encontrar con Kevin, y caminamos juntos luego empezamos a ir corriendo y vimos una señora por la avenida Tumbes por la empresa Toyota, Kevin agarró y le arranchó la cartera a la señora y la arrastró para poder quitarle la cartera, solo fue unos centímetros, la señora llegó a estar en el piso echada, al final la señora soltó la cartera y corrió hacia la calle Tarapacá y yo corrí hacia la calle tarata y a mí me interviene la Policía.

Esta manifestación delante de la autoridad policial del adolescente investigado, se ha tomado en presencia de su abogado y del señor Fiscal de Familia, por tanto, con las garantías mínimas necesarias para preservar su derecho fundamental de defensa.

De otro lado, en la referencial delante del Juez de Familia del adolescente investigado, este insiste en afirmar que Kevin le arrebató el celular a la mujer en estado de gestación, y que fue también Kevin el que le arrebató la cartera a la otra señora.

En las dos circunstancias, en adolescente está presente, pero niega haber participado como autor, (a pesar de que se le encontró con la cartera).

Así mismo, la abuela del adolescente investigado manifiesta que realiza actividades de ayudante de cocina desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, todos los días; por consiguiente, no obstante que vive y tiene a cargo al adolescente investigado, no dispone de tiempo para guiarlo y orientarlo, permitiendo que se relacione con personas de mal vivir.

Que, al examinarse la declaración de JULIANA ELIZABETH COLUMBUS ZAPATRA (agraviada) ella sostiene que uno de los sujetos (el más alto de pelo negro) la ha cogoteado, cogiéndola del brazo derecho e insultándola, y el otro sujeto, (entiéndase el adolescente investigado) también la cogió del brazo y entre los dos la votaron al piso y a la fuerza le quitaron la cartera; habiendo recuperado su cartera y sus pertenencias, salvo el monedero y su dinero, en la Comisaria, persona que si presenta lesiones conforme al certificado médico legal Nro. 004299-L que si bien no son cervicales, si son lesiones en las extremidades con atención facultativa de 02 días por 05 días de incapacidad médico legal; que el menor investigado también fue intervenido por la autoridad policial y a él se le encontró las pertenencias robadas; por consiguiente, la información que aportan los elementos de convicción si arrojan verosimilitud suficiente en cuanto a la existencia del hecho típico imputado, habiendo ocurrido el mismo en la noche del 03 de junio del 2018, con el concurso de dos personas, tal como lo exige el tipo penal del artículo 189° numeral 4 del código penal; quedando pendiente de esclarecerse el tipo de participación del

adolescente investigado (como autor o cómplice), pues él ha negado los cargos que le ha formulado el Ministerio Público.

4.- Que, en cuanto a la recomendación de la Psicóloga integrante del Equipo Multidisciplinario, ésta no abunda en razones o en información necesaria, o en mejores elementos de juicio para saber de qué modo en las circunstancias del trabajo de la abuela, sin padres a su alrededor, y en medio de una familia disfuncional, podría intervenir el SOA Tumbes, a fin de evitar el internamiento del menor. En ese caso, si bien el menor infractor no es considerado como un sujeto peligroso, ni el hecho representa mayor gravedad, pues las lesiones, el bien hurtado, y las características del hecho denunciado (cogoteo y robo al paso), sin uso de arma, si parece cierto que el menor anda en malos pasos, pues interviene el mismo día en dos eventos que infraccionan la ley penal, y estando en libertad podría entorpecer la actividad probatoria, o rehuir a la acción de la justicia y en ese caso, es mejor disponer su internamiento en el Centro de Internamiento Juvenil Miguel Grau de Piura, por el tiempo que dure la investigación judicial, conforme al artículo 221° del código de los niños y adolescentes aprobado por Ley 27337, para la investigación estando el adolescente interno, contado a partir de su ingreso; a fin de que reciba la atención adecuada para su protección integral.----

- c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida:

Si se condice, pues mediante sentencia se declaró responsable al adolescente P.J.B.F (17) como coautor de la Infracción a La Ley Penal contra el patrimonio en su modalidad de ROBO AGRAVADO (art. 188 concordante con los incisos 2) y 4) del artículo 189 del Código Penal) en agravio de JULIANA ELIZABETH COLUMBUS ZAPATA y se le impone la medida socioeducativa de Internación por un periodo de DOS AÑOS (02), Medida Socio educativa que deberá cumplir de manera efectiva en el Centro Juvenil de Varones “Miguel Grau” de Piura y cuya medida se computará desde el día tres de julio del dos mil dieciocho que fue detenido y vencerá el día dos de julio del dos mil veinte (03/07/2016 – 02/07/2020) cumplido el periodo dispuesto será inmediatamente externado, siempre que no pese en su contra otro mandato de internación dispuesto por autoridad competente; Oficiese al Centro Juvenil para su cumplimiento, acompañándose copia certificada de la presente sentencia.

- d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución analizada contiene un razonamiento secuencial y conexo entre los hechos denunciados y la norma jurídica aplicarse, evidenciándose el análisis separado y en conjunto de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo, sustentado también en los informes del equipo multidisciplinario obrante en autos de oficio y los medios probatorios aportados por el Ministerio Público, pudiéndose concluir que estamos frente una

resolución judicial que de manera congruente ha coincidido con la sentencia emitida, por contener un adecuado razonamiento judicial.

- e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

La resolución analizada si contiene un adecuado razonamiento judicial, pues ha sustentado de manera directa, individual y conjunta un análisis de hechos secuencial con el análisis de derecho, llegando a una conclusión final que se condice con la preliminar, que detalla y explica los motivos congruentes del porque correspondía aplicar el internamiento preventivo, respetando de esta manera el principio de congruencia y debido proceso, aunado al hecho que al ser atendible y precisa para las partes, se garantiza también el interés superior del adolescente y el derecho a una resolución debidamente motivada.

Caso 8: Exp. 966– 2020-0-2601-JR-FP-01

a) Hechos investigados:

La representante del Ministerio Público solicitó la apertura de proceso contra V.C.L.O (17) (reserva de nombre en atención al principio de serva de identidad de menores), identificado con DNI N° 75136228; como presunto COAUTOR de la infracción a la ley penal contra El Patrimonio, en la figura de ROBO AGRAVADO, prescrito en el artículo 188° -tipo base- en concordancia con los incisos 2) *durante la noche o en lugar desolado*, 4) *con el concurso de dos o más personas*, del artículo 189° del Código Penal – tipo agravado-, en agravio de ALEXIA MAILYN QUIROS CHUYES (21); en mérito a los siguientes fundamentos:

El día 17 MAYO2022 a horas 19:30 aprox, en circunstancias que se dirigía a su domicilio en la dirección de la AV. Belaunde Terry a la altura de los edificios se estaciona un vehículo menor moto taxi color rojo, del cual descenden dos personas de sexo masculino el primero vistiendo con polo sin mangas color negro con inscripción en la parte delantera con letras blancas Brooklyn y short de diferente colores sin prenda de cabeza de tés trigueño de estatura de 1.65 aprox. cabello semi ondulado con sandalias negras con franjas rojas el mismo que tiene un tatuaje en el brazo derecho y la segunda persona estaba vestido con chompa color negra y una gorra color blanca no percatándose más características físicas de las demás personas que se encontraban siendo que el primer sujeto descrito líneas arriba descendió del vehículo y le arrebató el celular que portaba en su mano izquierda luego le arrebató la mochila de color negro por lo que la denunciante sujeta con fuerza la mochila en ese momento el individuo le propina un puñete en el brazo izquierdo y jala con fuerza la mochila

color negro motivo por el cual la denunciante cae al suelo luego los individuos abordan el vehículo menor para darse a la fuga en ese momento se les cruza una camioneta y les cierra el paso en ese momento la denunciante le pide auxilio a un amigo de su papa que se encontraba transitando por el lugar, logrando capturar a uno de los individuos, y el vehículo de placa 8949 -OM, menor antes descrito en el cual se desplazaban el mismo que tenía en su poder la mochila antes mencionada, haciéndose presente un vehículo policial, para posteriormente trasladar a la denunciante y al intervenido a esta dependencia policial formulando su respectiva denuncia.

b) Fundamentos de la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Se precisan literalmente los fundamentos expuestos en la resolución analizada.-

PRIMERO.- El artículo 184° del Código de los Niños y Adolescentes establece en su segundo párrafo que el niño o adolescente infractor mayores de catorce (14) años, será pasible de medidas socioeducativas y en concordancia con el artículo 209° señala internación preventiva debidamente motivada solo puede decretarse a partir de los primeros recaudos, siempre que sea posible tener la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo;
- b) b) Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años;
- c) c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad.

El Juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de los literales b), c), d) y e) del artículo 235 o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y sólo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. La internación preventiva tiene una duración máxima de cuatro meses, prorrogables, a solicitud del Ministerio Público, hasta por dos meses, cuando el proceso sea complejo o concurren circunstancias que importen una especial dificultad. Vencido dicho plazo, el Juez puede imponer comparecencia con restricciones. En ese sentido estando la medida solicitada por el Ministerio Público, este Juzgado considera que debe considerar por un lado, la gravedad del ilícito penal invocado así como los elementos de convicción y la vinculación con el infractor denunciado y en ese contexto tener en cuenta el principio de proporcionalidad entre la medida solicitada y el hecho típico alegado en el marco de la razonabilidad como parte de la Tutela Jurisdiccional.

SEGUNDO: En cuanto al primer presupuesto material de elementos de convicción: Cabe sostener que para que se configure el presente presupuesto, no se exige la certeza de la responsabilidad de los adolescentes, pero sí que existan suficientes elementos de convicción que lo vinculen con el hecho ilícito

investigado sea como autor (inmediato, mediato o coautoría) u otro grado de participación (cómplice o instigador). Analizados los actuados, se procede a desarrollar los siguientes elementos probatorios que vinculan al menor investigado con los hechos que sustentan el proceso a partir de los siguientes medios probatorios

- Acta de Intervención Policial N°229-2022-Uneme-Tumbes, de fecha 17 MAYO de 2022, en la cual el personal policial a bordo de la UU.MM PL-20555, perteneciente a la UNEME-Tumbes, constata que en circunstancias que se encontraban realizando un patrullaje preventivo, fueron alertados por moradores del lugar que en la Av. Aviación Ref. frente a los edificios,- Centro poblado Andrés Araujo moran, un grupo de personas había retenido a un presunto delincuente, motivo por el cual personal PNP se constituyó al lugar antes mencionado, en donde se visualizó un aprox. de diez (10) personas quienes tenían retenido a una (01) persona de sexo masculino, de tez trigueña, de 1.65 cm aprox de estatura, que vestía un polo manga corto, color negro con franjas blancas, con logotipo NIKE, con letras BROOKLYN, shorts de tela de varios colores y sandalias de color negro con blanco y rojo, con corte superior de justicia de tumbes segundo juzgado de familia permanente de tumbes 14 letras SUPMC, quien responde al nombre de V.C.L.O (17), a bordo de un Vehículo Menor trimovil, marca WANXIN, color ROJO, con placa de rodaje N° 8949-0M. Asimismo se hizo presente en la CPNP ANDRES ARAUJO MORAN una persona de sexo femenino, quien se identificó como ALEXIA MAILY QUIROZ CHUYES (21), quien indica y reconoce a la persona antes mencionada, el mismo que estaba en compañía de dos (02) personas de sexo masculino, quienes habían arrebatado su teléfono celular, marca IPHONE, MODELO 12, valorizado 2,900 soles aproximadamente en circunstancias que se encontraba caminando por la vereda a la altura del restaurante Las Gaviotas es donde se percata que desciende de la mototaxi antes mencionada un sujeto quien le arrebató su teléfono celular y una mochila color negro es en ese momento que comienza a forcejear y pedir ayuda, por lo que los sujetos emprenden su huida a bordo del vehículo menor, donde con ayuda de los moradores del lugar lograron capturar el vehículo menor con la persona antes mencionada se procedió a trasladar al intervenido y vehículo menor trimovil hasta la COM. ANDRES ARAUJO, siendo puesto a disposición de la sección de Delito y faltas, en calidad de RETENIDO.
- Acta de registro personal, de fecha 17 de mayo del año dos mil veintidós, en la cual se deja constancia del resultado de dicha diligencia practicada al adolescente V.C.L.O (17), a quien se le encuentra un equipo celular táctil, color azul, marca REDMI 9c, un (01) chip movistar, código N° 4022152374347, una (01) tarjeta de crédito BCP N° 4557880605370596.
- Acta de detención, de fecha 17 de mayo de 2022, de la persona de V.C.L.O (17), con lo cual se acredita que su detención se ha realizado en flagrancia delictiva.
- Acta de incautación de teléfono celular, de fecha 17 de mayo de 2022, procediendo a incautar un teléfono celular marca REDMI 9c, color azul, pantalla táctil, el mismo que no se logró identificar el IMEI, por motivo que el equipo celular se encuentra apagado, batería incorporada, con un micro chip movistar, código N° 4022152374347, se le encontró en el bolsillo derecho de su short a la persona de V.C.L.O (17).
- Acta de embalaje y lacrado de equipo celular, de fecha 17 de mayo de 2022, se lacra con papel color blanco y cinta un teléfono celular marca REDMI 9c, color azul, pantalla táctil, el mismo que no se logró identificar el IMEI, por motivo que el equipo celular se encuentra apagado, batería incorporada, con un micro chip movistar, código N° 4022152374347.

- Formulario ininterrumpido de cadena de custodia, de fecha 17 de mayo de 2022 que contiene un (01) teléfono celular marca REDMI 9c, color azul, pantalla táctil, el mismo que no se logró identificar el IMEI, por motivo que el equipo celular se encuentra apagado, batería incorporada, con un micro chip movistar, código N° 4022152374347.
- Acta de incautación embalaje y lacrado de tarjeta de crédito, de fecha 17 de mayo de dos mil Corte Superior De Justicia De Tumbes - Juzgado De Familia Permanente de Tumbes 15 veintidós, se incauta una (01) tarjeta de crédito BCP N° 4557880605370596.
- Formulario ininterrumpido de cadena de custodia, de fecha 17 de mayo de dos mil veintidós, que contiene una (01) tarjeta de crédito, color azul con anaranjado, perteneciente al BCP N° 4557880605370596.
- Acta de incautación y traslado de vehículo menor, de fecha 17 de mayo de 2022, se incauta el vehículo menor trimovil de pasajeros con placa de rodaje N° 8949-OM, color rojo, marca WANXIN, serie LDAPAK101JGD37542, motor N° WX162FMJ218J37542.
- Formulario ininterrumpido de cadena de custodia, de fecha 17 de mayo de 2022, un (01) vehículo menor trimovil de pasajeros con placa de rodaje N° 8949-OM, color rojo, marca WANXIN, serie LDAPAK101JGD37542, motor N° WX162FMJ218J37542.
- Acta de situación de vehículo menor, de fecha 17 de mayo de 2022, del vehículo menor trimovil de pasajeros con placa de rodaje N° 8949-OM, color rojo, marca WANXIN, serie LDAPAK101JGD37542, motor N° WX162FMJ218J37542.
- Acta de denuncia verbal, a folios 31, de fecha 17 de mayo de 2022, en la que se señala que siendo 21:35 horas del 17 MAYO 2022, en la comisaria Andrés Araujo Moran, se presentó la persona de Aléxiá Máily QUIROZ CHUYES (21), quien refirió que el día 17 MAYO2022 a horas 19:30 aprox, en circunstancias que se dirigía a su domicilio en la dirección de la AV. Belaunde Terry a la altura de los edificios se estaciona un vehículo menor moto taxi color rojo, del cual descienden dos personas de sexo masculino el primero vistiendo con polo sin mangas color negro con inscripción en la parte delantera con letras blancas Brooklyn y short de diferente colores sin prenda de cabeza de tés trigüeño de estatura de 1.65 aprox. cabello semi ondulado con sandalias negras con franjas rojas el mismo que tiene un tatuaje en el brazo derecho y la segunda persona estaba vestido con chompa color negra y una gorra color blanca no percatándose más características físicas de las demás personas que se encontraban siendo que el primer sujeto descrito líneas arriba descendió del vehículo y le arrebató el celular que portaba en su mano izquierda luego le arrebató la mochila de color negro por lo que la denunciante sujeta con fuerza la mochila en ese momento el individuo le propina un puñete en el brazo izquierdo y jala con fuerza la mochila color negro motivo por el cual la denunciante cae al suelo luego los individuos abordan el vehículo menor para darse a la fuga en ese momento se les cruza una camioneta y les cierra el paso en ese momento la denunciante le pide auxilio a un amigo de su papa que se encontraba transitando por el lugar, logrando capturar a uno de los individuos, y el vehículo de placa 8949 -OM, menor antes descrito en el cual se desplazaban el mismo que tenía en su poder la mochila antes mencionada, haciéndose presente un vehículo policial, para posteriormente trasladar a la denunciante y al intervenido a esta dependencia policial formulando su respectiva denuncia.

- Acta de Constatación Policial, de fecha 18 de mayo de 2022, con resultado positivo, apreciándose cámaras de seguridad instaladas en un inmueble de tres niveles, consultando sobre la operatividad de las cámaras, las mismas que se encuentran operativas. • Acta de entrega y recepción y constatación domiciliaria, de fecha 18 de mayo de 2022, donde se hace entrega de la boleta de venta electrónica N° B905- 00025932, junto a un cronograma de pago mensual de la operadora entel.
- Acta de búsqueda de información, mediante el cual se solicita información de la persona con el sobrenombre de "OREJAS", con resultado negativo.
- Acta de visualización de teléfono celular, de fecha 19 de mayo de 2022, en el cual se deja constancia que el menor detenido no autoriza el deslacrado ni visualización del equipo celular.
- Acta de constatación domiciliaria, en el domicilio donde se refiere viviría el adolescente denunciado.
- Acta de búsqueda de domicilio, de fecha 19 de mayo de 2022, donde se deja constancia que no se encontró el lote 12 de la manzana B.
- Declaración del efectivo policial Cristhian Agustín Silva Silva, de fecha 18 de mayo de 2022, que la que relata que en circunstancias que se encontraban realizando patrullaje preventivo en la jurisdicción de Andrés Araujo Moran se recepcionó una llamada telefónica de base orión, indicando que ha inmediaciones de los edificios de Puyango, se había suscitado un robo motivo por el cual nos constituimos de inmediato al lugar antes mencionado, presentes en la calle aviación se observó un grupo de personas de ambos sexos de aproximadamente diez personas en el cual tenían retenido a una persona de sexo masculino y un vehículo menor trimovil color rojo, los mismo que manifestaron que minutos antes la persona retenida habría participado en un robo a una persona de sexo femenino la cual le arrebataron su teléfono celular, tomando conocimiento de los hechos se procedió a reducir al intervenido, trasladándolo a la CPNP Andrés Araujo junto al vehículo menor, asimismo en el interior de la COMPNP Andrés Araujo Moran, se hizo presente la persona agraviada de Alexia Quiroz Chuyes (21), la misma que manifestó que la persona intervenida era uno de los participantes que le habían arrebatado su teléfono móvil reconociéndolo plenamente a la persona retenida y al vehículo menor. Asimismo, él no se pudo realizar el acta de arresto ciudadano por motivo de que las personas en todo momento se negaron a brindar sus generales de ley por miedo a represalias por lo que se deja constancia para los fines correspondientes, que se le redujo a **V.C.L.O (17)**, a cine metros del lugar de los hechos aproximadamente, señala que **V.C.L.O (17)**, vestía un polo manga corta (tipo bivirí deportivo), de color negro con franjas blancas con la marca NIKE, y número once en color blanco, también llevaba una trusa de diferentes colores, con sandalias rojas negras con blancas que tenía descripción SUPMC.
- Declaración del efectivo policial Gian Pool Dodofredo Gónzales Flores, de fecha 18 de mayo de 2022, refiere que en circunstancias que nos encontrábamos realizando patrullaje preventivo en la jurisdicción de Andrés Araujo Moran se recepcionó una llamada telefónica por parte de nuestra base el cual indicaba que ha inmediaciones de los edificios en Andrés Araujo Moran, se habla suscitado un hecho delictivo (robo), motivo por el cual nos constituimos de inmediato al lugar antes mencionado, nos constituimos a la calle aviación se visualizó un grupo de diez personas de ambos sexos de aproximadamente, el cual tenían retenido a una persona de sexo masculino y a bordo de un vehículo menor trimovil de pasajeros, preguntando sobre lo sucedido las personas manifestaron que minutos antes la persona retenida habría sido uno de los participantes del robo del celular a una persona de sexo femenino, por tal motivo se

procedió a reducir al intervenido, trasladándolo a la CPNP Andrés Araujo junto al vehículo menor, llegando al cabo de un rato la persona de Alexia Quiroz Chuyes (21), quien menciona ser la agraviada, la misma que manifestó que la persona intervenida era uno de los participantes que le habían arrebatado su teléfono móvil, reconociendo a la persona retenida como uno de los partícipes. Se dejó constancia de que el motivo de no haber realizado el acta de registro ciudadano fue porque las personas que detuvieron al detenido se negaron a brindar sus datos por miedo a represalias.

- Declaración de la agraviada Alexia Mailyn Quiroz Chuyes, de fecha 18 de mayo de 2022, quien refiere que, me encontraba caminando por los edificios con dirección hacia mi casa, donde por la picantería Las Gaviotas me percaté que se bajan dos hombres y uno de ellos que está vestido con chompa negra y una gorra blanca, me arrebató el teléfono y se sube a la moto, y el otro chico me quita la mochila, él estaba vestido con un biviér de negro y su short era de colores, tuvimos un forcejeo el cual me dejó marca en mi brazo izquierdo, el que manejaba solo vi que estaba con una capucha negra, después se subieron a la motokar roja, el cual pude distinguir la letra OM de su placa, después seguí la moto, justo estaba por ahí un amigo de mi papá que le dicen orejón del cual desconozco su nombre, el cual agarró un ladrillo y lo tiro hacia la moto, no sé si le cayó al conductor, pero la moto tambaleó aun así siguió avanzando, para después como a la altura del gallo más gallo donde preparan caldo, tiraron la mochila cerca de un villar, la recojo y sigo persiguiéndolos, ya a la salida de los edificios, la moto se topa con una camioneta negra el cual no pudo avanzar por que la calle era estrecha, es ahí que llega el amigo de mi papá que le había tirado un ladrillo llega a impedir que se escape el conductor, vi que los demás salieron corriendo siguiendo la misma ruta, y al cabo de unos pocos minutos llegó un motorizado a detener al chico, señala que V.C.L.O (17), iba vestido con un short de colores con un biviér negro, era delgado, él fue con quien forcejeé con mi mochila.
- Declaración jurada simple de Alexia Mailyn Quiroz Chuyes, de fecha 18 de mayo de 2022, quien declara ser propietaria del celular marca Iphone 12 mini, color negro con case negro, chip de la operadora entel.
- Declaración referencial de V.C.L.O (17), de fecha 18 de mayo de 2022, quien se abstiene de declarar haciendo uso de su derecho a guardar silencio.
- Consulta vigente requisitorias persona, del DNI N° 75136228, del adolescente V.C.L.O (17).
- Consulta vigente antecedentes, del DNI N° 75136228, del adolescente V.C.L.O (17).
- Certificado Médico Legal N° 004138 – L, de fecha 17 de mayo del año dos mil veintidós, practicado a Alexia Mailyn Quiroz Chuyes (21), el cual certifico lo siguiente: excoriaciones ungueales, dos (02), de 20 x 02 cm. y de 18 x 0.2 cm. rojiza, vertical, tumefacta, paralela entre sí que abarca desde brazo derecho tercio inferior hasta antebrazo derecho dos tercios superiores, cara lateral externa. equimosis rojiza de 02 cm. de dm. mas tumefacción subyacente en flexura de codo izquierdo, concluyendo: 1) Presenta lesiones traumáticas recientes ocasionadas por agente contuso y por uña humana. 2) Por lo que requiere un (01) días de atención facultativa por tres (03) días de incapacidad médico legal, suscrito por el Médico Legista Martha Patricia Díaz Guevara.
- Certificado Médico Legal N° 004139 – L-R, de fecha 17 de mayo del año dos mil veintidós, practicado a VÍCTOR CÉSAR LESCANO ORTÍZ (17), concluyendo: 1) No presenta lesiones traumáticas externas

recientes. 2) Por lo que no requiere de incapacidad médico legal. Suscrito por el Médico Legista Martha Patricia Díaz Guevara.

- Referencial policial, del DNI N° 75136228, del adolescente **V.C.L.O (17)**, donde se observa que el mismo cuenta con varias denuncias por infracción a la ley penal.
- Ficha RENIEC de **V.C.L.O (17)**, nacido el 22 de septiembre de 2004, con lo que se acredita su minoría de edad en el momento de los hechos.
- Copia del Expediente N° 00345-2022-0-2601-JR-FP-02, seguido en el Segundo Juzgado de Familia de Tumbes, en la cual se ha emitido la resolución Uno, de fecha 16 de febrero de 2022, que declara: promovida la investigación judicial a V.C.L.O (17), por la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves, en agravio de Jair Paul Jiménez Chore (23). habiendo declarado fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones a favor de V.C.L.O (17), dictando las medidas de comparecencia, 5) no cometer actos de connotación penal o calificados como infracción a la ley penal.
- RAZÓN de fecha 18 de mayo de 2022 de la asistente administrativo Elida Saavedra Sandoval, que da cuenta de los procesos del adolescente **V.C.L.O (17)**, por infracción a la ley penal, seguido en la Carpeta Fiscal N° 152-2018, 074-2020, 397-2021, 606-2021, adjuntando los reportes de dichas investigaciones. Respecto del Inciso a) del Artículo en mención hay suficientes elementos probatorios que vinculan al adolescente como coautor de la comisión del acto infractor en tanto que la agraviada Alexia Mailyn Quiros Chuyes en su declaración dada a nivel policial indica que le pudo reconocer el adolescente Víctor César Lescano Ortiz como la persona que le arrebató la mochila, él estaba vestido con un biviér de negro y su short era de colores, si bien el adolescente a nivel policial ha hecho el uso de su derecho de guardar silencio; además el adolescente no niega los hechos conforme se advierte de la audiencia en sede judicial. De lo que se evidencia se cumple con el primer presupuesto, de existir suficientes elementos de convicción porque vinculan al adolescente razonablemente con la infracción a la Ley penal, esto es, existen elementos de convicción que nos permiten estimar razonablemente la comisión de la infracción a la ley penal vinculando al menor; como un hecho tipificado como delito previsto en el Artículo 188° -tipo base- en concordancia con los incisos 2) durante la noche o en lugar desolado, 4) con el concurso de dos o más personas, del artículo 189° del Código Penal – tipo agravado-, que lo vinculan a Víctor César Lescano Ortiz (17), cumpliéndose con el presente requisito.

TERCERO: Respecto a la sanción penal; conforme a la naturaleza de la infracción penal investigada se encuentra tipificada en el Artículo 188° -tipo base- que establece: El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. en concordancia con los incisos 2) durante la noche o en lugar desolado, 4) con el concurso de dos o más personas, del artículo 189° del Código Penal – tipo agravado, que establece: La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: (...) 2. Durante la noche o en lugar desolado. 4. Con el concurso de dos o más personas. Por tanto se cumple con este requisito, toda vez que la prognosis de la pena, señala se sanciona con más de cuatro años de pena privativa de libertad como lo ha señalado el Ministerio Público;

CUARTO.- Finalmente el riesgo razonable de eludir a acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad. Debemos indicar que existen fundadas razones para presumir válidamente que el adolescente investigado, pueda eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad, puesto que se trata de un adolescente involucrado anteriormente en otro proceso penal, conforme ha sido expuesto en audiencia, la madre del adolescente indica que su hijo anteriormente se ha visto inmerso en procesos judiciales, lo que guarda relación con lo señalado por el Ministerio Público, adjuntando copia del expediente N° 00345-2022-0-2601-JR-FP-02, seguido en el Segundo Juzgado de Familia de Tumbes, en la cual se ha emitido la resolución Uno, de fecha 16 de febrero de 2022, que declara: promovida la investigación judicial a **V.C.L.O (17)**, por la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves, en agravio de Jair Paul Jiménez Chore (23). habiendo declarado fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones a favor de Víctor César Lescano Ortíz (17), dictando las medidas de comparecencia, 5) no cometer actos de connotación penal o calificados como infracción a la ley penal, medida que el adolescente ha incumplido involucrándose nuevamente en un proceso penal, de lo que se podría desprende que el adolescente investigado es proclive de cometer actos como los que son materia del presente proceso; asimismo, su progenitora tiene dirección distinta a la del adolescente y del acta de Constatación Policial y la declaración del menor investigado a nivel policial queda corroborado que el adolescente no vive con sus padres sino que vive con sus abuelos, ello también ha sido señalado por la madre del investigado, tal como consta en el acta de búsqueda de domicilio; por lo tanto, los principales obligados en su crianza no existirían y los abuelos del menor por su avanzada edad no garantizan que éste no evada a la justicia y que ellos ejerzan un estricto control en la crianza; además, en los actuados no se ha demostrado que se encuentre realizando estudios u oficio que permita hacer prever que no existe ese riesgo razonable. También, se debe tener en cuenta que, de la revisión del sistema integrado judicial, se advierte que el adolescente Víctor César Lescano Ortíz, mantienen denuncias y/o medida socioeducativa impuestas, así también a nivel policial, cuenta con una serie de denuncias, a lo que se agrega, la forma y circunstancias en que se produjeron los hechos. Por tanto se desprende que el adolescente, presenta indicadores de reincidir en hechos similares, más aún si los responsables de su cuidado han demostrado falta de control y descuido.

QUINTO: En cuanto a la gravedad del hecho cometido, debe tenerse en cuenta la magnitud del daño causado que resulta ser el delito de Robo agravado, el cual reviste de gravedad al ser un delito pluriofensivo, del cual inclusive pueden derivar la comisión de otros delitos, por lo que la imposición de la medida de internamiento preventivo resulta ser proporcional a los hechos atendiendo la edad del investigado. sexto: En cuanto al plazo de la internación preventiva, la norma establece una duración máxima de cuatro meses, prorrogable a dos meses más a solicitud del Ministerio Público, en el presente caso, el presente despacho considera que a efecto de garantizar la acción de la justicia y no obstaculice la averiguación de la verdad, estima que proporcionalmente debe establecerse la internación preventiva de tres meses del menor investigado, en el establecimiento de Centro Juvenil de Piura, en la ciudad de Piura, que permita además cumplir con el internamiento preventivo y en esta modalidad se ejecute una serie de actividades estructuradas adecuadas a los objetivos propuesto en cada programa. Brindando al adolescente atención integral a través de programas graduales, secuenciales, integrados, que actúen en forma evolutiva en el adolescente, hasta conseguir el autogobierno logrando su reinserción.

c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida

Si se condice, pues en la sentencia emitida se impuso la medida de internamiento por el periodo de dos años al adolescente infractor V.C.L.O (17) (reserva de nombre en atención al principio de serva de identidad de menores), como coautor de la Infracción A La Ley Penal contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de Alexia Mailyn Quiros Chuyes (21), la misma que se cumplirá en el Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, centro que deberá expedir informes evolutivos cada tres meses a este despacho, y se computará desde la fecha de la imposición del mandato preventivo de internamiento, esto es, desde el 20 de mayo del 2022 hasta el 19 de agosto del 2022; sin perjuicio del beneficio de semilibertad que la Ley otorga. Asimismo, fijo una reparación civil de dos mil con 00/100 SOLES (S/. 2,000.00), que deberá pagar el adolescente infractor V.C.L.O (17) en forma solidaria con sus progenitores a favor de la agraviada Alexia Mailyn Quiros Chuyes.

d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución que dispone el internamiento preventivo del menor denunciado por el Ministerio Público, contiene una motivación aparente, pues si bien el resultado preliminar con el final se condicen; no obstante ello existe una ausencia de análisis entre los hechos denunciados y la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo, que hace evidente la precisión secuencial entre el análisis de hechos y el de derecho que hacen que aribe a la conclusión final; pues si bien son muchos los factores que hacen determinante que deba aplicarse el internamiento preventivo, ello en atención a los antecedentes del menor y la actitud del miso dentro de la investigación; sin embargo estando a la excepcionalidad de la media y a fin de proteger el debido proceso y el interés superior del niño, debía realizarse un análisis de hechos conducente con el de derecho que haga viable explicar a las partes el porqué de la decisión tomada, la cual fue ratificada en sentencia, ello en aras de proteger al adolescente infractor, en atención a la falta de soporte familiar y reglas de conducta que lo hacían proclive a convertirse en un adulto con tendencia a delinquir.

e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

En la resolución analizada contiene razonamiento judicial formal pero no completo, pues no existe un análisis de hechos sino solamente una precisión de los mismos; y, en cuanto al análisis de derecho, si bien estando a los medios probatorios de oficio recabados resultaba completa la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; sin embargo logra advertirse una motivación aparente en cuanto al análisis de cada uno de estos que hace a la resolución emitida, una resolución con razonamiento formal pero no ideal, estando ello a la naturaleza de los procesos de infracción a la Ley Penal por la edad de los adolescentes y las implicancias de la aplicación del internamiento preventivo.

En suma la resolución analizada es formal por contener la precisión de todos los medios probatorios y concurrencia de los presupuestos que hacen factible la aplicación del internamiento preventivo; no obstante ello el defecto que contiene conforme a los lineamientos de la tesis realizada, es el hecho que no se advierte un análisis de los hechos que nos lleve directo a la aplicación de la norma correcta con un adecuado análisis del derecho como consecuencia del mismo, que haga congruente o consecuente el hecho denunciado a la decisión arribada de manera clara y precisa; teniendo en cuenta que la finalidad de las resoluciones judiciales independientemente de la materia que resuelvan, es que logren ser entendidas por las partes procesales y/o los intervinientes en los procesos judiciales, mucho más si en el caso de análisis estamos frente a una resolución que resuelve respecto al derecho a la libertad de un menor de edad.

Caso 9: Exp. 366– 2021-0-2601-JR-FP-01

a) Hechos investigados:

Se tiene que por parte del Representante del Ministerio Público la Fiscalía Provincial Mixta de Tumbes, formaliza denuncia penal a fin de que se promueva investigación a favor del adolescente S.A.J.S (15) (reserva de nombre en atención al principio de serva de identidad de menores) como presunto co-autor de la infracción a la ley penal contra EL PATRIMONIO en la modalidad de robo agravado, en agravio de la persona Lucila Ines Morales Silva (infracción prevista en el artículo 188° como tipo base y con las agravantes del Inciso 3) y 4) del artículo 189° del Código penal, esto es a mano armada y con el concurso de dos o más personas; según los siguientes hechos:

Siendo el día 05 de febrero del 2021 a horas 14:00 aproximadamente, la persona de Lucila Ines Morales Sila (36), en circunstancias que se encontraba saliendo de su domicilio ubicado en calle las Rosas Mz I lote 22 Tumbes con dirección a su centro de trabajo, Estando a media

cuadra, observa que se le acerca un mototaxi (con número de registro 11496), el mismo que se encontraba siendo conducido por el adolescente S.A.J.S (15), bajando una persona que venía como pasajero en dicho vehículo (posteriormente identificado como JEANCARLOS ESTEBAN ALVAREZ RIVAS), quien se le acerca, amenazándola con un cuchillo, insultándola, cogiéndole su celular y su billetera, siguiéndola insultando, le decía suelta concha de tu madre, la agraviada tenía su equipo celular en su mano izquierda y su billetera en su mano derecha, encontrándose forcejando con éste sujeto, pidiéndole la agraviada que no le robe su celular porque tenía información importante del trabajo; sin embargo, éste sujeto le repetía lo mismo suelta concha de tu madre, en el momento que se encontraban forcejando, la agraviada se cae hacia atrás, no percatándose donde se fueron, levantándose, doliéndole la cabeza, la cintura, no teniendo en su posesión ni su celular ni billetera, siendo apoyada por vecinos del lugar y familiares.

Procedido a darse a la fuga los autores del hecho, momentos en los cuales, personal policial percatándose de la existencia de un grupo de personas, las cuales solicitaron apoyo policial, donde apreciaron a la agraviada en el suelo, quien brindó las características físicas del autor del hecho, el mismo que había subido al vehículo menor de placa de rodaje N° 11496 (dato proporcionado por uno de los transeúntes, identificado posteriormente con placa de rodaje N° M09105); iniciando consigo la búsqueda por parte del personal PNP, logrando ubicarlo e intervenir al vehículo menor en la Av. Panamericana Norte ref. a la altura del SENATI, vehículo que era conducido por una persona de sexo masculino que vestía polo blanco con diseños, short color verde petróleo, sandalias negras con logotipo nike, cabello recortado por los costados y la parte superior larga tipo melena, quien dijo llamarse S.A.J.S (15), de igual forma apreciándose en el asiento del pasajero se encontraba el sujeto de sexo masculino, contextura gruesa, cabello corto, tez trigueña, estatura 1.50 metros aproximadamente, quien vestía un polo con cuello color azul con franjas de color negro, el mismo que se identificó como Jean Carlos Esteban Alvarez Rivas (21), a quien al realizarle el registro personal se le halló en su mano derecha un (01) equipo móvil (celular) marca Huawei, color anaranjado y en la mano izquierda se le encontró un monedero de cuero color negro, conteniendo en su interior un DNI N° 61846526 a nombre de un menor de edad Angello Montalvo Morales, tres (03) tarjetas de entidades bancarias (caja Piura, Interbank y Banco de la nación), tres billetes de cien nuevos soles con serie C9934726K, B6727791S y C4788704P, una moneda de cinco nuevos soles, cinco monedas de diez céntimos, también se le halló en el lado derecho de su cintura entre la pretina de su short color azul con logo tipo de ADIDAS, un

(01) arma blanca (cuchillo), con mango de plástico color negro, marca tramontina; procediendo a trasladarlos a la sede policial.

b) Fundamentos que motivan la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Se precisan los fundamentos literalmente como están consignado en la resolución objeto de análisis.-

TERCERO: La Representante del Ministerio Público ha tipificado la conducta del adolescente S.A.J.S (15) como presunto co-autor de la infracción a la ley penal contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de la persona Lucila Ines Morales Silva (infracción prevista en el artículo 188° como tipo base y con las agravantes del Inciso 3) y 4) del artículo 189° del Código penal, esto es a mano armada y con el concurso de dos o más personas.

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 208° del Código de los Niños y Adolescentes, el Juez en mérito a la denuncia, expedirá la resolución motivada declarando promovida la acción y dispondrá que se tome la declaración del adolescente en presencia de su abogado y del fiscal, determinado su condición procesal que puede ser: la entrega a sus padres o responsables o el internamiento;

QUINTO: Corresponde señalar que La libertad personal tal como lo ha enunciado el Tribunal en reiterada jurisprudencia, éste no es sólo un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico, pero que su ejercicio no es absoluto e ilimitado; de allí que el ejercicio de este derecho puede ser restringido mediante ley, tal como lo autoriza el Art. 2° inciso 24, literal b), de la Constitución Política del Estado Peruano -(STC N° 1230-2002-HC: Caso Tineo Cabrera).

SEXTO.- En ese sentido, el artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes señala que solo podrá decretarse el internamiento preventivo cuando se cumplan los siguientes presupuestos: a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo; b) Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad.

6.1. RESPECTO A SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA ESTIMAR RAZONABLEMENTE LA COMISIÓN DE UN HECHO TIPIFICADO COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL O LEYES ESPECIALES, QUE VINCULEN AL ADOLESCENTE COMO AUTOR O PARTÍCIPE DEL MISMO.- Corresponde señalar que el titular de la acción penal –Representante del Ministerio Público- cuenta con suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito y que vincularían con el adolescente, es así que se tiene:

a. Se tiene que uno de los elementos subjetivos del tipo penal – Infracción penal- para el caso de autos, corresponde al APODERAMIENTO DEL BIEN MUEBLE- es así que se tiene que conforme al acta de intervención de fecha cinco de febrero de 2021, se le intervino al menor investigado S.A.J.S (15) del cual se le solicita mandato de internamiento, así como a su hermano mayor de edad habrían participado de forma conjunta en el hecho materia de imputación, acta de intervención donde al

hermano del menor infractor –JEAN CARLOS ESTEBAN ALVARES RIVAS -mayor de edad- se le encuentra dentro del vehículo placa de rodaje N° M09105 – motokar incautada conforme al acta respectiva, donde en dicha anta se consigna se encuentran los bienes de la parte agraviada que fueron sustraído fuera de la esfera de su propiedad, en tanto y en cuanto, en dicha acta se señala que fueron intervenidos Av. Panamericana Norte ref. a la altura del SENATI, es así que se le encuentran en su poder de los intervenidos dentro del vehículo utilizado para realizar la presunta comisión de la infracción penal que se imputa, los bienes de la parte agraviada consistente en: JEAN CARLOS ESTEBAN ALVAREZ RIVAS (21), a quien al realizarle el registro personal se le halló en su mano derecha un (01) equipo móvil (celular) marca Huawei, color anaranjado y en la mano izquierda se le encontró un monedero de cuero color negro, conteniendo en su interior un DNI N° 61846526 a nombre de un menor de edad ANGELLO MONTALVO MORALES, tres (03) tarjetas de entidades bancarias (caja Piura, Interbank y Banco de la nación), tres billetes de cien nuevos soles con serie C9934726K, B6727791S y C4788704P, una moneda de cinco nuevos soles, cinco monedas de diez céntimos, también se le halló en el lado derecho de su cintura entre la pretina de su short color azul con logo tipo de ADIDAS, un (01) arma blanca (cuchillo), con mango de plástico color negro, marca traontina; lo cual evidencia la presencia de suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito, lo cual se concuerda con la declaración de los efectivos policiales que participaron en la intervención.

b. Se tiene que para cometer el hecho materia de infracción penal, se ha UTILIZADO VIOLENCIA, esto es la amenaza e incluso un arma blanca, tal es así que se acredita con la declaración de la parte agraviada, quien señala en la pregunta número cinco, que para sustraerle sus bienes uno de los autores - JEAN CARLOS ESTEBAN ALVAREZ RIVAS (21) quien estaba como pasajero en el vehículo conducido por el su hermano menor S.A.J.S (15) -, la amenazó con cuchillo y le insulto con la madre, es así que conforme al acta de intervención el cuchillo fue encontrado a uno de los intervenidos que participó de forma conjunta con el menor de quien se solicita su internación preventiva. Además, se tiene en cuenta que dicha intervención ha sido realizada en flagrancia. Lo cual no ha sido negado por el menor en su declaración brindada en la presente audiencia, sumado a ello, se tiene que conforme al certificado Certificado Médico Legal N° 001110-L, de fecha 05 de febrero del 2021, en el cual se concluye: Presenta lesiones traumáticas externas recientes ocasionadas por agente contuso. Por lo que requiere atención facultativa 02 e incapacidad médico legal 06 seis. Evidenciándose con ello aún más la violencia utilizada para apoderarse de los bienes muebles de la parte agraviada.

Por tanto, a criterio de este órgano jurisdiccional, se evidencia la presencia de suficientes elementos de convicción, para estimar razonablemente la vinculación del menor S.A.J.S (15) con la comisión del hecho materia de imputación de infracción penal.

6.2. RESPECTO A QUE EL HECHO PUNIBLE COMETIDO SEA SANCIONADO EN LA LEGISLACIÓN PENAL CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE CUATRO AÑOS.- si bien la conducta que se atribuye al adolescente investigado es la infracción a la ley penal contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de la persona Lucila Ines Morales Silva (infracción prevista en el artículo 188° como tipo base y con las agravantes del Inciso 3) y 4) del artículo 189° del Código penal, esto es a mano armada y con el concurso de dos o más personas, es

así que la pena regulada en dicho tipo penal La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años, lo cual se evidencia que se supera largamente este presupuesto legal., por tanto se tiene por cumplido este presupuesto.

6.3. RESPECTO A RIESGO RAZONABLE DE QUE EL ADOLESCENTE ELUDA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA U OBSTACULIZARÁ LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD.-

a. Respecto a este primer indicador referido a eludir la acción de la justicia, que está referido a sí el menor cuenta con arraigo, corresponde señalar que *Al arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.*

✓ Conforme a lo señalado, corresponde tener en consideración de forma supletoria que resulta aplicable para casos prácticos, en requerimiento de internación preventiva, lo previsto en la casación 631-2015/ Arequipa se ha desarrollado en extenso este presupuesto, es así que el arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas, por tanto el arraigo tiene tres dimensiones, la posesión, el arraigo familiar y el arraigo laboral, el primero referido a la existencia de domicilio conocido o de bienes propios situados dentro del ámbito de alcance de la justicia, el segundo se circunscribe al lugar al lugar de residencia de aquellas personas que tiene lazos familiares con las partes imputadas y el tercero se expresa en la capacidad de subsistencia del imputado que debe de provenir de un trabajo desarrollado en el país. Todo ello, visto en conjunto acreditaría el establecimiento de una persona en un determinado lugar, por tanto, estas circunstancias de arraigo desincentivan la fuga de una persona investigada, que para el caso del menor investigado.

✓ Es así que en audiencia la defensa no ha presentado ningún tipo de documento para acreditar algún tipo de arraigo, que para que caso de autos estaría referido a la exigencia de un tipo de arraigo familiar, tal es así que en audiencia, la defensa sólo se limitó a señalar que como la intervención se produjo el día viernes cinco de febrero y la audiencia se desarrolla en horas de la mañana le ha sido imposible presentar documentos que acredite que su patrocinado está estudiando, lo cual no resulta atendible dicho argumento, por cuanto conforme a la naturaleza de la medida solicita, el arraigo que se tendría que acreditar en autos es un tipo de arraigo familiar, que para el caso de autos no se ha presentado ningún tipo de documento que acredite el domicilio donde viviría el menor, que por ejemplo podría haberse presentado un recibo de servicio (LUZ, AGUA, TELEFONO), que permita evidencia al juzgado mínimamente la existencia de un domicilio cierto donde radicaría el menor, tampoco la defensa no ha presentado una constancia domiciliaria expedida por notarios, Juez de paz o teniente gobernador, que permita evidenciar con documento de fecha cierta el domicilio donde radicaría el menor, por tanto, la defensa no acredita algún tipo de arraigo - familiar, que permita evidenciar la permanencia del menor y de esta forma asumir que no eludirá la acción de la justicia.

b. Respecto a la obstaculización de la averiguación de la verdad.- corresponde señalar que efectivamente conforme a la propia declaración del menor S.A.J.S (15), la otra persona intervenida, es su hermano, estando a ello, se presenta una circunstancia que el menor podría ser manipulado en su declaración, en tanto y en cuanto la otra persona que estaría vinculada con la realización del hecho materia de infracción es su hermano, tal es así, que en esta audiencia el menor S.A.J.S (15) ha señalado

que él no ha estado conduciendo el vehículo sino su hermano mayor, lo cual incluso no ha sido asumido dicho argumento por la defensa, puesto que la defensa señala que era su patrocinado quine estaba manejando el vehículo al momento de la intervención.

SEPTIMO.- Para concluir, corresponde señalar que resulta cierto que la medida más gravosa dentro del proceso como la Internación Preventiva, requiere además del principio de intervención indiciaria la presencia del principio de proporcionalidad o principio de prohibición en exceso. Es así que el principio de proporcionalidad cuenta con tres sub principios: i. examen de idoneidad, ii. examen de necesidad y iii. examen de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Conforme a ello, la Internación Preventiva de cara a la finalidad que se busca, es garantizar la ejecución de la medida a imponerse a futuro y también la presencia del menor investigado, es decir su finalidad es de aseguramiento procesal, por tanto, siempre es una medida idónea que lógicamente está vinculado con la presencia de fundado y graves elementos de convicción. En cuanto a la necesidad, si bien es cierto el país está viviendo un contexto sui generis provocado por la pandemia del covid-19 que viene afectando la salud de las personas habiendo incluso llegado a algunos centros penales del país, el investigado no se encuentra dentro del grupo de personas con riesgo o vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad. Así pues, siendo que el delito atribuido cuya base probatoria da cuenta el auto de prisión preventiva se mantiene; se trata de un delito bastante grave sancionado con una pena privativa de libertad no menos de doce años y el riesgo de fuga subsiste, la medida de internamiento Preventivo, sigue siendo adecuada. Finalmente, si bien a los derechos a la libertad, presunción de inocencia se ha unido el derecho a la salud del investigado no existiendo amenaza cierta e inminente de su afectación en tanto y en cuanto no se acreditado dicha situación –comorbilidad- (la defensa no ha presentado ningún documento que acredite un riesgo de enfermedad que permita ser valorado por este órgano jurisdiccional) con la fecha de presunta comisión hecho delictiva materia de imputación y la forma de su intervención antes desarrollado, igualmente es proporcional dicha medida. Siendo esto así, permite concluir que vienen Convergiendo los tres presupuestos para decretar el internamiento preventivo, lo que sigue es *determinar la duración de la medida coercitiva*. Se tiene que, conforme a los medios de prueba de actuar, incluso evaluación del equipo multidisciplinario, las mismas que tiene que realizarse de forma remota dada la naturaleza actual que vivimos, se evidencia que un plazo razonable por la complejidad de realizar las misma y las audiencias, el plazo razonable es de cuatro meses.

- c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida

Si se condice, pues mediante sentencia se impuso la medida privativa de libertad de internamiento por el periodo de un año y seis meses al adolescente infractor J.S.S.A de diecisiete años, como coautor de la INFRACCIÓN A LA LEY PENAL contra EL PATRIMONIO en la modalidad de ROBO AGRAVADO en agravio de LUCILA INES MORALES SILVA, la misma que se cumplirá en el Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, centro que deberá expedir informes evolutivos cada tres meses a este despacho, y se computará desde la fecha de la imposición del mandato preventivo de internamiento, esto

es, desde el 05 de febrero de 2021 hasta el 04 de agosto de 2022; sin perjuicio del beneficio de semilibertad que la ley otorga. Asimismo, fijo una REPARACION CIVIL de TRESCIENTOS SOLES, que deberán pagar el adolescente infractor de manera proporcional en forma solidaria con sus progenitores a favor de la agraviada LUCILA INES MORALES SILVA.

d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución que dispone el internamiento preventivo del menor denunciado por el Ministerio Público, contiene una motivación aparente, pues si bien el resultado preliminar con el final se condicen; no obstante ello existe una ausencia de análisis entre los hechos denunciados y la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; pues si bien son muchos los factores que hacen determinante que deba aplicarse el internamiento preventivo, ello en atención a la conducta del menor en el proceso, la falta de medios probatorios que acrediten el arraigo y la no configuración de todos los presupuestos para la procedencia del internamiento; sin embargo estando a la excepcionalidad de la media y a fin de proteger el debido proceso y el interés superior del adolescente, debía realizarse un análisis de hechos conducente con el de derecho que haga viable explicar a las partes el porqué de la decisión tomada, la cual fue ratificada en sentencia, ello en aras de proteger al adolescente infractor, en atención a la falta de soporte familiar y reglas de conducta que lo hacían proclive a convertirse en un adulto con tendencia a delinquir; máxime si tratándose de menores de edad el principio de legalidad y motivación de la resolución debe verificarse paso a paso a fin de no vulnerarlos.

e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

En la resolución analizada contiene razonamiento judicial formal pero no ideal, pues no existe un análisis de hechos sino solamente una precisión de los mismos; y, en cuanto al análisis de derecho, si bien estando a los medios probatorios de oficio recabados resultaba completa la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; sin embargo logra advertirse una motivación aparente en cuanto al análisis de cada uno de estos que hace a la resolución emitida, una resolución con razonamiento formal pero no ideal, estando ello a la naturaleza de los procesos de infracción a la Ley Penal por la edad de los adolescentes y las implicancias de la aplicación del internamiento preventivo.

En suma la resolución analizada es formal por contener la precisión de todos los medios probatorios y concurrencia de los presupuestos que hacen factible la aplicación del internamiento preventivo; no obstante ello el defecto que contiene conforme a los lineamientos de la tesis realizada, es el hecho que no se advierte un análisis de los hechos que nos lleve directo a la aplicación de la norma correcta con un adecuado análisis del derecho como consecuencia del mismo, que haga congruente o consecuente el hecho denunciado a la decisión arribada de manera clara y precisa; teniendo en cuenta que la finalidad de las resoluciones judiciales independientemente de la materia que resuelvan, es que logren ser entendidas por las partes procesales y/o los intervinientes en los procesos judiciales, mucho más si en el caso de análisis estamos frente a una resolución que resuelve respecto al derecho a la libertad de un menor de edad.

Caso 10: Exp. 966 – 2022-0-2601-JR-FP-01

a) Hechos investigados:

La Fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Tumbes, solicita apertura de proceso penal y solicita internamiento preventivo a favor del adolescente V.C.L.O de 17 años de edad (reserva de nombre en atención al principio de reserva de identidad de menores) como presunto coautor de la Infracción a la Ley Penal contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Alexia Mailyn Quiros Chuyes (21), lo cual lo sustenta en atención a los siguientes hechos:

El día 17 de mayo de 2022, siendo las 20:00 horas, personal policial a bordo de la UU.MM PI-20555, perteneciente a la UNEME-Tumbes, en circunstancias que se encontraban realizando un patrullaje preventivo, fueron alertados por moradores del lugar que en la Av. Aviación Ref. Frente a los edificios – Centro poblado Andrés Araujo Morán, un grupo de personas había retenido a un presunto delincuente. Motivo por el cual personal PNP se constituyó al lugar antes mencionado, en donde se visualizó un aprox. de diez (10) personas quienes tenían retenido a una (01) persona de sexo masculino, de tez trigueña, de 1.65 cm aprox. de estatura, que vestía un polo manga corta, color negro con franjas blancas, con logotipo NIKE, con letras BROOKLYN, shorts de tela de varios colores y sandalias de color negro con blanco y rojo, con letras SUPMC, quien responde al nombre de **V.C.L.O** de 17 años de edad, a bordo de un vehículo menor trimovil, marca WANXIN, color ROJO, con placa de rodaje N° 8949-0M. Posteriormente la agraviada se hizo presente en la CPNP Andrés Araujo Morán, identificándose como Alexia Maily Quiroz Chuyes (21), quien indica y reconoce a la persona antes mencionada, el mismo que estaba en compañía de dos

(02) personas de sexo masculino, quienes habían arrebatado su teléfono celular, marca IPHONE, modelo 12, valorizado en 2,900 soles aprox. en circunstancias que se encontraba caminando por la vereda a la altura del restaurante “Las Gaviotas” es donde se percata que descende de la mototaxi antes mencionada un sujeto quien le arrebató su teléfono celular y una mochila color negro, es en ese momento que comienza a forcejear y pedir ayuda, por lo que los sujetos emprenden su huida a bordo del vehículo menor, donde con ayuda de los moradores del lugar lograron capturar el vehículo menor con la persona antes mencionada, se procedió a trasladar al intervenido y vehículo menor trimóvil hasta la Comisaría Andrés Araujo Morán, siendo puesto a disposición de la sección de delito y faltas, en calidad de retenido.

b) Fundamentos que motivan la decisión que dispone el internamiento preventivo:

Los fundamentos han sido literalmente copias conforme constan en la resolución analizada.-

PRIMERO.- El artículo 184° del Código de los Niños y Adolescentes establece en su segundo párrafo que el niño o adolescente infractor mayores de catorce (14) años, será pasible de medidas socioeducativas y en concordancia con el artículo 209° señala internación preventiva debidamente motivada solo puede decretarse a partir de los primeros recaudos, siempre que sea posible tener la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo;
- b) Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años;
- c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad.

El Juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de los literales b), c), d) y e) del artículo 235 o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y sólo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. La internación preventiva tiene una duración máxima de cuatro meses, prorrogables, a solicitud del Ministerio Público, hasta por dos meses, cuando el proceso sea complejo o concurran circunstancias que importen una especial dificultad. Vencido dicho plazo, el Juez puede imponer comparecencia con restricciones. En ese sentido estando la medida solicitada por el Ministerio Público, este Juzgado considera que debe considerar por un lado, la gravedad del ilícito penal invocado así como los elementos de convicción y la vinculación con el infractor denunciado y en ese

contexto tener en cuenta el principio de proporcionalidad entre la medida solicitada y el hecho típico alegado en el marco de la razonabilidad como parte de la Tutela Jurisdiccional.

SEGUNDO: En cuanto al primer presupuesto material de elementos de convicción: Cabe sostener que para que se configure el presente presupuesto, no se exige la certeza de la responsabilidad de los adolescentes, pero sí que existan suficientes elementos de convicción que lo vinculen con el hecho ilícito investigado sea como autor (inmediato, mediato o coautoría) u otro grado de participación (cómplice o instigador). Analizados los actuados, se procede a desarrollar los siguientes elementos probatorios que vinculan al menor investigado con los hechos que sustentan el proceso a partir de los siguientes medios probatorios:

- Acta de Intervención Policial N°229-2022-Uneme-Tumbes, de fecha 17 MAYO de 2022, en la cual el personal policial a bordo de la UU.MM PL-20555, perteneciente a la UNEME-Tumbes, constata que en circunstancias que se encontraban realizando un patrullaje preventivo, fueron alertados por moradores del lugar que en la Av. Aviación Ref. frente a los edificios, - Centro poblado Andrés Araujo moran, un grupo de personas había retenido a un presunto delincuente, motivo por el cual personal PNP se constituyó al lugar antes mencionado, en donde se visualizó un aprox. de diez (10) personas quienes tenían retenido a una (01) persona de sexo masculino, de tez trigueña, de 1.65 cm aprox de estatura, que vestía un polo manga corto, color negro con franjas blancas, con logotipo NIKE, con letras BROOKLYN, shorts de tela de varios colores y sandalias de color negro con blanco y rojo, con letras SUPMC, quien responde al nombre de **V.C.L.O** de 17 años de edad, a bordo de un Vehículo Menor trimovil, marca WANXIN, color ROJO, con placa de rodaje N° 8949-0M. Asimismo se hizo presente en la CPNP Andrés Araujo Moran una persona de sexo femenino, quien se identificó como Alexia Maily Quiroz Chuyes (21), quien indica y reconoce a la persona antes mencionada, el mismo que estaba en compañía de dos (02) personas de sexo masculino, quienes habían arrebatado su teléfono celular, marca IPHONE, MODELO 12, valorizado 2,900 soles aproximadamente en circunstancias que se encontraba caminando por la vereda a la altura del restaurante Las Gaviotas es donde se percata que desciende de la mototaxi antes mencionada un sujeto quien le arrebató su teléfono celular y una mochila color negro es en ese momento que comienza a forcejear y pedir ayuda, por lo que los sujetos emprenden su huida a borde del vehículo menor, donde con ayuda de los moradores del lugar lograron capturar el vehículo menor con la persona antes mencionada se procedió a trasladar al intervenido y vehículo menor trimovil hasta la COM. Andrés Araujo, siendo puesto a disposición de la sección de Delito y faltas, en calidad de retenido.

- Acta de registro personal, de fecha 17 de mayo del año dos mil veintidós, en la cual se deja constancia del resultado de dicha diligencia practicada al adolescente **V.C.L.O** de 17 años de edad, a quien se le encuentra un equipo celular táctil, color azul, marca REDMI 9c, un (01) chip movistar, código N° 4022152374347, una (01) tarjeta de crédito BCP N° 4557880605370596.

- Acta de detención, de fecha 17 de mayo de 2022, de la persona de **V.C.L.O** de 17 años de edad, con lo cual se acredita que su detención se ha realizado en flagrancia delictiva.

- Acta de incautación de teléfono celular, de fecha 17 de mayo de 2022, procediendo a incautar un teléfono celular marca REDMI 9c, color azul, pantalla táctil, el mismo que no se logró identificar el IMEI, por

motivo que el equipo celular se encuentra apagado, batería incorporada, con un micro chip movistar, código N° 4022152374347, se le encontró en el bolsillo derecho de su short a la persona de **V.C.L.O** de 17 años de edad.

- Acta de embalaje y lacrado de equipo celular, de fecha 17 de mayo de 2022, se lacra con papel color blanco y cinta un teléfono celular marca REDMI 9c, color azul, pantalla táctil, el mismo que no se logró identificar el IMEI, por motivo que el equipo celular se encuentra apagado, batería incorporada, con un micro chip movistar, código N° 4022152374347.

- Formulario ininterrumpido de cadena de custodia, de fecha 17 de mayo de 2022 que contiene un (01) teléfono celular marca REDMI 9c, color azul, pantalla táctil, el mismo que no se logró identificar el IMEI, por motivo que el equipo celular se encuentra apagado, batería incorporada, con un micro chip movistar, código N° 4022152374347.

- Acta de incautación embalaje y lacrado de tarjeta de crédito, de fecha 17 de mayo de dos mil veintidós, se incauta una (01) tarjeta de crédito BCP N° 4557880605370596.

- Formulario ininterrumpido de cadena de custodia, de fecha 17 de mayo de dos mil veintidós, que contiene una (01) tarjeta de crédito, color azul con anaranjado, perteneciente al BCP N° 4557880605370596.

- Acta de incautación y traslado de vehículo menor, de fecha 17 de mayo de 2022, se incauta el vehículo menor trimovil de pasajeros con placa de rodaje N° 8949-OM, color rojo, marca WANXIN, serie LDAPAK101JGD37542, motor N° WX162FMJ218J37542.

- Formulario ininterrumpido de cadena de custodia, de fecha 17 de mayo de 2022, un (01) vehículo menor trimovil de pasajeros con placa de rodaje N° 8949-OM, color rojo, marca WANXIN, serie LDAPAK101JGD37542, motor N° WX162FMJ218J37542.

- Acta de situación de vehículo menor, de fecha 17 de mayo de 2022, del vehículo menor trimovil de pasajeros con placa de rodaje N° 8949-OM, color rojo, marca WANXIN, serie LDAPAK101JGD37542, motor N° WX162FMJ218J37542.

- Acta de denuncia verbal, a folios 31, de fecha 17 de mayo de 2022, en la que se señala que siendo 21:35 horas del 17 MAYO 2022, en la comisaria Andrés Araujo Moran, se presentó la persona de Aléxiá Máily Quiroz Chuyes (21), quien refirió que el día 17 mayo 2022 a horas 19:30 aprox, en circunstancias que se dirigía a su domicilio en la dirección de la AV. Belaunde Terry a la altura de los edificios se estaciona un vehículo menor moto taxi color rojo, del cual descienden dos personas de sexo masculino el primero vistiendo con polo sin mangas color negro con inscripción en la parte delantera con letras blancas Brooklyn y short de diferente colores sin prenda de cabeza de tés trigueño de estatura de 1.65 aprox. cabello semi ondulado con sandalias negras con franjas rojas el mismo que tiene un tatuaje en el brazo derecho y la segunda persona estaba vestido con chompa color negra y una gorra color blanca no percatándose más características físicas de las demás personas que se encontraban siendo que el primer sujeto descrito líneas arriba descendió del vehículo y le arrebató el celular que portaba en su mano izquierda luego le arrebató la mochila de color negro por lo que la denunciante sujeta con fuerza la mochila

en ese momento el individuo le propina un puñete en el brazo izquierdo y jala con fuerza la mochila color negro motivo por el cual la denunciante cae al suelo luego los individuos abordan el vehículo menor para darse a la fuga en ese momento se les cruza una camioneta y les cierra el paso en ese momento la denunciante le pide auxilio a un amigo de su papa que se encontraba transitando por el lugar, logrando capturar a uno de los individuos, y el vehículo de placa 8949 -OM, menor antes descrito en el cual se desplazaban el mismo que tenía en su poder la mochila antes mencionada, haciéndose presente un vehículo policial, para posteriormente trasladar a la denunciante y al intervenido a esta dependencia policial formulando su respectiva denuncia.

- Acta de Constatación Policial, de fecha 18 de mayo de 2022, con resultado positivo, apreciándose cámaras de seguridad instaladas en un inmueble de tres niveles, consultando sobre la operatividad de las cámaras, las mismas que se encuentran operativas.

- Acta de entrega y recepción y constatación domiciliaria, de fecha 18 de mayo de 2022, donde se hace entrega de la boleta de venta electrónica N° B905- 00025932, junto a un cronograma de pago mensual de la operadora entel.

- Acta de búsqueda de información, mediante el cual se solicita información de la persona con el sobrenombre de OREJAS, con resultado negativo.

- Acta de visualización de teléfono celular, de fecha 19 de mayo de 2022, en el cual se deja constancia que el menor detenido no autoriza el deslacrado ni visualización del equipo celular. • Acta de constatación domiciliaria, en el domicilio donde se refiere viviría el adolescente denunciado.

- Acta de búsqueda de domicilio, de fecha 19 de mayo de 2022, donde se deja constancia que no se encontró el lote 12 de la manzana B.

- Declaración del efectivo policial Cristhian Agustín Silva Silva, de fecha 18 de mayo de 2022, que la que relata que en circunstancias que se encontraban realizando patrullaje preventivo en la jurisdicción de Andrés Araujo Moran se recepcionó una llamada telefónica de base orión, indicando que ha inmediaciones de los edificios de Puyango, se había suscitado un robo motivo por el cual nos constituimos de inmediato al lugar antes mencionado, presentes en la calle aviación se observó un grupo de personas de ambos sexos de aproximadamente diez personas en el cual tenían retenido a una persona de sexo masculino y un vehículo menor trimovil color rojo, los mismo que manifestaron que minutos antes la persona retenida habría participado en un robo a una persona de sexo femenino la cual le arrebataron su teléfono celular, tomando conocimiento de los hechos se procedió a reducir al intervenido, trasladándolo a la CPNP Andrés Araujo junto al vehículo menor, asimismo en el interior de la COMPNP Andrés Araujo Moran, se hizo presente la persona agraviada de Alexia Quiroz Chuyes (21), la misma que manifestó que la persona intervenida era uno de los participantes que le habían arrebatado su teléfono móvil reconociéndolo plenamente a la persona retenida y al vehículo menor. Asimismo, no se pudo realizar el acta de arresto ciudadano por motivo de que las personas en todo momento se negaron a brindar sus generales de ley por miedo a represalias por lo que se deja constancia para los fines correspondientes, que se le redujo a V.C.L.O de 17 años de edad, a cien metros del lugar de los hechos aproximadamente, señala que V.C.L.O de 17 años de edad, vestía un polo manga corta (tipo bivirí deportivo), de color negro con

frangas blancas con la marca NIKE, y número once en color blanco, también llevaba una trusa de diferentes colores, con sandalias rojas negras con blancas que tenía descripción SUPMC.

- Declaración del efectivo policial V.C.L.O de 17 años de edad, de fecha 18 de mayo de 2022, refiere que en circunstancias que nos encontrábamos realizando patrullaje preventivo en la jurisdicción de Andrés Araujo Moran se recepcionó una llamada telefónica por parte de nuestra base el cual indicaba que ha inmediaciones de los edificios en Andrés Araujo Moran, se habla suscitado un hecho delictivo (robo), motivo por el cual nos constituimos de inmediato al lugar antes mencionado, nos constituimos a la calle aviación se visualizó un grupo de diez personas de ambos sexos de aproximadamente, el cual tenían retenido a una persona de sexo masculino y a bordo de un vehículo menor trimovil de pasajeros, preguntando sobre lo sucedido las personas manifestaron que minutos antes la persona retenida habría sido uno de los participantes del robo del celular a una persona de sexo femenino, por tal motivo se procedió a reducir al intervenido, trasladándolo a la CPNP Andrés Araujo junto al vehículo menor, llegando al cabo de un rato la persona de Alexia Quiroz Chuyes (21), quien menciona ser la agraviada, la misma que manifestó que la persona intervenida era uno de los participantes que le habían arrebatado su teléfono móvil, reconociendo a la persona retenida como uno de los partícipes. Se dejó constancia de que el motivo de no haber realizado el acta de registro ciudadano fue porque las personas que detuvieron al detenido se negaron a brindar sus datos por miedo a represalias.

- Declaración de la agraviada Alexia Mailyn Quiroz Chuyes, de fecha 18 de mayo de 2022, quien refiere que, me encontraba caminando por los edificios con dirección hacia mi casa, donde por la picantería “Las Gaviotas” me percaté que se bajan dos hombres y uno de ellos que está vestido con chompa negra y una gorra blanca, me arrebató el teléfono y se sube a la moto, y el otro chico me quita la mochila, él estaba vestido con un biviér de negro y su short era de colores, tuvimos un forcejeo el cual me dejó marca en mi brazo izquierdo, el que manejaba solo vi que estaba con una capucha negra, después se subieron a la motokar roja, el cual pude distinguir la letra OM de su placa, después seguí la moto, justo estaba por ahí un amigo de mi papá que le dicen “orejón” del cual desconozco su nombre, el cual agarró un ladrillo y lo tiro hacia la moto, no sé si le cayó al conductor, pero la moto tambaleó aun así siguió avanzando, para después como a la altura del gallo más gallo donde preparan caldo, tiraron la mochila cerca de un villar, la recojo y sigo persiguiéndolos, ya a la salida de los edificios, la moto se topa con una camioneta negra el cual no pudo avanzar por que la calle era estrecha, es ahí que llega el amigo de mi papá que le había tirado un ladrillo llega a impedir que se escape el conductor, vi que los demás salieron corriendo siguiendo la misma ruta, y al cabo de unos pocos minutos llegó un motorizado a detener al chico, señala que Víctor César Lescano Ortiz (17), iba vestido con un short de colores con un biviér negro, era delgado, él fue con quien forcejee con mi mochila.

Declaración jurada simple de Alexia Mailyn Quiroz Chuyes, de fecha 18 de mayo de 2022, quien declara ser propietaria del celular marca Iphone 12 mini, color negro con case negro, chip de la operadora entel.

Declaración referencial de V.C.L.O de 17 años de edad, de fecha 18 de mayo de 2022, quien se abstiene de declarar haciendo uso de su derecho a guardar silencio.

- Consulta vigente requisitorias persona, del DNI N° 75136228, del adolescente V.C.L.O de 17 años de edad.
- Consulta vigente antecedentes, del DNI N° 75136228, del adolescente V.C.L.O de 17 años de edad.
- Certificado Médico Legal N° 004138 – L, de fecha 17 de mayo del año dos mil veintidós, practicado a Alexia Mailyn Quiroz Chuyes (21), el cual certifico lo siguiente: excoriaciones ungueales, dos (02), de 20 x 02 cm. y de 18 x 0.2 cm. rojiza, vertical, tumefacta, paralela entre sí que abarca desde brazo derecho tercio inferior hasta antebrazo derecho dos tercios superiores, cara lateral externa. equimosis rojiza de 02 cm. de dm. más tumefacción subyacente en flexura de codo izquierdo, concluyendo: 1) Presenta lesiones traumáticas recientes ocasionadas por agente contuso y por uña humana. 2) Por lo que requiere un (01) días de atención facultativa por tres (03) días de incapacidad médico legal, suscrito por el Médico Legista Martha Patricia Díaz Guevara.
- Certificado Médico Legal N° 004139 – L-R, de fecha 17 de mayo del año dos mil veintidós, practicado a V.C.L.O de 17 años de edad, concluyendo: 1) No presenta lesiones traumáticas externas recientes. 2) Por lo que no requiere de incapacidad médico legal. Suscrito por el Médico Legista Martha Patricia Díaz Guevara.
- Referencial policial, del DNI N° 75136228, del adolescente V.C.L.O de 17 años de edad, donde se observa que el mismo cuenta con varias denuncias por infracción a la ley penal.
- Ficha RENIEC de V.C.L.O de 17 años de edad, nacido el 22 de septiembre de 2004, con lo que se acredita su minoría de edad en el momento de los hechos.
- Copia del Expediente N° 00345-2022-0-2601-JR-FP-02, seguido en el Segundo Juzgado de Familia de Tumbes, en la cual se ha emitido la resolución Uno, de fecha 16 de febrero de 2022, que declara: promovida la investigación judicial a V.C.L.O de 17 años de edad, por la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves, en agravio de Jair Paul Jiménez Chore (23). habiendo declarado fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones a favor de V.C.L.O de 17 años de edad, dictando las medidas de comparecencia, 5) no cometer actos de connotación penal o calificados como infracción a la ley penal.
- RAZÓN de fecha 18 de mayo de 2022 de la asistente administrativo Elida Saavedra Sandoval, que da cuenta de los procesos del adolescente V.C.L.O de 17 años de edad, por infracción a Corte Superior De Justicia De Tumbes Segundo Juzgado De Familia Permanente De Tumbes 19 la ley penal, seguido en la Carpeta Fiscal N° 152-2018, 074-2020, 397-2021, 606-2021, adjuntando los reportes de dichas investigaciones.

Respecto del Inciso a) del Artículo en mención hay suficientes elementos probatorios que vinculan al adolescente como coautor de la comisión del acto infractor en tanto que la agraviada Alexia Mailyn Quiros Chuyes en su declaración dada a nivel policial indica que le pudo reconocer el adolescente Víctor César Lescano Ortiz como la persona que le arrebató la mochila, él estaba vestido con un bíviri de negro y su short era de colores, si bien el adolescente a nivel policial ha hecho el uso de su derecho de guardar silencio; además el adolescente no niega los hechos conforme se advierte de la audiencia en sede judicial.

De lo que se evidencia se cumple con el primer presupuesto, de existir suficientes elementos de convicción porque vinculan al adolescente razonablemente con la infracción a la Ley penal, esto es, existen elementos de convicción que nos permiten estimar razonablemente la comisión de la infracción a la ley penal vinculando al menor; como un hecho tipificado como delito previsto en el Artículo 188° -tipo base- en concordancia con los incisos 2) durante la noche o en lugar desolado, 4) “con el concurso de dos o más personas”, del artículo 189° del Código Penal – tipo agravado-, que lo vinculan a V.C.L.O de 17 años de edad, cumpliéndose con el presente requisito.

TERCERO: Respecto a la sanción penal; conforme a la naturaleza de la infracción penal investigada se encuentra tipificada en el Artículo 188° -tipo base- que establece: El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. en concordancia con los incisos 2) durante la noche o en lugar desolado, 4) con el concurso de dos o más personas, del artículo 189° del Código Penal – tipo agravado, que establece: La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: (...) 2. Durante la noche o en lugar desolado. 4. Con el concurso de dos o más personas. Por tanto se cumple con este requisito, toda vez que la prognosis de la pena, señala se sanciona con más de cuatro años de pena privativa de libertad como lo ha señalado el Ministerio Público;

CUARTO.- Finalmente el riesgo razonable de eludir a acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad. Debemos indicar que existen fundadas razones para presumir válidamente que el adolescente investigado, pueda eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad, puesto que se trata de un adolescente involucrado anteriormente en otro proceso penal, conforme ha sido expuesto en audiencia, la madre del adolescente indica que su hijo anteriormente se ha visto inmerso en procesos judiciales, lo que guarda relación con lo señalado por el Ministerio Público, adjuntando copia del expediente N° 00345-2022-0-2601-JR-FP-02, seguido en el Segundo Juzgado de Familia de Tumbes, en la cual se ha emitido la resolución Uno, de fecha 16 de febrero de 2022, que declara: promovida la investigación judicial a V.C.L.O de 17 años de edad, por la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves, en agravio de Jair Paul Jiménez Chore (23). habiendo declarado fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones a favor de V.C.L.O de 17 años de edad, dictando las medidas de comparecencia, 5) no cometer actos de connotación penal o calificados como infracción a la ley penal., medida que el adolescente ha incumplido involucrándose nuevamente en un proceso penal, de lo que se podría desprenderse que el adolescente investigado es proclive de cometer actos como los que son materia del presente proceso; asimismo, su progenitora tiene dirección distinta a la del adolescente y del acta de Constatación Policial y la declaración del menor investigado a nivel policial queda corroborado que el adolescente no vive con sus padres sino que vive con sus abuelos, ello también ha sido señalado por la madre del investigado, tal como consta en el acta de búsqueda de domicilio; por lo tanto, los principales obligados en su crianza no existirían y los abuelos del menor por su avanzada edad no garantizan que éste no evada a la justicia y que ellos ejerzan un estricto control en la crianza; además, en los actuados no se ha demostrado que se encuentre realizando estudios u oficio que

permita hacer prever que no existe ese riesgo razonable. También, se debe tener en cuenta que de la revisión del sistema integrado judicial, se advierte que el adolescente V.C.L.O de 17 años de edad, mantienen denuncias y/o medida socioeducativa impuestas, así también a nivel policial, cuenta con una serie de denuncias, a lo que se agrega, la forma y circunstancias en que se produjeron los hechos. Por tanto se desprende que el adolescente, presenta indicadores de reincidir en hechos similares, más aún si los responsables de su cuidado han demostrado falta de control y descuido.

QUINTO: En cuanto a la gravedad del hecho cometido, debe tenerse en cuenta la magnitud del daño causado que resulta ser el delito de Robo agravado, el cual reviste de gravedad al ser un delito pluriofensivo, del cual inclusive pueden derivar la comisión de otros delitos, por lo que la imposición de la medida de internamiento preventivo resulta ser proporcional a los hechos atendiendo la edad del investigado.

SEXTO: En cuanto al plazo de la internación preventiva, la norma establece una duración máxima de cuatro meses, prorrogable a dos meses más a solicitud del Ministerio Público, en el presente caso, el presente despacho considera que a efecto de garantizar la acción de la justicia y no obstaculice la averiguación de la verdad, estima que proporcionalmente debe establecerse la internación preventiva de tres meses del menor investigado, en el establecimiento de Centro Juvenil de Piura, en la ciudad de Piura, que permita además cumplir con el internamiento preventivo y en esta modalidad se ejecute una serie de actividades estructuradas adecuadas a los objetivos propuesto en cada programa. Brindando al adolescente atención integral a través de programas graduales, secuenciales, integrados, que actúen en forma evolutiva en el adolescente, hasta conseguir el autogobierno logrando su reinserción.

- c) Se condice lo resuelto preliminarmente (internamiento preventivo) con el pronunciamiento final en la sentencia emitida:

Si se condice, pues mediante la sentencia se impuso la medida de internamiento por el periodo de dos años al adolescente infractor V.C.L.O de 17 años de edad, como coautor de la infracción a la ley penal contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de Alexia Mailyn Quiros Chuyes (21), la misma que se cumplirá en el Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, centro que deberá expedir informes evolutivos cada tres meses a este despacho, y se computará desde la fecha de la imposición del mandato preventivo de internamiento, esto es, desde el 20 de mayo del 2022 hasta el 19 de agosto del 2022; sin perjuicio del beneficio de semilibertad que la Ley otorga.

- d) Análisis de la resolución que dispone el internamiento preventivo:

La resolución que dispone el internamiento preventivo del menor denunciado por el Ministerio Público, contiene una motivación aparente, pues si bien el resultado preliminar con el final se condicen; no obstante ello existe una ausencia de análisis entre los hechos denunciados y la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento

preventivo; pues si bien son muchos los factores que hacen determinante que deba aplicarse el internamiento preventivo, ello en atención a la conducta del menor en el proceso, la falta de medios probatorios que acrediten el arraigo y la no configuración de todos los presupuestos para la procedencia del internamiento; sin embargo estando a la excepcionalidad de la media y a fin de proteger el debido proceso y el interés superior del adolescente, debía realizarse un análisis de hechos conducente con el de derecho que haga viable explicar a las partes el porqué de la decisión tomada, la cual fue ratificada en sentencia, ello en aras de proteger al adolescente infractor, en atención a la falta de soporte familiar y reglas de conducta que lo hacían proclive a convertirse en un adulto con tendencia a delinquir; máxime si tratándose de menores de edad el principio de legalidad y motivación de la resolución debe verificarse paso a paso a fin de no vulnerarlos.

- e) ¿La resolución analizada contiene o no un adecuado razonamiento judicial, sustentado en un análisis de hechos y de derecho?

En la resolución analizada contiene razonamiento judicial formal pero no ideal, pues no existe un análisis de hechos sino solamente una precisión de los mismos; y, en cuanto al análisis de derecho, si bien estando a los medios probatorios de oficio recabados resultaba completa la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo; sin embargo logra advertirse una motivación aparente en cuanto al análisis de cada uno de estos que hace a la resolución emitida, una resolución con razonamiento formal pero no ideal, estando ello a la naturaleza de los procesos de infracción a la Ley Penal por la edad de los adolescentes y las implicancias de la aplicación del internamiento preventivo.

En suma la resolución analizada es formal por contener la precisión de todos los medios probatorios y concurrencia de los presupuestos que hacen factible la aplicación del internamiento preventivo; no obstante ello el defecto que contiene conforme a los lineamientos de la tesis realizada, es el hecho que no se advierte un análisis de los hechos que nos lleve directo a la aplicación de la norma correcta con un adecuado análisis del derecho como consecuencia del mismo, que haga congruente o consecuente el hecho denunciado a la decisión arribada de manera clara y precisa; teniendo en cuenta que la finalidad de las resoluciones judiciales independientemente de la materia que resuelvan, es que logren ser entendidas por las partes procesales y/o los intervinientes en los procesos judiciales, mucho más si en el caso de análisis estamos frente a una resolución que resuelve respecto al derecho a la libertad de un menor de edad.

1.7. FORMULACIÓN DE LISTA DE COTEJO, FICHA DE TRABAJO Y PROCESAMIENTO DE DATOS:

Para la elaboración de la lista de cotejo se ha tomado como referencia el análisis de los casos relacionados a la investigación; es decir las resoluciones que imponen el internamiento preventivo en los procesos de infracción a la Ley penal por el delitos de robo agravado, para lo cual se ha tenido en cuenta el razonamiento de hechos propuesto por Marina Gastón Abellán, el cual consta de dos niveles: razonamiento interno y razonamiento externo; así también dicho análisis se ha realizado teniendo en cuenta el razonamiento de derecho o razonamiento jurídico propuesto por Robert Alexy, el cual consta de dos niveles: justificación interna y justificación externa; a efectos de identificar si las resoluciones emitidas por Juzgado de Familia Permanente de Tumbes que aplicaron el internamiento preventivo en infracciones a la Ley Penal por el delito de robo agravado se encuentran debidamente motivadas: y, establecer así los lineamientos que debe contener una resolución que aplica el internamiento preventivo para considerar su razonamiento judicial como debidamente motivado.

2. Lista de Cotejo N° 01

Aspectos que deben observarse para un adecuado razonamiento judicial de las resoluciones que dictan internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes en los Procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado.

ASPECTOS	Opciones	
	SI	NO
Procedimiento desarrollado en las resoluciones que dictan internamiento preventivo		
a) ¿La resolución de internamiento preventivo se basa en un marco normativo?		
b) ¿El sustento de la resolución de internamiento preventivo se refleja en la decisión final emitida sentencia?		
Razonamiento de hechos		
d) ¿Existe una fundamentación interna del razonamiento de hechos?		
e) ¿Existe una fundamentación externa del razonamiento de hechos?		
f) ¿Se cuenta con un sustento de los hechos que den soporte a la resolución de internamiento preventivo emitido?		
g) ¿La resolución de internamiento preventivo tiene un informe del equipo multidisciplinario de soporte?		

h) ¿La resolución de internamiento preventivo cuenta con la constancia de antecedentes penales del menor investigado?		
Razonamiento de derecho		
i) ¿Se realiza una justificación interna de derecho de la aplicación del internamiento preventivo?		
j) ¿Se realiza una justificación externa de derecho de la aplicación del internamiento preventivo?		
k) ¿Se sustenta y fundamenta la concurrencia conjunta de los presupuestos que prescribe el art. 209° del CNA?		
l) ¿Se sustenta jurídica y fácticamente la procedencia del internamiento preventivo?		

3. Formulación de Ficha de Trabajo, procesamiento y análisis de datos:

La ficha de trabajo N° 01 se elabora a partir de la lista de cotejo 01, a fin de poder analizar si las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Familia de Tumbes cumplen con cada uno de los aspectos señalados para considerar la existencia de motivación de la decisión emitida. Para tal efecto se ha considerado que existe motivación si por lo menos cumple con los aspectos b), d), e), g), h), i), j), k). De no cumplir por lo menos dichos aspectos, se considerará que la motivación es deficiente. Así mismo señalar que los datos obtenidos son el resultado de cada una de la lista de cotejo y análisis de casos aplicados a cada uno de los expedientes o muestra objeto de la investigación. Finalmente, de cada expediente se obtiene un resultado (R) el cual puede ser Adecuado (A) o Deficiente (D), lo cual está relacionada con la hipótesis del presente trabajo.

Ficha de trabajo N° 01

Análisis de aspectos que deben observarse para un adecuado razonamiento judicial de las resoluciones que dictan internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes en los Procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado

N°	Criterio/ Expediente	b		D		E		g		h		i		j		k	
		si	no	si	No	si	No	si	no	Si	no	si	no	Si	no	si	no
1	785-2016-0-2601-JR-FP-01		X		X		X		X		X		X		X		X
2	1831-2016-0-2601-JR-FP-01	X			X	X		X			X		X		X	X	
3	1928-20160-2601-JR-FP-01		X	X		X		X		X		X		X		X	
4	05-2017-0-2601-JR-FP-01		X		X	X		X			X		X	X		X	
5	26-20170-2601-JR-FP-01		X		X	X			X		X		X	X		X	
6	1828-2018-0-2601-JR-FP-01		X		X	X			X		X		X	X		X	
7	1268-2018-0-2601-JR-FP-01		X	X		X		X		X		X		X		X	
8	966-2020-0-2601-JR-FP-01		X		X	X			X	X			X	X		X	
9	366-2021-0-2601-JR-FP-01		X		X	X		X		X			X	X		X	
10	966-2022-0-2601-JR-FP-01		X		X	X			X	X			X	X		X	

Fuente: Lista de cotejo de N° 01. Aspectos que deben observarse para una adecuada motivación de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo en los delitos de robo agravado emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes.

3.1. Resultados:

Se ha procedido a procesar la información obtenida del instrumento de recolección de datos primero de manera general y luego se procesan y analizan en razón de las dimensiones agrupa aspectos que deben observarse para una adecuada motivación de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo en los delitos de robo agravado emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes. Para la aplicación del análisis de caso se ha procedido al procesamiento de 10 resoluciones donde aplico el internamiento preventivo, teniendo 2 dimensiones de análisis, procesando en la lista de cotejo a 10 ítems. Los resultados dan una descripción señalando lo más sobresaliente para cada tabla que viene acompañado de una figura, siguiendo el orden de cada dimensión que se manifiestan en cada pregunta.

Tabla 01

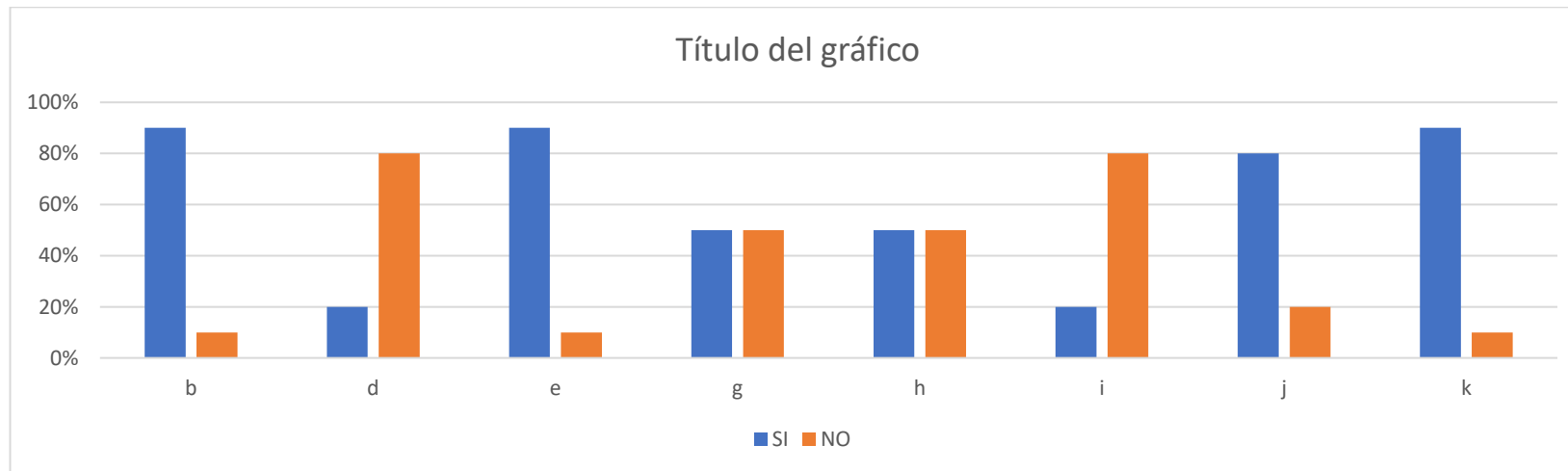
Análisis de aspectos que deben observarse para un adecuado razonamiento judicial de las resoluciones que dictan internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes en los Procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado

	B	d	E	g	H	I	J	k
SI	90%	20%	90%	50%	50%	20%	80%	90%
NO	10%	80%	10%	50%	50%	80%	20%	10%

Fuente: Ficha de trabajo N° 01

Figura 01

Análisis de aspectos que deben observarse para un adecuado razonamiento judicial de las resoluciones que dictan internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes en los Procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado



Fuente: Lista de cotejo de N° 01

Del estudio de los 10 expedientes considerados en la muestra, se ha podido observar en la tabla y grafico 01 que para los ítems trabajados se ha obtenido los siguientes resultados: b) ¿El sustento de la resolución de internamiento preventivo se refleja en la decisión final? 90%; d) ¿Existe una fundamentación interna del razonamiento de hechos? 20%; e) ¿Existe una fundamentación externa del razonamiento de hechos? 90%; g) ¿La resolución de internamiento preventivo tiene un informe del equipo multidisciplinario? 50%; h) ¿La resolución de internamiento preventivo cuenta con la constancia de antecedentes penales del menor? 50%; i) ¿Se realiza una justificación interna de derecho de la aplicación del internamiento preventivo? 20%; j) ¿Se realiza una justificación externa de derecho de la aplicación del internamiento preventivo? 80%; k) ¿Se sustenta y fundamenta la concurrencia conjunta de los presupuestos que prescribe el art. 209° del CNA? 0%.

De lo que se interpreta que solo dos expedientes de los 10 analizados cumplen con observar todos los aspectos establecidos como mínimo para considerar la existencia de una resolución judicial debidamente motivada; mientras que los otros 08 expedientes cumplen solo en parte con estos criterios; no garantizándose en este sentido que exista una mayoría de expedientes en los que para la aplicación del internamiento preventivo se haya emitido una resolución debidamente motivada con un adecuado análisis de hechos y de derecho que justifique el apartarse de la excepcionalidad del internamiento como ultima ratio.

Tabla 02

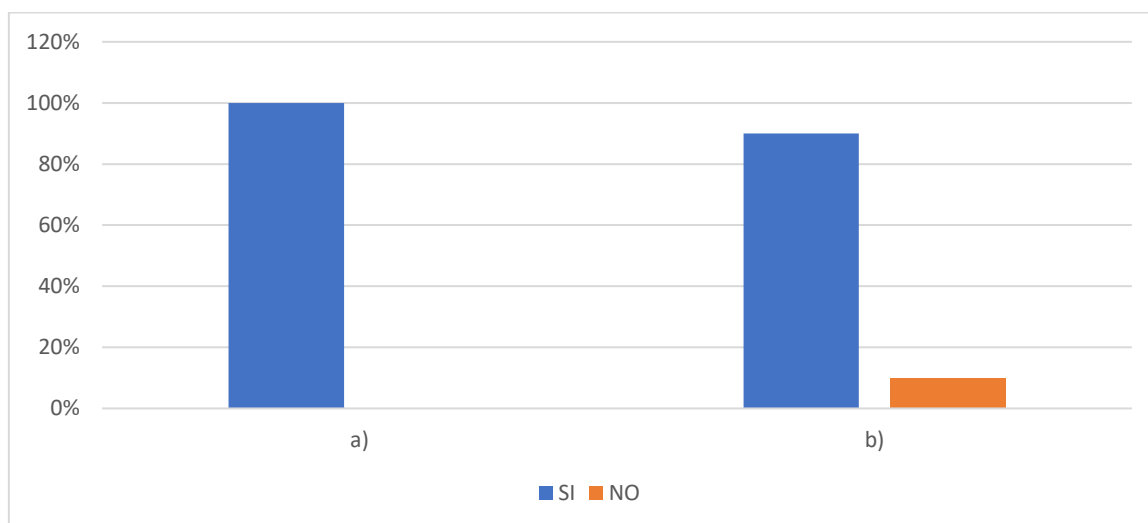
Análisis del Procedimiento desarrollado en las resoluciones que dictan internamiento preventivo:

	A	B
SI	100%	90%
NO	0%	10%

Fuente: Ficha de trabajo N° 01

Figura 02

Análisis del Procedimiento desarrollado en las resoluciones que dictan internamiento preventivo:



Fuente: Ficha de trabajo N° 01

Según la tabla 2 al igual que la figura 2 se observa que el 100% de los expedientes analizados según el ítem a) La resolución de internamiento preventivo se basa en un marco normativo; Sin embargo según el ítem b) el 90% de las resoluciones analizadas sus sustento se refleja en la decisión final emitida en la sentencia, mientras que el 10% de las resoluciones analizadas no se refleja sus sustento en la decisión final emitida en sentencia. Lo que se interpreta de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo analizadas es que si existe el marco normativo para la aplicación del mismo; sin embargo no refleja la motivación para la procedencia de dicha aplicación, toda vez que para motivar una resolución que limita el derecho a la libertad de menores como lo es el internamiento preventivo, no basta solo con señalar la norma que lo regula sino que debe analizarse la procedencia de la misma realizando un análisis interno y externo de los hechos y del derecho.

Tabla 03

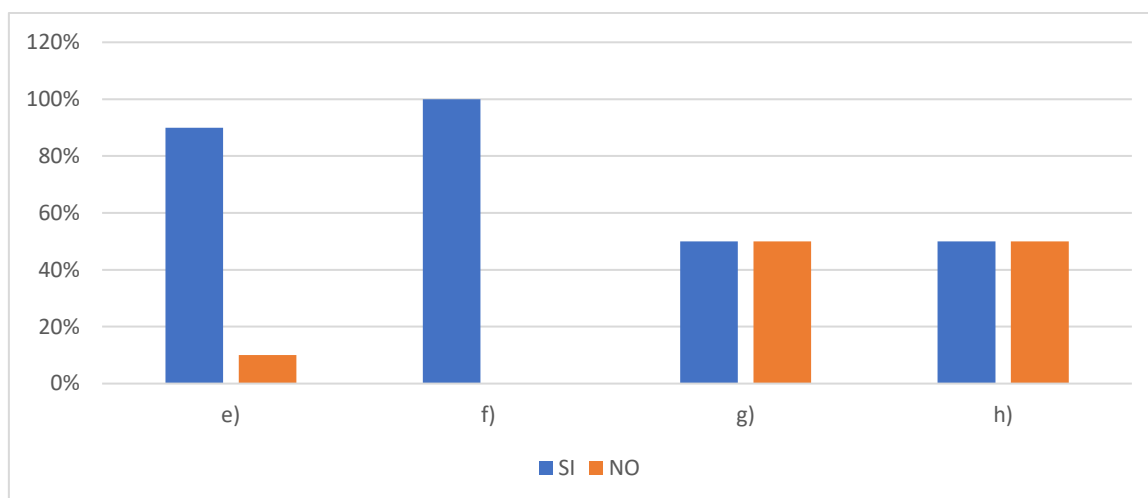
Análisis de los fundamentos de hecho en las resoluciones que aplican el internamiento preventivo

	d	e	f	g	h
SI	20%	90%	100%	50%	50%
NO	80%	10%	0%	50%	50%

Fuente: Ficha de trabajo N° 01

Figura 03

Análisis de los fundamentos de hecho en las resoluciones que aplican el internamiento preventivo



Fuente: Ficha de trabajo N° 01

Según la tabla 3 al igual que la figura 3 se observa que para el ítem d) solo 2 resoluciones de las 10 analizadas cuentan con fundamentación interna del razonamiento de hechos; según el ítem e) el 90% de las resoluciones analizadas cuentan con fundamentación externa del razonamiento de hechos; según el ítem f) el 100% de las resoluciones analizadas cuentan con un sustento de los hechos que dan soporte a la resolución del internamiento preventivo emitido; según el ítem g) se visualiza que el 50% de resoluciones analizadas cuentan con un informe del equipo multidisciplinario; y, finalmente el ítem h) señala que 50% de las resoluciones analizadas han tenido de soporte la constancia de antecedentes penales del menor investigado. Lo que grafica el análisis de esta dimensión es que en las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo analizadas casi en su mayoría no cuentan con una fundamentación interna del razonamiento de hechos, sino que solo realizan un análisis externo de los mismos, donde solo copian y pegan los fundamentos expuestos por el Ministerio Público en la denuncia presentada.

Tabla N° 04

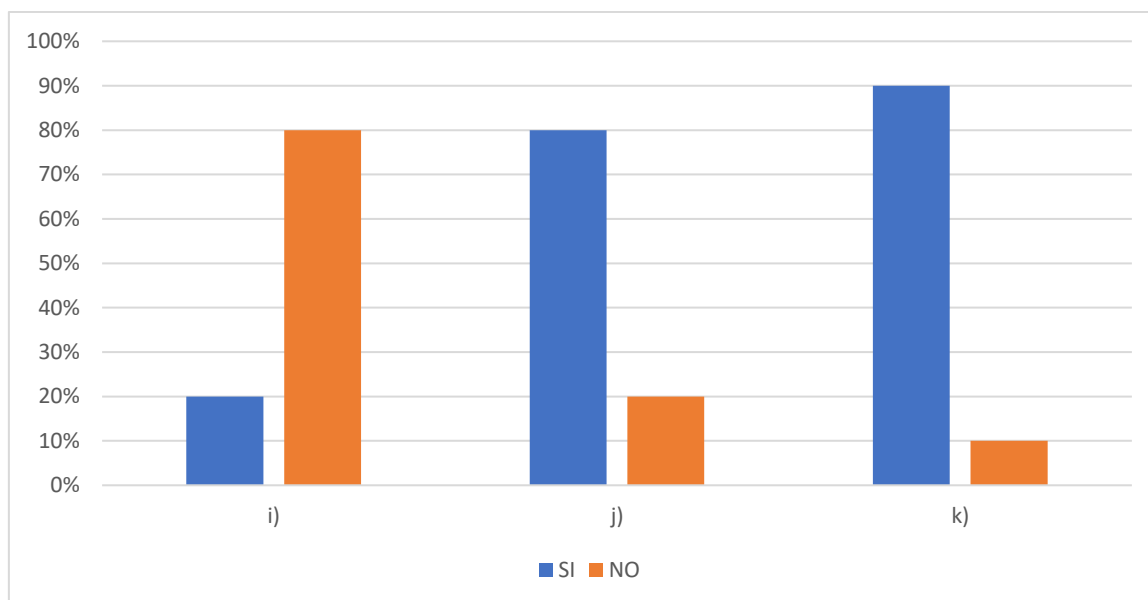
Análisis de los fundamentos de derecho en las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo

	I	j	K
SI	20%	80%	90%
NO	80%	20%	10%

Fuente: Ficha de trabajo N° 01

Figura 04

Análisis de los fundamentos de derecho en las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo



Fuente: Ficha de trabajo N° 01

Según la tabla 4 al igual que la figura 4 se observa que para el ítem i) solo en el 20% de las resoluciones analizadas se realiza una justificación interna del derecho, mientras que en el 80% o la mayoría no se realiza la justificación interna de derecho que haga viable y explicable la procedencia del internamiento preventivo; para el ítem j) el 80% de las resoluciones analizadas tienen una justificación externa del derecho, es decir citan literalmente cual es la norma jurídica aplicable; sin embargo no analizan la misma; para el ítem k) el 90% de las resoluciones analizadas si sustentan la concurrencia conjunta de los presupuestos que prescribe el art. 209° del CNA, lo cual es un análisis general de la procedencia del internamiento pero debido a la ausencia de una justificación interna del mismo hacen que las resoluciones analizadas no se encuentren debidamente motivadas. Lo que grafica el análisis de esta dimensión es que en las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo analizadas no existe motivación interna sustentatoria de derecho de la decisión tomada, sino solo una sustentación externa o superflua, que solo calza la figura, pero no la analiza ni sustenta por qué corresponde alejarse de la excepcionalidad de la medida.

CAPÍTULO IV

Propuesta de Intervención

El que los jueces de familia o los que hagan a sus veces, emitan resoluciones judiciales, debidamente motivadas, es un derecho al debido proceso, pues con ello se refleja una verdadera tutela efectiva por parte del estado; máxime si se trata de resoluciones limitativas de derechos, como es el caso de las resoluciones que disponen la aplicación del internamiento preventivo de menores de edad por la comisión de infracciones a la ley penal por el delito de robo agravado.

Así mismo, el obtener resoluciones motivadas deviene en una garantía frente a una posible arbitrariedad judicial, dado que ello garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el razonamiento antojadizo del Juez, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso.

En este contexto, habiéndose podido advertir del análisis de las resoluciones obtenidas del Juzgado de Familia Permanente de Tumbes en las que se aplicó el internamiento preventivo; y, estando a la comprobación de resultados, que los jueces de familia no vienen realizando una adecuada motivación de las resoluciones, pues si bien realizan una justificación externa en la misma, basada en la transcripción de los hechos denunciados y la precisión de la norma a aplicarse; sin embargo no se realiza el verdadero análisis, que es el análisis interno o justificación interna, que justifique el porqué de la procedencia del internamiento preventivo pese a ser una medida de última ratio; es que nace la necesidad de brindar una solución viable mediante el establecimiento de un estándar de motivación, a través del cual sea posible determinar cuándo una resolución mediante la cual se aplica el internamiento preventivo, se encuentra debidamente motivada.

En este escenario, mi propuesta de intervención justamente radica en ello, en el proporcionar una lista de cotejo que forma o configura un estándar de motivación, el que aplicado en una resolución que decidirá respecto a la procedencia o no del internamiento preventivo solicitado por el Ministerio Público, pueda reflejar que cuenta con una debida motivación, que garantice la tutela procesal efectiva y el debido proceso, pues resolverá respecto al derecho a la libertad de un menor de edad.

Es decir, entonces que el estándar que propongo a modo de lista de cotejo al contener directrices o parámetros que al ser considerados por los jueces dentro del desarrollo de la resolución que dispondrá o no el internamiento preventivo, reflejará la emisión de una resolución con una adecuada motivación. Por lo cual, es que la importancia o necesidad de mi propuesta, radica en

el que estándar de motivación establecido en mi lista de cotejo, pueda llegar a conocimiento de los jueces de familia o los que hagan a sus veces, no solo en el Distrito Judicial de Tumbes, en donde ya se comprobó su muy necesaria utilización, sino también en lo demás distritos judiciales del Perú, en los que existan Juzgados de Familia que tramitan y juzguen procesos de infracción a la Ley Penal, en los que muchas veces el Ministerio Público solicita el internamiento preventivo y el Juez debe decidir sobre la procedencia o no del mismo.

Conforme a lo acotado entonces, considero muy importante que la propuesta brindada por la tesista consistente en el establecimiento de un estándar de motivación de resoluciones a través de una lista de cotejo, pueda convertirse en una directiva interna del Poder Judicial que llegue a todos los Jueces de familia o los que hagan a sus veces, que tramiten y ejecuten procesos de infracción a la Ley Penal, para que pueda ser utilizada como un estándar en la aplicación a resoluciones que decidirán la procedencia o no del internamiento preventivo, a fin de obtener resoluciones debidamente motivadas. Para lo cual, a fin de lograr la emisión de dicha directiva, debe remitirse la propuesta de la tesista a la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de Planificación del Poder Judicial, para que pueda seguir el procedimiento para su revisión, aprobación por el Consejo Ejecutivo y posterior difusión, ello conforme a lo regulado en la Resolución Administrativa N° 000370-2020-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la cual aprobó la Directiva N° 000019-2020- CE-PJ denominada *Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos en el Poder Judicial*, que regula el proceso para la formulación, revisión, aprobación y difusión estandarizada de Documentos Normativos en el Poder Judicial; la cual en su numeral 6.1 establece que son documentos normativos todos aquellos destinados a organizar y ejecutar actos de administración interna en el Poder Judicial; y, en este contexto, la Directiva es un instrumento de carácter interno que contiene la descripción documentada de la forma específica de ejecución de un proceso, detallando la secuencia de los pasos a seguir en forma lógica y concatenada, incluyendo al responsable y los recursos necesarios para su ejecución.

Por lo cual, a fin de poder presentar la propuesta de la tesista ante a la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de Planificación del Poder Judicial, procedo a precisar conforme a lo regulado en el numeral 6.4 de Directiva N° 000019-2020- CE-PJ, el Informe de sustentación para la presentación del proyecto normativo, el cual constituye el documento que expresa las motivaciones de la propuesta normativa, describiendo:

INFORME DE SUSTENTACIÓN					
a. Situación problemática actual que se pretende resolver.	b. La existencia de vacío en la normatividad vigente o la necesidad de regular una norma general para fines operativos.	c. El sustento normativo, precisando de ser el caso, el documento normativo que se modificaría o derogaría.	d. Los beneficios que generaría la implementación del documento normativo.	e. Los costos que demandaría su implementación, de ser el caso.	f. En el caso de las actualizaciones, debe señalar las modificaciones introducidas en el documento.
<p>El obtener resoluciones judiciales, debidamente motivadas, es un derecho de todas las personas, pues con ello se refleja una verdadera tutela efectiva por parte del estado; máxime si se trata de resoluciones limitativas de derechos como es el caso de las resoluciones que disponen la aplicación del internamiento como medida preventiva a menores de edad investigados por infracciones a la ley penal.</p> <p>No obstante ello, la realidad judicial es muy diferente, pues muchos son los casos en que los juzgadores no analizan los hechos y verifican el derecho aplicable a las resoluciones con las que disponen la aplicación del internamiento como medida preventiva; y, es mas en ocasiones por no</p>	<p>En el presente caso, existe una necesidad de establecimiento de un estándar de motivación de resoluciones que aplican el internamiento preventivo a menores de edad por la comisión de una infracción a la Ley Penal, ello a fin de asegurar al investigado y a la sociedad en general que se ha emitido una resolución debidamente motivada que resolviendo un pedido concreto a sustentando debidamente la procedencia o no del pedido de internamiento preventivo formulado por el Ministerio Público.</p> <p>En este contexto, la propuesta de la tesista de un estándar de motivación en forma de una lista de cotejo, la cual se anexa al presente cuadro, es que la misma pueda ser regulada como una directiva interna del Poder Judicial que deba ser</p>	<p>La Constitución Política del Perú, en el artículo 139, inciso 5), prescribe: <i>la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite</i>; <i>precisando que el juez debe argumentar expresamente de la ley aplicable y los fundamentos de hecho que las justifican fácticamente</i></p> <p>La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que la motivación «<i>es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones</i></p>	<p>Al establecerse un estándar de motivación de resoluciones a través de una lista de cotejo establecida, se va a beneficiar tanto al adolescente investigado y sus familia como al Poder Judicial; pues el investigado obtendrá una resolución debidamente motivada y entendible tanto sustantiva como jurídicamente; y, el Poder Judicial evitara de manera progresiva los diversos cuestionamientos que existen a las resoluciones que aplican el internamiento preventivo a menores</p>	<p>Al ser la propuesta establecer un estándar de motivación con una lista de cotejo, a través de una directiva interna del Poder Judicial, que podrá ser difundida por los medios tecnológicos que ya posee el Poder Judicial (correo electrónico, página web oficial), no demandará costos para su difusión y puesta en marcha.</p>	<p>Con la propuesta de directiva de establecimiento de un estándar de motivación con una lista de cotejo no se estará actualizando ni modificando ningún documento. Pues es una propuesta nueva no contemplada en ningún documento normativo existente.</p>

<p>decir casi siempre se utiliza el internamiento como medida preventiva a fin de obtener que el adolescente acepte su culpabilidad en el hecho que se le imputa o forzarlo a estar presente en la investigación, vulnerando con ello el principio de inocencia y el interés superior del adolescente, así como la regla principal de la excepcionalidad en la aplicación del internamiento como medida preventiva. Evidenciando ello que se emiten resoluciones que no cuentan una debida motivación que haga visible el respeto al debido proceso y la tutela procesal efectiva.</p>	<p>utilizada por los Jueces de Familia o los que hagan a sus veces, a fin de emitir resoluciones debidamente motivadas que hagan visible el respecto al interés superior del niño, el debido proceso y a la tutela procesal efectiva.</p>	<p><i>que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática (...). En este sentido, la argumentación de un fallo (...) debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso».</i></p> <p>El Tribunal Constitucional en la STC 1230-2002-HC/TC ha sostenido respecto a la motivación de las resoluciones que: <i>«La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y</i></p>	<p>de edad, pues las mismas en su gran mayoría jamás explican el porqué de la procedencia del mismo, sino únicamente precisan los hechos y cuál es la norma aplicarse, alejándose del respecto al interés superior del niño y de los tantos convenios suscritos por el Perú en materia de menores investigados por infracciones a Ley Penal. Así mismo el Poder Judicial podrá ver unificado el criterio de los Jueces de Familia que tan necesario resulta, pues mientras unos consideran la excepcionalidad de la aplicación de esta media otros la aplican de manera desmedida dando un trato de adultos a los menores, cuando muchas veces ni siquiera se configuran todos los presupuestos para la procedencia del internamiento preventivo.</p>		
--	---	---	---	--	--

		<p><i>lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa (...) Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver».</i></p> <p>Por otro lado, con la propuesta de directiva Establecimiento de estándar de motivación a través de lista de cotejo, no se pretende modificar ni derogar ningún documento normativo.</p>	<p>En suma los beneficios son cualitativos y cuantitativos, pues beneficiaran a los menores investigados y al Poder Judicial en cantidad de casos resueltos de manera debidamente motivada y en calidad de las resoluciones que se emitirán en dicho sentido.</p>		
--	--	--	---	--	--

Estándar de motivación mediante Lista de Cotejo

Aspectos que deben observarse para un adecuado razonamiento judicial de las resoluciones que dictan internamiento preventivo emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes en los Procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado.

ASPECTOS	Opciones	
	SI	NO
Procedimiento desarrollado en las resoluciones que dictan internamiento preventivo		
a) ¿La resolución de internamiento preventivo se basa en un marco normativo?		
b) ¿El sustento de la resolución de internamiento preventivo se refleja en la decisión final emitida sentencia?		
<i>Razonamiento de hechos</i>		
d) ¿Existe una fundamentación interna del razonamiento de hechos?		
e) ¿Existe una fundamentación externa del razonamiento de hechos?		
f) ¿Se cuenta con un sustento de los hechos que den soporte a la resolución de internamiento preventivo emitido?		
g) ¿La resolución de internamiento preventivo tiene un informe del equipo multidisciplinario de soporte?		
h) ¿La resolución de internamiento preventivo cuenta con la constancia de antecedentes penales del menor investigado?		
<i>Razonamiento de derecho</i>		
i) ¿Se realiza una justificación interna de derecho de la aplicación del internamiento preventivo?		
j) ¿Se realiza una justificación externa de derecho de la aplicación del internamiento preventivo?		
k) ¿Se sustenta y fundamenta la concurrencia conjunta de los presupuestos que prescribe el art. 209° del CNA?		
l) ¿Se sustenta jurídica y fácticamente la procedencia del internamiento preventivo?		

CONCLUSIONES

1. De acuerdo al primer objetivo específico de la tesis, se ha podido calificar que el razonamiento judicial de hechos de las resoluciones analizadas que aplicaron el internamiento preventivo en proceso de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado, emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes, no cuentan ni se sustenta en un razonamiento interno de hechos, que justifique el aplicar esta medida de ultima ratio, sino que por el contrario las resoluciones analizadas han podido evidenciar que en la praxis solo se realiza un análisis externo de los hechos, es decir solo se transcribe lo que el Ministerio Público precisa en su denuncia, mas no se segrega de manera individual para analizar los mismos a fin de garantizar el debido proceso; pese a que estamos frente a la medida preliminar más gravosa que se pueda imponer a un menor denunciado por infracción a la Ley Penal, al ser considerada esta como una medida de ultima ratio a la que debe recurrirse siempre y cuando la necesidad de su imposición sea trascendente para asegurar la concurrencia y colaboración del adolescente investigado durante el proceso que se le sigue y se aplique dentro con una resolución debidamente motivada.
2. De acuerdo al segundo objetivo específico de la tesis, se puede describir que el razonamiento judicial de derecho de las resoluciones analizadas que aplicaron el internamiento preventivo en proceso de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado, emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes solo contiene una justificación externa, mas no una justificación interna; es decir, solo precisan o invocan la norma a aplicarse al caso concreto, pero no analizan la aplicación de la misma, ni sustentan por qué no debe alejarse el caso en concreto a su aplicación o por qué resulta indefectiblemente aplicable la norma pese a la excepcionalidad de la medida de internamiento preventivo, vulnerando con ello la garantía procesal y el derecho de toda persona de obtener del Juzgador una resolución debidamente motivada, que se sustente en un razonamiento derecho que no solo cite la norma precisando los artículos del Código de Niños y Adolescentes y del Código Penal, sino que se analice la norma en sí, su procedencia y concurrencia en los hechos analizados; configurándose de este modo una fundamentación objetiva que analiza, aplica e interpreta la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos establecidos en el art. 209° del Código de Niños y Adolescentes que deben concurrir copulativamente para la aplicación del internamiento preventivo, el cual también debe ir de la mano con el respeto al interés superior del niño.

3. De acuerdo al tercer objetivo específico de la tesis, puede precisarse que con la lista de cotejo elaborada si se ha podido establecer un estándar de motivación para las resoluciones que aplican el internamiento preventivo, las cuales conforme al Juzgado elegido, son emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes; habiéndose logrado establecer que los estándares o ítems que mínimamente debe contener una resolución que aplica el internamiento preventivo son: 1) Que el sustento de la resolución de internamiento preventivo se refleje en la decisión final que se emitida en sentencia. 2) que la resolución contenga una fundamentación interna del razonamiento de hechos. 3) que la resolución contenga una fundamentación externa del razonamiento de hechos. 4) que la resolución tenga como soporte un informe del equipo multidisciplinario. 5) que la resolución cuente para su emisión con la constancia de antecedentes penales del menor investigado. 6) que la resolución contenga una justificación interna de derecho. 7) que la resolución contenga una justificación externa de derecho; y, 8) que a resolución que aplique el internamiento preventivo sustente y fundamente la concurrencia conjunta de los presupuestos que prescribe el art. 209° del CNA.
4. De acuerdo al Objetivo general, se concluye que las resoluciones que aplicaron el internamiento preventivo en procesos de infracción a la Ley penal por el delito de robo agravado en el periodo del 2016 al 2022, emitidas por el Juzgado de Familia Permanente de Tumbes, no cuentan con una motivación acorde a nuestra normatividad y convenios internacionales suscritos por el Perú, pues no analizan de manera adecuada (interna y externa) los hechos objeto de denuncia ni justifican interna y externamente la normativa a aplicarse, y, no precisan la justificación del porque corresponde alejarse de la excepcionalidad de ultima ratio de la medida, a fin de entregar a las partes una resolución acorde al proceso especial que se tramita para menores investigados por infracción a la Ley Penal, pese a que ello resulta obligatorio en un proceso donde se encuentra en juego la limitación del derecho a la libertad de menores de edad que por su propia edad son más vulnerables que los adultos. Por lo cual, la tesista considera, que resultaría un aporte muy importante que se pueda dar a conocer a los Jueces de Familia del Distrito Judicial de Tumbes la lista de cotejo elaborada por la tesista que contienen los estándares que conforme al análisis realizado de los libros leído y más deben respetarse y aplicarse en las resoluciones que aplican el internamiento preventivo, ello a fin de garantizar obtener resoluciones debidamente motivadas.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda la aplicación del estándar de motivación a través de la lista de cotejo elaborada por la tesis, la cual conforme al aporte precisado en la tesis, debería convertirse en una directiva interna del Poder Judicial, a fin que los Jueces de familia o lo que hagan a sus veces, tengan un modelo o esquema de trabajo, el cual aplicándolo al caso concreto pueda justificar la aplicación o no del internamiento preventivo en procesos de infracción a la ley penal por el delito de robo agravado.
2. Se recomienda la realización de un Pleno Jurisdiccional en materia de menores infractores, cuya finalidad sea la unificación de criterios en cuanto a la procedencia de la aplicación de la medida cautelar de internamiento preventivo teniendo en cuenta la debida motivación de las resoluciones.
3. Se recomienda la capacitación por parte del Poder Judicial de los jueces de familia o los que hagan a sus veces, que tengan a su potestad la tramitación y ejecución de los procesos de infracción a la Ley Penal, en cuanto a la debida motivación de las resoluciones que aplican el internamiento preventivo, enseñándoles y motivándolos a no solo plasmar la norma que calza al hecho en sí, sino a analizar la doctrina, la jurisprudencia y los convenios y tratados internacionales suscritos por el Perú en temas de menores sometidos a la Ley Penal, a fin que pasen de emitir resoluciones con análisis externo a poder emitir resoluciones con análisis interno y justificación interna de derecho, que pueda garantizar el respeto del interés superior del niño y adolescente, y que no se realice un prejuzgamiento de los menores investigados sino que se garantice la realización de un debido proceso, que tenga presente la finalidad del proceso de infracción a la ley penal y las garantías constitucionales e internacionales que protegen a los menores de edad.
4. Se recomienda que, el Presidente del Poder Judicial, exhorte a los Jueces de Familia o quienes hagan a sus veces, a cumplir y respetar los Convenios y tratados internacionales suscritos por el Perú en cuanto a la justicia penal de menores, los mismos que deben ser analizados y aplicados a las resoluciones que emitan.
5. Se recomienda también que las políticas públicas que emita el Perú en temas de menores infractores a la ley penal, ataquen en sus regulaciones y publicaciones, las causas de las infracciones a la ley penal por parte de los menores de edad, a fin que las mismas estén orientadas a la prevención más que a la represión y sanción de estos menores.

REFERENCIAS

Bibliografía

1. Alarcón Requejo Gílmer y Balcázar Quiroz José, ponencia en el IV Congreso Internacional en Filosofía del Derecho y Análisis económico, denominada: *Populismo punitivo y ética judicial. A propósito de la responsabilidad restringida del agente de más de dieciocho y menos de veintiún años del Art. 22 del Código Penal*.
2. Alvarado Reyes, Juana Elvira y García Huayama, Juan Carlos. El internamiento preventivo en el sistema penal juvenil peruano, Lex & Iures Grupo Editorial, Lima Perú, 2014. Pp. 55.
3. Bravo Gamarra Daysi E.. El adolescente infractor en el Perú. Lima – Perú. Jurista Editores E.I.R.L. Enero 2014.
4. Castro Villacorta, Jorge Luis. El menor Infractor y la Justicia Penal Juvenil. 2015. [Ubicado el 05. VI. 18] Obtenido de: <http://jorgeluiscastrovillacortaabogados.blogspot.com/2015/09/elmenor-infractor-y-la-justicia-penal.html>.
5. Código de Niños y Adolescentes, y su modificatoria con el Decreto Legislativo 1204.
6. Constitución Política del Perú.
7. Chunga Lamonja Fermín G. El adolescente infractor y la ley penal. Editorial Grijley E.I.R.L, 2007.
8. Declaración Universal de los Derecho Humanos.
9. Declaración de los Derechos del niño, niña y adolescente
10. El Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa es desarrollado por la Fundación Terre Des Hommes Lausanne (Suiza) desde el 2005.
11. Gastón Abellán, Marina: Los Hechos en el Derecho, bases argumentales de la prueba – Tercera Edición, Marcial Pons 2010.
12. Robert Alexy: Teoría de la Argumentación Jurídica, la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica – Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo. Palestra Editores – Lima 2007.

ANEXOS

1. Estándar de motivación mediante Lista de Cotejo

ASPECTOS	Opciones	
	SI	NO
Procedimiento desarrollado en las resoluciones que dictan internamiento preventivo		
a) ¿La resolución de internamiento preventivo se basa en un marco normativo?		
b) ¿El sustento de la resolución de internamiento preventivo se refleja en la decisión final emitida sentencia?		
Razonamiento de hechos		
d) ¿Existe una fundamentación interna del razonamiento de hechos?		
e) ¿Existe una fundamentación externa del razonamiento de hechos?		
f) ¿Se cuenta con un sustento de los hechos que den soporte a la resolución de internamiento preventivo emitido?		
g) ¿La resolución de internamiento preventivo tiene un informe del equipo multidisciplinario de soporte?		
h) ¿La resolución de internamiento preventivo cuenta con la constancia de antecedentes penales del menor investigado?		
Razonamiento de derecho		
i) ¿Se realiza una justificación interna de derecho de la aplicación del internamiento preventivo?		
j) ¿Se realiza una justificación externa de derecho de la aplicación del internamiento preventivo?		
k) ¿Se sustenta y fundamenta la concurrencia conjunta de los presupuestos que prescribe el art. 209° del CNA?		
l) ¿Se sustenta jurídica y fácticamente la procedencia del internamiento preventivo?		